

Congreso Ideológico del Partido Colorado (C.I.P.C.)

Junio de 2011 a Junio de 2012

Indice

Integración de los equipos de trabajo	5
Mensaje Secretario General 2011, Dr. Ope Pasquet	7
Mensaje Secretaria General 2012, Dra. Martha Montaner	10
Manifiesto final del Congreso Ideológico	15
Informe Secretaría Técnica N°1 Concepciones Ideológicas Globales: Democracia, Republicanismo y Liberalismo como pilares del Partido Colorado del siglo XXI	21
Informe Secretaría Técnica N° 2 La Educación como motor para la Igualdad de Oportunidades	43
Informe Secretaría Técnica N° 3 Hacia una Sociedad más Próspera: Crecimiento sostenido con Equidad	73
Informe Secretaría Técnica N° 4 Hacia una Sociedad más Libre: Mejor Ciudadanía Civil, Control del Poder, Seguridad y Transparencia	89
Informe Secretaría Técnica N°5 Hacia una Sociedad más Justa e Integrada: Mejor Ciudadanía y Políticas Sociales	109
Informe Secretaría técnica N°6 Hacia un Estado Moderno, Garante del Desarrollo Ciudadano	131
Informe Secretaría Técnica N° 7 Hacia una Renovada Agenda Republicana: Mejor Ciudadanía Política	147
Informe Secretaría Técnica N°8 Uruguay en el Mundo, Política Exterior	163

Integración de los Equipos de Trabajo:

Comité Ejecutivo Nacional :

Titulares:

Max Sapolski - Secretario General
Fitzgerald Cantero - Prosecretario General
José Amorín
Daniel Bianchi
Pedro Bordaberry
Santiago Campiglia
Germán Cardoso
Germán Coutinho
Alberto Iglesias
Eduardo Malaquina
Graciela Matiaude
Martha Montaner
William Panighini
Ope Pasquet
Fabián Pérez
Yeanneth Puñales
Walter Riesgo
Roberto Yavarone

SUPLENTE

Ricardo Acosta
Maximiliano Campo
Alejo Fernández Chávez
Pablo Ferrari
Sergio Guastavino
Horacio Lampariello
Andrea Maddalena
Ronald Pais
Ruben Rodríguez
Diana Saravia
Walter Verri
Jesús Viera

Comisión Especial, asesora del Comité Ejecutivo Nacional en todo lo concerniente al desarrollo y organización general del Congreso Ideológico

Titulares:

Robert Silva (Coordinador)
Conrado Rodríguez (Secretario)
Fitzgerald Cantero
Amilcar Perea
Andrea Maddalena
Daniel Minicelli
Gustavo Toledo
Tabare Viera

Alternos:

Felipe Schipani
Martín Perez
Romana Ferrer
Alberto Iglesias
Pablo Ferrari
Ariel Amen
Carlos Flores
Alberto Scavarelli

Se deja constancia de que integraron la comisión, habiendo presentado renuncia a sus funciones, los Señores Oscar Ventura, Manuel Flores Silva, Eduardo Alonso, las Sras. Gloria Robaina y Carolina Ache.

SECRETARÍAS:

SECRETARIA TECNICA N°1 Marco Ideológico
Presidente: Kimal Amir. Suplente: Andrés Moura.
Vicepresidente: Fitzgerald Cantero

SECRETARIA TECNICA N°2 Educación
Presidente: Teresita González
Vicepresidente: Fanny Arón (hasta marzo de 2012) Jorge Carbonell

SECRETARIA TECNICA N°3 Prosperidad y Desarrollo
Presidente: Isaac Alfie
Vicepresidente: Juan Llantada

SECRETARIA TECNICA N°4 Libertad
Presidente: Guillermo Maciel
Vicepresidente: Santiago Torres

SECRETARIA TECNICA N°5 Políticas Sociales
Presidente: Alfredo Solari
Vicepresidente: Dante Nieves

SECRETARIA TECNICA N°6 Rol del Estado
Presidente: Julio Herrera
Vicepresidente: Milo Ojeda

SECRETARIA TECNICA N°7 República
Presidente: Alberto Iglesias
Vicepresidente: Carlos Fedele

SECRETARIA TECNICA N°8 Política Exterior

Reafirmación en la renovación

Durante un año, desde mediados del 2011 hasta mediados del 2012, el Partido Colorado trabajó en lo que fue su primer Congreso Ideológico, cumpliendo así con las disposiciones introducidas en su Carta Orgánica por la reforma del año 2007.

Centenares de personas asistieron durante ese lapso a las reuniones de las varias Secretarías en las que el Partido organizó la labor, o recibieron y enviaron documentos a través de las páginas web creadas especialmente para la ocasión. A nadie se le preguntó si estaba afiliado al Partido, ni a qué sector pertenecía, ni qué cargos había ocupado ni cuántos votos tenía: todos los que quisieron participar pudieron hacerlo, libremente y en pie de igualdad con los demás.

El resultado de ese esfuerzo colectivo son estos documentos que hoy se presentan a la ciudadanía. Todos ellos fueron puestos a votación y aprobados por el Congreso, por unanimidad en algunos casos y apenas con algunos votos en contra en los demás. El hecho es importante y debe ser destacado, porque pone de manifiesto -una vez más- la profunda y sólida unidad ideológica de nuestra colectividad política. Podrá haber matices de opinión y diferencias puntuales en cuestiones concretas, pero en las grandes orientaciones políticas y en sus fundamentos filosóficos, lo que hay son grandes coincidencias entre los colorados todos.

A partir de una concepción liberal del hombre, de la sociedad y del Estado, el Partido ratifica su compromiso de siempre con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Reafirmando con orgullo la vigencia del Batllismo, el Partido reitera que lo que busca es el desarrollo económico con justicia social (concebida ésta de manera dinámica, en atención a los cambios de la sociedad y la cultura), para lograr lo cual la presencia y la acción del Estado son indispensables. A esos postulados tradicionales debe añadirse hoy el compromiso con la preservación del medio ambiente, reclamado por nuevas generaciones que expresan con energía la sensibilidad de su tiempo. En el plano internacional, el Partido reclama invariable apego al Derecho Internacional y sostiene que el mandato constitucional de procurar la integración económica y social con los Estados de América Latina, debe cumplirse sin menoscabo de la personalidad propia de la República en el campo político, ni de su amplio rela-

cionamiento con todos los países del mundo amantes de la paz y respetuosos del Derecho.

Especial valor tiene la unidad partidaria al pie de los grandes principios e ideales que definen nuestra identidad histórica, en momentos en que el Partido vive un profundo y fecundo proceso de renovación. Los líderes de hoy no eran tales hace diez años. Los sectores en que hoy se articula el Partido no existían siquiera hace diez años. Los jóvenes de menos de treinta años, que hoy integran todos los órganos del Partido y llegan a ellos a través de sus propias y multitudinarias elecciones, se contaban con los dedos de las manos en la Convención Nacional de hace diez años. Que en estas circunstancias el Partido ratifique su identidad ideológica, como lo hizo de manera clara y contundente en su primer Congreso, constituye una formidable demostración de vitalidad y continuidad de la gloriosa colectividad de Rivera, de la Defensa y de Batlle y Ordóñez.

No está demás repetir aquí lo que tantas veces se dijo, en el curso del año de trabajo que culminó con la aprobación de los documentos que ahora se publican: la tarea del Congreso era la de examinar y recrear, con ideas y palabras de hoy, los principios de siempre; no la de proponer un programa de gobierno. El programa de gobierno, con las debidas respuestas a los problemas y demandas que plantea la coyuntura nacional, será elaborado después de las elecciones internas del año próximo, por las nuevas autoridades partidarias. La labor del Congreso preparó el terreno para esa etapa ulterior, afirmando las ideas generales sobre las cuales se construirán, después, las soluciones y propuestas particulares.

Para finalizar esta breve introducción, creo pertinente reproducir aquí algunos párrafos del Programa de Principios de 1983, “Por Un Uruguay para todos”, que a mi juicio conservan plena vigencia. “El Batllismo, como doctrina, constituye el núcleo inspirador del Partido Colorado, pero no ha sido ni es excluyente de ningún ciudadano que comparta sus ideales —sea él colorado o no— pues su obra está orientada al bien común y a la tolerancia. El Batllismo no es un artículo importado, ni un catecismo dogmático, ni una especulación doctrinaria despegada de nuestra realidad. Es el fruto maduro de la evolución de un Partido que, salvo breves interrupciones, gobernó al país durante noventa años. (...) Sin perjuicio de su inquebrantable fidelidad a los grandes principios que la inspiran, nuestra colectividad aspira a enriquecer continuamente su acervo doctrinario”.

Orgullosos de nuestra identidad, libres de dogmas, con la mente abierta y el oído atento “al rumor del tiempo que aún no ha sido”, los colorados presentamos nuestras ideas a la consideración de la ciudadanía.

Dr. Ope Pasquet

Secretario General del Partido Colorado 2011/2012

Palabras pronunciadas por la Secretaria General Dra. Martha Montaner en la sesión final del Congreso Ideológico del Partido Colorado (C.I.P.C.)

Señoras y señores legisladores nacionales, señoras y señores ediles, alcaldes, concejales, miembros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, miembros integrantes de los diecinueve Comités Ejecutivos Departamentales.

Colorados y coloradas todos, que hoy están aquí presentes en ocasión de una jornada enriquecedora del Partido Colorado, en la cual estamos sesionando en forma simultánea y presencial, no solamente en este recinto, sino también en los departamentos de Rivera y Salto.

A todos ustedes quiero comunicarles y decirles que realmente estamos dando un paso más adelante, un paso más en lo que es la modernización del Partido Colorado, en el cumplimiento de la Carta Orgánica, de su artículo 51, que establece realizar el Congreso Nacional Ideológico del Partido Colorado.

Congreso que ha contado con una organización extraordinaria, a la cual debemos agradecer y poner énfasis por la dedicación y la calidad de la comisión organizadora representada en esta mesa, en ellos vaya el agradecimiento a todos los demás miembros, en los nombres de Robert Silva su Coordinador y Conrado Rodríguez su Secretario, muchísimas gracias.

Gracias por el empeño y apoyo, que pusieron en un Congreso que no se limitó simplemente a reducirse a jornadas o sesiones encerradas en la Casa del Partido Colorado en Montevideo, sino que tuvo una militancia y una movilización a nivel nacional.

Este Congreso Ideológico a través de sus ocho Secretarías Técnicas recorrió el país entero, dieciséis departamentos en reuniones presenciales, el resto también en reuniones a través de internet a distancia, haciendo que más de 10.000 uruguayos pudieran participar en el rico debate de aporte de ideas y en la polémica, y en lo que son los insumos fundamentales para un Partido Político.

Una puesta a punto y al día, un Partido en serio como es el Partido Colorado a través del debate de sus ideas, principios y valores para una sociedad que espera una respuesta, como esperan hoy todos los uruguayos.

Sinceramente, debo decirles que luego de este Congreso nos sentimos orgullo-

sos de ser colorados.

El Congreso Ideológico arroja como primera conclusión que las Ideas, los Principios y los Valores de esta colectividad son imperecederos, vigentes y que aquellas ideas que sembraron hombres y mujeres por más de dos siglos hoy, aggiornadas y transformadas, perduran en el tiempo con la legitimación de que los hechos y la sociedad reclaman de este Partido la solución.

En el concepto académico de lo que es un partido político, y al decir del pensador italiano Giovanni Sartori, un partido político se caracteriza por ser un actor colectivo que tiene la voluntad de perdurar en el tiempo, un partido político tiene la voluntad de extenderse por todo el territorio del país en el que se genera y donde se origina, un partido político tiene la necesidad de representar a toda la sociedad.

Un Partido Político tiene que representar los intereses superiores de la sociedad por encima de los intereses particulares y sectoriales, y ese partido político según la definición académica es aquel que quiere poner en práctica su programa a través del gobierno al que llega por el voto ciudadano y democrático.

Por cierto que el Partido Colorado entra dentro de esa definición académica de Giovanni Sartori, ese pensador italiano, pero yo diría que el Partido Colorado es mucho más que una definición teórica, el Partido Colorado es quien ha sido el constructor de este país y es quien tiene la responsabilidad de brindar el porvenir y pensar en el futuro.

Como todos sabemos, los partidos políticos, en especial en Europa, pero también en muchas de las naciones de nuestro continente, nacieron expresando los enfrentamientos de clases sociales o de intereses.

Así fueron los primeros partidos, los partidos de elite conservadora frente a los cuales debieron armarse partidos obreros para buscar abrir la política a las clases populares.

Los primeros partidos en el mundo eran pequeños grupos de elite económica y social, la mayoría de la población era ajena a su acción.

Ese no es el caso del Partido de Rivera y de Batlle.

No fue esa, congresales y amigos, la historia del Partido Colorado. Este Partido fue policlasista desde su génesis, desde su origen, este partido representó a la sociedad en toda su expresión, representó lo urbano y lo rural, representó al trabajador y representó al empresario, representó al peón y al estanciero, re-

presentó al maestro, representó al policía, este Partido abrazó con José Batlle y Ordóñez el voto popular para abandonar por siempre el voto elitista censitario.

Este Partido estuvo todo este tiempo imperecedero y vigente en la sociedad porque tuvo algunas características; esa característica de ser policlasista, pero tuvo también la característica de defender permanentemente ideas, valores y principios que solamente en este Partido los encontramos en su real y acabado significado.

Defendió la libertad individual, defendió el sentimiento humanitario de la acción política, defendió la visión universalista del país y del mundo, defendió la práctica de la República para que sólo a través de la ley pudiera ser reconocida la convivencia pacífica entre los uruguayos, fue el Partido que asumió el compromiso de la cosa pública, de la cuestión pública, pero que no se sirvió nunca de la cuestión pública, fue el Partido en síntesis “Escudo de los Débiles”.

Pero, ¿por qué esos principios, que siempre nos hicieron ser una clase superior política, fueron defendidos logrando una República al decir de José Batlle y Ordóñez “Feliz y Justiciera”? ¿Por qué esos principios no perecieron?

No perecieron por el carácter reformista que tenemos los colorados, no solamente los principios que tenemos, sino la actitud y el carácter reformista que nos distingue.

La matriz reformista colorada ha sido la que ha hecho sobrevivir al Partido Colorado; porque en la historia las revoluciones y seudorevoluciones las vemos a la vera del camino, porque han caído, no han podido darle respuesta a los cambios de la sociedad. Pero este Partido sí, porque es un Partido que tiene principios, porque es un Partido que es reformista, y lo más importante porque es un Partido que tiene vocación de porvenir, no miramos el pasado, construimos el presente y proyectamos el futuro.

Nosotros los colorados tenemos en nuestra matriz política ser reformistas, para nosotros el cambio es producto de una acción permanente, siempre atenta a responder a las nuevas necesidades y cuestionamientos de nuestra sociedad.

Somos un Partido que ha vivido los cambios y siempre ha estado dando respuestas a los mismos.

Nuestro Partido ha recorrido tres siglos con sus cambios.

La caída del poderío español, el ascenso y la caída de la hegemonía inglesa, el ascenso de Estados Unidos y la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, y el ascenso de poderío de China, pasaron.

El transporte a caballo y a vela, la introducción del motor a vapor y luego a combustible fósiles como el petróleo, los transportes aéreos y la llegada a la luna, también pasaron.

Las guerras mundiales se han sucedido, países han nacido y otros han desaparecido, el comunismo y el fascismo ascendieron y cayeron, también pasaron.

Mientras el mundo ha cambiado en forma permanente el Partido Colorado ha perdurado, ha mantenido su vigencia por sus Principios y Valores, y por su práctica política reformista; pero más que nada, y es importante resaltar ello, el Partido Colorado ha superado los cambios porque su principal vocación siempre ha sido mirar y construir el porvenir.

El uruguayo de hoy merece una respuesta por parte del Partido Colorado, para eso estamos, para pensar no solamente en la leyenda que fuimos, sino para pensar, con la evocación de como decía Don José Batlle y Ordóñez, el deber del gobierno es pensar en el día a día, el deber de los partidos es pensar en el porvenir.

Hoy el desafío de nuestro Partido es la construcción de un Uruguay que pueda superar “el país modelo” de libertad y justicia social, que Batlle y Ordóñez como estadista plasmó en esta tierra y enamoró al mundo entero.

Nuestro desafío, reitero, es lograr un Uruguay moderno que vuelva a enamorar al mundo y a esperar a los uruguayos.

Batlle fue un hombre de su tiempo, que se nutrió de los debates de la época, ahí están sus lecturas preferidas, el pensamiento de Ahrens, Krause, Henry George, todos pensadores que reivindicaban al hombre como centro de la acción política. Él pensaba que la libertad estaba dada por la educación que se lograba y por la posibilidad de ser libres e independientes en lo económico, por eso su admiración hacia el sueño de una sociedad de pequeños propietarios que planteaba Henry George.

Nuestro desafío es volver a aquellos valores de la libertad, pues hoy aunque parezca mentira las libertades están recortadas de facto. No es libre aquel que no pudo acceder a una educación de calidad para tener un futuro propio. No es libre aquel ciudadano que vive con miedo e inseguridad.

Volver a la República donde los ciudadanos sean los protagonistas y el centro del debate sean los problemas públicos. Donde los ciudadanos tengan derechos pero además cumplan con sus deberes con la comunidad.

Volver a lograr que los uruguayos sean ciudadanos del mundo, abriéndonos a las ventajas de incorporar el país al formidable proceso de cambio que vive el planeta.

Instruir y educar a los uruguayos para que sean ciudadanos del mundo de hoy es el desafío de la hora.

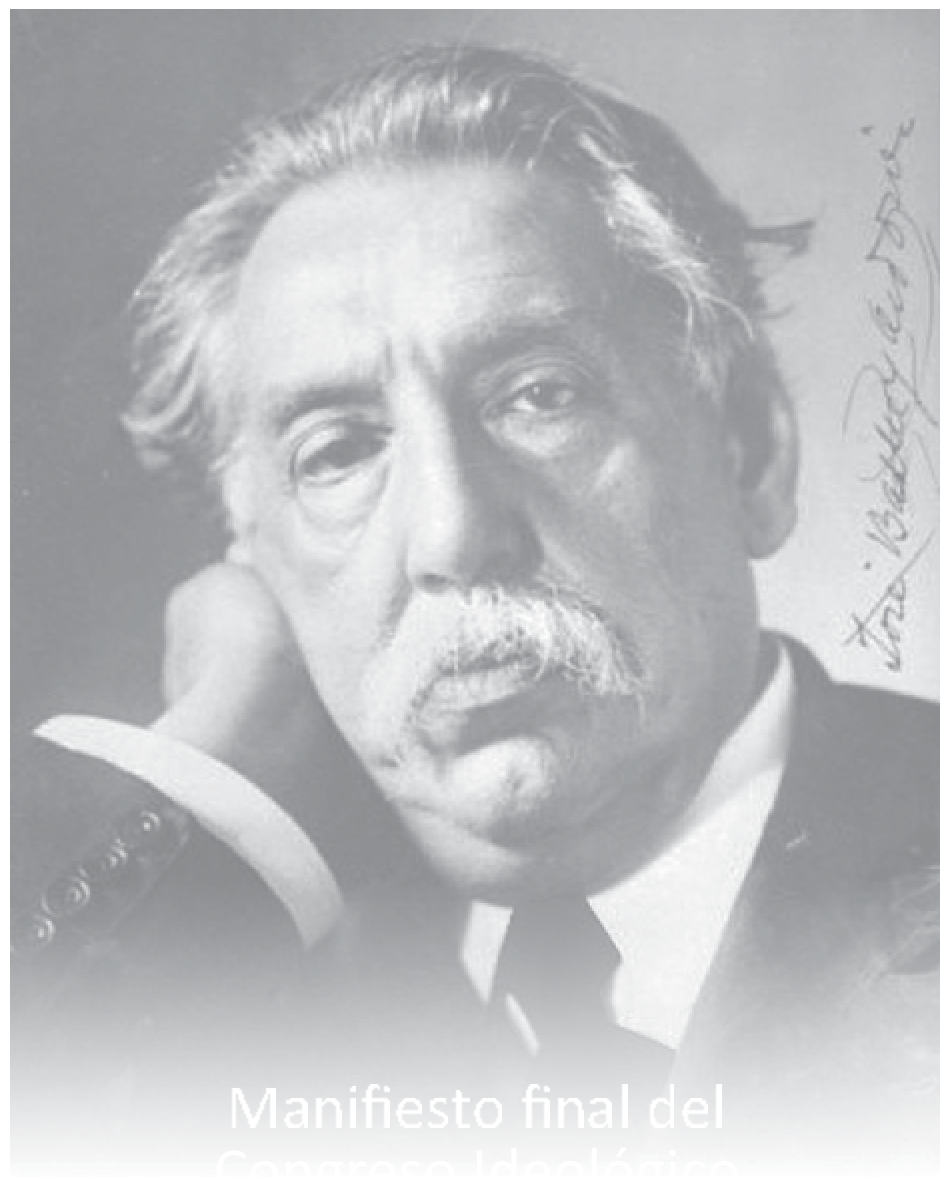
No basta con enseñar sólo geografía e historia, tenemos que hacer transitar a los uruguayos por las rutas de las nuevas tecnologías, ya que ellas han sido las responsables de cambiar conceptos tan afianzados como el de soberanía, nación, fronteras e incluso el sentido del tiempo y el espacio.

Hoy culminando este Congreso, el Partido Colorado está reafirmando su vocación de constructor del porvenir de los uruguayos, y por ello hoy aggiornamos nuestro pensamiento, para mañana con nuestro Congreso Ideológico poder construir UNA NUEVA ESPERANZA, la esperanza en un MEJOR PORVENIR.

Viva Batlle y Ordóñez! Viva los Colorados! Viva los Congresales!

Dra. Martha Montaner

Secretaria General del Partido Colorado 2012/2013



Los colorados y Batllistas debemos poner en marcha un nuevo proyecto nacional, que corrija los desajustes de estos últimos años, que nos reúna a todos con lo mejor de nuestra historia y nos lance hacia el porvenir, con la convicción de que tenemos un futuro cierto como pueblo libre y soberano.

En tal sentido:

1. Ratificamos nuestra condición de **abanderados de la democracia tanto política, como cívica y social; del humanismo, enemigo de la pena de muerte y protector de los más débiles y desvalidos; de los derechos de los trabajadores y de las mujeres; de la educación para todos y a todos los niveles; de la laicidad; de la libertad en su más amplia expresión; de la privacidad de las personas y de las familias**, así como referente del republicanismo, que cobra con Don José Batlle y Ordóñez y con el Batllismo, un enorme impulso. El tradicional eje Batllista de inclusión social, que comprende los conceptos de educación, empleo, ciudadanía no ha sido superado por otro modelo de intervención social, y menos por los actuales planes de asistencialismo. **Nuestro norte es y será siempre la justicia social**, la que exige un proyecto deliberado y consciente, que debe apoyarse en una amplia participación y encontrar en el Estado la herramienta imprescindible en tal gestión, siendo a la vez un garante de la defensa de los intereses ciudadanos.
2. Reivindicamos nuestro objetivo permanente e histórico por la **disminución de las desigualdades y la eliminación de la pobreza, erradicando la exclusión y logrando una sociedad más justa e inclusiva, promoviendo la movilidad social ascendente**, donde mediante el trabajo y el esfuerzo de cada uno se tenga la posibilidad de lograr la realización personal en base al mérito propio y no en base a la adhesión a un determinado sector o partido político, o a la dádiva o favor interesado del Estado.
3. Ratificamos nuestro apego a la **ética de la responsabilidad**. Ética que nos manda, asentados en nuestros principios y valores desarrollados a través de una rica historia de más de 175 años de participación en la vida de la República, atender siempre las consecuencias pre-

visibles e inevitables de nuestras conductas. Ética que nos obliga no solo a valorar la justicia de nuestros fines, sino también la coherencia de los medios utilizados con tales fines. Nuestro compromiso es ser portadores de un proyecto social, que represente sin exclusiones a todo el país.

4. Confirmamos a **la educación como la herramienta fundamental para la generación de oportunidades**, brindando una formación de calidad, pertinente y para toda la vida. Se debe educar para la revalorización permanente de la democracia, de la libertad, de la justicia, de la necesaria recuperación de la cultura del trabajo, de la cultura emprendedora, de la superación a través del esfuerzo personal, del apego a la ética, a la cultura cívica, al conocimiento de las nuevas tecnologías, a la no discriminación, a la defensa de los derechos humanos, al respeto por el medio ambiente, propiciando el compromiso, la solidaridad, la responsabilidad y el ejercicio de los derechos pero también el cumplimiento de los deberes en el marco de un Estado de Derecho plenamente vigente. Hoy nos rebelamos ante las situaciones de injusticia que la educación genera e incrementa en muchos casos, con políticas no conducentes al cumplimiento de sus fines básicos e imprescindibles, todo lo que se refleja en penosos resultados educativos y con una cada vez mayor exclusión y expulsión en su seno.
5. Valoramos especialmente el **derecho a vivir en paz**, sin violencias ni autoritarismos, en un sistema social solidario y participativo en donde la seguridad pública sea un patrimonio nacional que permita el ejercicio efectivo de la libertad, columna vertebral de nuestra identidad nacional. La violencia y el miedo no permiten vivir con libertad. La seguridad pública es visualizada como la primera de las libertades, por cuanto ella vela y garantiza el ejercicio pleno de las demás libertades. Un Estado que no garantice la seguridad, difícilmente podrá garantizar ninguna de las otras libertades, por lo que la seguridad ciudadana es un derecho humano que hay que proteger. El centro de atención debe ser: las personas víctimas de la delincuencia; el rescate de los valores; el respeto y aplicación de la autoridad dentro de la ley; el apego por la ley en el estado de derecho; distinguiendo el bien del mal; señales claras hacia la delincuencia con la aplicación de la

normativa correspondiente; el rescate del sentido de la autoridad en las fuerzas de seguridad; preservar el control de los espacios públicos y asegurar que no haya territorios inaccesibles para la autoridad policial, entre otros aspectos.

6. Defendemos el **derecho a la salud** en su dimensión de completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad, lo que conlleva a la construcción de un sistema nacional que atienda efectivamente las necesidades de todos.
7. Propiciamos el ejercicio efectivo del **derecho al trabajo** de calidad con ingreso digno, y sobre todo la creación de trabajo genuino, fuertemente sustentables más allá de los vaivenes económicos a que estamos expuestos como nación, el **derecho a una vivienda adecuada y accesible**, el derecho a acceder a un **sistema nacional de seguridad social universal**, eficiente y justo, el derecho a una **óptima calidad de vida** como objetivo central del proceso de desarrollo económico y social, el derecho al acceso y participación en el desarrollo de la **cultura nacional** en todas sus manifestaciones.
8. Resaltamos la necesidad de **transformar al Estado** con el único propósito de devolver a los ciudadanos el control de sus destinos, buscando la inclusión de aquellos más marginales de la sociedad y con menores recursos, provocando un verdadero paradigma de cambios que habiliten al relanzamiento de un Estado moderno al servicio de la gente, a la vez de que se fortalezca como herramienta fundamental para desarrollar los cambios y las transformaciones que se estimen pertinente realizar en el país. A su vez, ese Estado moderno debe elaborar y ejecutar políticas que facilitan el desenvolvimiento de las empresas en los mercados para lograr el crecimiento económico y la generación de riqueza y que asuma a las políticas sociales como centro temático del compromiso público. Hoy como siempre: “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”.
9. Propiciamos una verdadera **República de ciudadanos**, la que no se obtiene por la mera repetición de un sistema de valores que debería ser común a todos, no se alcanza con sólo la legitimidad procesal de las instituciones y, por supuesto, no se logra por el simple recurso de la fuerza. Es el resultado de la compleja interdependencia de cuestiones políticas, económicas y sociales que en el marco de la

institucionalidad y de la ley, configuran la dosis exacta de estímulo y presión para el pleno desarrollo de una ciudadanía celosa de sus derechos y comprometida con sus responsabilidades.

10. Enfatizamos la necesidad de **fortalecer el relacionamiento con la sociedad civil**. Numerosos actores, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, han ganado terreno y sus funciones, influencia, pensamiento y acción no pueden dejarse de lado. Las transformaciones sociales que el avance tecnológico trajo, complejizaron la trama social y hay que responder con una postura clara, filosófica y no ad hoc. Ello implica que rechazamos plenamente el avance del corporativismo y de todo poder fáctico sobre las instituciones republicanas, particularmente en la integración de entidades de conducción de órganos de gobierno, que actúan en defensa de intereses particulares en lugar de actuar en defensa del interés general, asumiendo competencias que no les corresponden y recortando, en consecuencia, los derechos de la ciudadanía a decidir soberanamente sobre todos los asuntos públicos.
11. Propiciamos el fortalecimiento de nuestra identidad nacional estableciendo una estrategia general y efectiva de **Política Exterior para el Uruguay**, que permita defender con fundamento, autoridad y presencia nacional suficiente, los altos intereses del país en el complejo y competitivo contexto regional e internacional. Ratificamos que la política exterior que el Partido Colorado debe impulsar se traducirá en acciones destinadas a exteriorizar la voluntad nacional de continuar viviendo como país, respondiendo al mandato de la historia, con cultura propia e instituciones democráticas, reivindicando la libertad de actuar independientemente con la mira puesta en integrarnos al mundo defendiendo el trabajo y el interés nacional de los uruguayos.

“Con nuestras ideas y para nuestras ideas, pues, seguiremos siempre luchando, en nombre de las convicciones propias y del interés nacional.”

(Frase extraída de uno de los editoriales de “EL DIA” del jueves 7 de septiembre de 1916)

Montevideo, Salto, Rivera 16 de junio de 2012

INFORME SECRETARÍA TÉCNICA N°1

CONCEPCIONES IDEOLÓGICAS GLOBALES:
DEMOCRACIA, REPUBLICANISMO
Y LIBERALISMO COMO PILARES
DEL PARTIDO COLORADO DEL SIGLO XXI

Destaques Genéricos y Preliminares

Proponemos, tanto en los trabajos del Congreso Ideológico como en la acción partidaria cotidiana, enlazar fuertemente la búsqueda de los elementos identitarios de la ideología del Partido Colorado de hoy, con un sistemático esfuerzo en su proyección hacia un horizonte de por lo menos dos décadas.

El “Programa de Principios” definido en 1984 en su propuesta “Por un Uruguay para todos”, guió la acción del Partido en el complejo período de restablecimiento de la democracia y de la paz, luego de la derrota impuesta por el pueblo uruguayo a la dictadura.

Período en el que la tarea a llevar adelante no sólo consistía en democratizar la vida del país y la sociedad en todos sus aspectos, hacerlo en paz y aventando todo tipo de posibilidad de volver a situaciones de violencia y de rupturas institucionales, sino además rediseñar la inserción del Uruguay en el mundo.

Y en esa tarea, al igual que en la de la recuperación de la democracia, la centralidad del Partido Colorado fue fundamental y decisiva. Porque la fuerza del Partido no se basa solamente en sus sucesivos programas de gobierno, sino que se mantiene viva a lo largo de 176 años, porque su accionar se sustenta en la ética de la responsabilidad, la cual antepone los intereses del país, antes que los dogmas y los intereses particulares. El nuestro es un Partido alejado de los dogmatismos, de diálogo abierto, de búsqueda permanente, propenso siempre a los cambios, de construcción inacabada e inacabable de una República liberal y democrática.

Los orígenes partidarios

El Partido Colorado desde su bautismo en 1836 -pues su parto fue, al decir de “Maneco” Flores Mora ¹, en los “fogones” artiguistas- es el partido de la libertad; del republicanismo; del reformismo; del laicismo; del liberalismo igualitario; de la justicia como instrumento de equidad, a diferencia de otras concepciones en las que la justicia está al servicio

1. Contratapa de Jaque, 21 de diciembre de 1984, titulada “El país binario del A, B y C”.

de la ideología del partido de gobierno; de la justicia social y del afianzamiento de la independencia y la democracia.

Es el partido de Fructuoso Rivera; es el de la Defensa de Montevideo; el que postulaba el liberalismo y el libre comercio, la libre navegación de los ríos por parte de los buques de todas las banderas. Propugnaba la modernización del sistema financiero mediante la creación de un banco emisor de papel moneda y la contratación de préstamos para la ejecución de obras. El partido Colorado era el partido de los liberales uruguayos.

Este Partido que gobernaba con tesón construyendo el futuro de nuestro país, se vería enriquecido con el pensamiento del más grande de los políticos uruguayos: Don José Batlle y Ordóñez. El Batllismo constituyó una aceleración cualitativa en el pensamiento liberal del Partido Colorado, inspirado en diversas fuentes ideológicas provenientes del krausismo, el republicanismo y el radicalismo.

Tan genuinamente uruguayo es el Batllismo y tan profundas y globales fue su concepción y su obra, que hoy vivimos la paradoja de ver a buena parte de sus enemigos históricos pretender arrogárselo, incluida la misma izquierda de raíz marxista a la que el propio Batlle combatió ideológica y políticamente. Lo que sí es indiscutible es que el Batllismo, abanderado de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de la justicia social, de los principios republicanos, hundió sus raíces en lo más profundo del ser nacional. Y estamos muy orgullosos por ello.

Los desafíos del presente

El Partido Colorado ha sido desde sus nacientes, abanderado de la democracia tanto política, como cívica y social; del humanismo, enemigo de la pena de muerte y protector de los más débiles y desvalidos; de los derechos de los trabajadores y de las mujeres; de la educación para todos y a todos los niveles; de la laicidad; de la libertad religiosa; de la privacidad de las personas y de las familias. Pero también el Partido Colorado ha sido el gran abanderado del republicanismo, que cobra

con Batlle y el Batllismo un enorme impulso. Un republicanismo que si en los tiempos de Don Pepe, debía combatir a marxistas por un lado y a liberales conservadores por otro, hoy debe recoger el guante que le arroja al país el populismo, en un contexto de una nueva ola populista en Latinoamérica.

Actualmente, la tendencia a concentrar poder día tras día en torno a la figura del Presidente de la República; el persistente hostigamiento a los medios de comunicación; las intermitentes pretensiones de someter a la Justicia; la brumosa relación del Gobierno con las “empresas compañeras”; la sociedad existente entre “la fuerza política” y las organizaciones sindicales, propia de la concepción leninista del “partido como vanguardia” y los sindicatos como “polea de trasmisión” de éste a la sociedad y viceversa; los deseos de importantes figuras del gobierno, de contar con la fidelización partidaria de las Fuerzas Armadas; son algunas de las expresiones más frecuentes y nítidas del populismo “a la uruguaya” con eje central hoy en el Poder Ejecutivo.

Particular preocupación nos merecen las reformas legislativas impulsadas últimamente por las cuales los sindicatos pasaron a cogobernar la educación y la salud. Está lógica de raigambre corporativista, termina desnaturalizando el rol de los sindicatos, defendidos y estimulados desde siempre por el Partido Colorado y por el Batllismo. En palabras del propio Batlle y Ordóñez podemos decir: “...al lado de las reivindicaciones de los partidos tendré que considerar también las de las clases obreras no menos justas y respetuosas. Reclaman ellos el derecho a la vida, a la salud, a la libertad con frecuencia lesionados y destruidos por el régimen de producción y que tienen que constituir los derechos elementales en una sociedad civilizada”. Dicho rol es la defensa del interés particular y privado del trabajador, indispensable y necesario para la mejora de la calidad de vida del asalariado y el bienestar social. Cuando quienes bregan por el interés particular, ocupan el lugar de los que tienen como norte el interés general, se genera una situación que lesiona la entraña del sistema republicano.

El Partido Colorado fue desde el plebiscito de 1980 el abanderado del

retorno a la democracia y del cambio en paz.

Enfrentó todas las objeciones que de uno y de otro lado se planteaban en esa época y consolidó un magnífico período de 20 años donde se reconquistó la democracia, alternándose los partidos en el gobierno y afirmando la Paz con las leyes de amnistía, de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado y reincorporación de destituidos a la función pública.

Hoy por la vía populista, se pretende retornar a un sistema perimido, que a nada bueno condujo: el socialismo real. Reaparece, en su imaginario colectivo el sueño de Ernesto “Che” Guevara, de la “Patria Grande” y de una sola América “socialista”.

El Partido Colorado frente al retorno de prácticas populistas de diverso cuño y alcance político nacional y continental, reafirma su rechazo:

- al avance del corporativismo, y de todo poder fáctico, sobre las instituciones republicanas, asumiendo competencias que no les corresponden y recortando, en consecuencia, los derechos de la ciudadanía a decidir soberanamente sobre todos los asuntos públicos;
- a la llamada “Democracia Delegativa” que pretende deslegitimar la función representativa de los parlamentos, y como contrapartida concentra el poder en la Presidencia de la República, afectando negativamente principios tales como la separación de poderes, la no injerencia en la Justicia y los derechos ciudadanos;
- a las prácticas demagógicas, que prometiando atajos inviables para las soluciones reales a los problemas de la gente, no hace más que sembrar desencanto y descreimiento en la acción política a mediano plazo;
- a los intentos “refundacionales” del populismo, que intenta desconocer, reescribiendo la historia a su conveniencia, que la larga construcción democrática del pueblo uruguayo, en lo político, en lo económico, en lo social y cultural, hunde sus cimientos en las luchas artiguistas, tiene como pilares la acción de los partidos históricos y

se nutre de los aportes que todos los ciudadanos, organizados de las más diversas formas, han dado a la tarea, histórica y cotidiana, de hacer de nuestro Uruguay un país libre, justo y próspero;

- al replanteo de visiones y prácticas superadas, como la de la llamada “Patria Grande” que ha empantanado el proceso efectivo de integración regional, en pos de solidaridades ideológicas pasajeras.

Los Colorados debemos concebir y poner en marcha un nuevo proyecto nacional, que corrija los desajustes de estos últimos años , que nos reúna a todos con lo mejor de nuestra historia y nos lance hacia el porvenir, con la convicción de que tenemos un futuro cierto como pueblo libre y soberano.

El Uruguay es su gente y aquello que los uruguayos queramos hacer de él. Más que nada, hemos construido un particular estilo de convivencia, fundado en la libertad, la tolerancia y el respeto recíproco. Constituimos una sociedad en la que la riqueza nunca fue criterio para medir el valor de los hombres y que, como crisol de inmigrantes, tampoco discriminó razas, credos, ideas, ni colores de piel.

Hoy, aquel Uruguay de siempre en el que pese a nuestras diferencias todos nos reconocemos, está en peligro.

Acudimos a discusiones, propiciadas por el propio partido de gobierno, sobre los orígenes sociales y económicos de la delincuencia, propios del siglo anterior, no reconociendo que la realidad es diferente y cada vez más compleja, donde el consumismo, la exigencia de satisfacción inmediata de los deseos, y la pérdida de peso en la sociedad toda de los valores compartidos que ayudaron a construir la idea de bien común, explican en buena parte la creciente marginalidad económica, social y cultural, caldo de cultivo para el auge delictivo. A su vez, el problema de la adicción ha llevado especialmente a la juventud, a delinquir para consumir y consumir para delinquir. Es una lógica perversa para la cual el Estado no estaba preparado y a la cual el gobierno no ha sabido atender. De este modo se vuelve inoperante, porque se detiene siempre en el

debate entre prevenir, disuadir y si es necesario reprimir o no, buscando excusas en lugar de gobernar.

Por cierto que las condiciones sociales deben mejorar para evitar el aumento del delito, pero no es, como se pretende imponer, la causa de todos los males. Si se da por válido que hay mayor distribución de la riqueza, se ha roto el paradigma que señala que a mayor distribución, menor delincuencia. Algo anda mal. Que la delincuencia ha aumentado es indiscutible, por ende, lo que queda en tela de juicio es la existencia de una mayor distribución de la riqueza, que será muy atractiva en los números, pero que no se ve aún reflejada en la realidad.

Nuestra sociedad en pocos años perdió sus valores más preciados, no los económicos, sino los humanos. Esa fractura ha llevado a la marginación, proceso que nuestro parido va a revertir por la inclusión que nuestro pueblo necesita y merece.

La enseñanza pública, otrora orgullo de los uruguayos y matriz de nuestro republicanismo, atraviesa su peor hora. Nunca se ha dado tanto al sistema educativo y nunca éste ha logrado tan magros resultados. La baja calidad de la enseñanza en todos los niveles, la deserción estudiantil, los procedimientos de pasaje de grado sin aprobar los cursos, son simplemente algunos ejemplos que pautan una descontrolada situación en la cual las autoridades no sólo no tienen respuesta, sino que ni siquiera toman medidas para mejorar la situación.

También, el Uruguay ha perdido su ancestral política de Estado en materia de relaciones exteriores. Se han privilegiado relaciones con gobiernos no democráticos, por encima de otros con los que se tenía una tradición de larga data. Se dejó pasar la posibilidad de tener un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque la coalición gobernante no pudo ponerse de acuerdo en el tema. Sin embargo, se recurrió a esa potencia, en su faceta bélica, para amedrentar al gobierno argentino, en el conflicto por el corte de puentes. Justamente, las relaciones con los vecinos de la otra orilla, han sido desastrosamente manejadas. Se pasó de la amenaza bélica, a una genuflexión que no conoce antecedente en nuestra historia. Se pasó de proponer más y mejor MERCOSUR, por

aceptar menos y peor MERCOSUR.

Se ha perdido la oportunidad del crecimiento histórico de una década consecutiva, para avanzar en infraestructura, reducción de la deuda y mejora de la calidad de vida de nuestra gente.

Después de tantos años y de tantos esfuerzos, el país sigue siendo un país dividido. Tenemos que lograr la reconciliación de todos los uruguayos, respetando la Constitución y las leyes democráticamente sancionadas y plebiscitadas.

Un Partido maduro y responsable

El Partido Colorado está dispuesto a asumir, como lo ha estado siempre, el papel principal que le corresponde en la obra de la necesaria reconstrucción nacional. Ha sido y es, por formación histórica, un partido de gobierno.

Durante décadas, que conforman todo un ciclo político, condujo al Estado uruguayo y forjó con él al país moderno. Ese país fue el Uruguay batllista. Y el Uruguay batllista fue el Uruguay del que sus habitantes se sintieron orgullosos y al que el mundo conoció y respetó. Ninguna otra colectividad política uruguaya puede exhibir una ejecutoria comparable a ésta.

El Partido ha superado definitivamente la crisis posterior a la situación de 2002 y que tanto nos afectó en las elecciones de 2004. Hemos madurado sectorialmente, integrándose una colectividad política madura y en permanente formación para asumir los desafíos que el futuro volverá a poner bajo su responsabilidad.

Hemos recuperado la tradición de las asambleas, que parafraseando a Don Pepe, son la tradición de la libertad. Se han abierto ámbitos de discusión a todo nivel, etario, territorial, de género, etc. Se ha dado un proceso fermental con las elecciones juveniles, en las que quienes son electos, se incorporan a la estructura partidaria y no a una paralela y aislada.

Hemos renovado nuestra Carta Orgánica y estamos cumpliendo el compromiso de actualización doctrinaria.

Hemos posicionado nuevamente al Partido como entidad viva y constante, que actúa orgánicamente -todo el Partido, sus bases y sus dirigentes- tanto en los comicios como luego de ellos, en instituciones democráticamente electas y que ya han testimoniado su capacidad rectora y madurez política.

La Doctrina del Partido

El Batllismo, como doctrina, constituye el núcleo inspirador del Partido Colorado, pero no ha sido ni es excluyente de ningún ciudadano que comparta sus ideales -sea él colorado o no- pues su obra está orientada al bien común y a la tolerancia. No monopoliza el espectro partidario, sino que advierte y genera el espacio para quienes no se sienten representados por él. Para decirlo con palabras de Don José Batlle y Ordóñez “Se puede ser colorado sin ser batllista, pero no se puede ser batllista sin ser colorado”.

El Batllismo no es un artículo importado, ni un catecismo dogmático, ni una especulación doctrinaria despegada de nuestra realidad. Es el fruto maduro de la evolución de un Partido que, salvo breves interrupciones, gobernó al país durante más de cien años.

En el siglo XX y fundamentalmente por obra de José Batlle y Ordóñez, a los rasgos tradicionales del coloradismo se fueron sumando otros que definen el perfil actual del Partido:

- **Su vocación democrática:** Nuestra colectividad postula una concepción dinámica de la democracia, como posibilidad de participación abierta a todos, que debe propagarse a los más diversos ámbitos de la vida colectiva. Democracia en el Estado. Democracia en el Partido. Y democracia también en la sociedad civil, ya sea en el plano cultural, económico o sindical.

- **Su voluntad reformista**, indispensable para realizar su concepción de la democracia. El orden social vigente conlleva injusticias y debe ser profundamente transformado. La dignidad inherente a cada ser humano impide que se le considere como a una mercancía más, a la que el funcionamiento del mercado puede depreciar o marginar.

La sociedad solidaria que queremos construir, debe garantizar a cada persona los bienes y servicios indispensables para vivir con decoro. Y debe asegurar también una efectiva igualdad de oportunidades en el punto de partida, para que cada uno desarrolle libremente sus capacidades, sin privilegios ni desventajas heredados.

- **Su jerarquización del Estado**, para ejecutar un proyecto solidarista, orientando, de acuerdo a una propuesta deliberada a los distintos sectores de actividad. No para sofocar a la iniciativa privada, cuyo dinamismo la hace indispensable para el desarrollo; pero sí para informarla y orientarla, ajustando su actuación al interés general. Asimismo, el Estado debe evitar que el capital extranjero perjudique los intereses de una comunidad demasiado pequeña, como para confiar su defensa a las leyes del mercado exclusivamente. Nuestra lucha sigue siendo por la defensa del trabajo nacional.

- **El sentido de nacionalidad batllista**, resulta de la convicción de que el desarrollo del país requiere una lúcida y enérgica promoción de sus intereses, en la compleja trama de las relaciones económicas internacionales. Esta postura no se confunde con la hueca exaltación de folclorismos nacionalistas, ni con la irracional hostilidad a lo extranjero; propugna, simplemente, la legítima y sensata defensa de lo nuestro, en un mundo en el que todos los países defienden sus intereses.

- Nuestro **latinoamericanismo**, es consecuente con lo anterior. Reivindicar nuestra nacionalidad en un mundo cada vez más interconectado es el desafío. La integración con los países latinoamericanos es necesaria para nuestra plena realización como comunidad nacional. Esta concepción nos solidariza asimismo con los países en vías de desarrollo, con los que compartimos problemas y anhelos y nos debemos prestar recíproco apoyo.

En este contexto, el universalismo de honda raigambre humanista y liberal, que tradicionalmente ha profesado el Partido, inspira una actitud de tolerancia hacia las ideas y credos de otros pueblos; de cordial hospitalidad hacia el inmigrante; y de atención constante y comprometida al acontecer internacional.

Sin perjuicio de su inquebrantable fidelidad a los grandes principios que la inspiran, nuestra colectividad aspira a enriquecer continuamente su acervo doctrinario. Desconoce la rigidez de los dogmas, no sólo porque ello es incompatible con la raíz liberal del Partido, sino también porque ese acervo no es una abstracción teórica, sino la decantación de una dilatada práctica política, que por estar en permanente contacto con la realidad, cambia y crece con ella.

Las bases

La libertad, la democracia y la justicia social, como conjunto indivisible, constituyen la columna vertebral de nuestro sistema de valores.

La defensa del Estado de Derecho

Como aspiración esencial, **la libertad tiene como centro al hombre, como entorno a la sociedad, y como único límite aquél que marcan las normas legítimamente sancionadas. Supone confiar en primera y última instancia en el hombre, en su poder creativo y en la validez de sus manifestaciones. No admite intermediaciones: ni mesianismos que lo iluminen, ni autoritarismos que lo repriman, ni populismos que lo seduzcan demagógicamente. Esta valoración del hombre y de su libertad se proyecta sobre el plano de la vida colectiva en la forma del Estado de Derecho** -único marco legítimo, para nuestra convivencia- y especialmente hace de la plena vigencia de los derechos fundamentales, individuales y colectivos, una exigencia que no admite condicionamientos.

Estos conceptos deben leerse a la luz de las experiencias vividas por los uruguayos en las últimas décadas. Ciertas críticas al sistema democrático, que alcanzaron su apogeo en los años sesenta y comienzos de los

setenta, minimizaron la importancia de los derechos y garantías consagrados por la Constitución entonces vigente, señalando que la falta de condiciones materiales, que hicieran accesible su ejercicio a todos los sectores de la sociedad, los convertía en atributos formales y privilegios de clase.

Luego de 1973, una argumentación simétrica, pero conceptualmente opuesta a la anterior, desvalorizó también el elenco de derechos y garantías constitucionales, al subordinarlo a una concepción autoritaria y transpersonalista del Estado y de la seguridad nacional.

Todos sabemos a qué condujeron ambos enfoques. Posteriormente y con la instalación de los dos últimos gobiernos, tenemos el surgimiento de teorías refundacionales; la permanente amenaza de reformas profundas en el régimen constitucional y la aplicación de prácticas populistas que rozan el idealismo fascista al transformar sindicatos y organizaciones sociales, en autoridades de organismos de enseñanza y salud pública.

El continuo desconocimiento de normas constitucionales y de la legislación aprobada y plebiscitada llegando, en algunos casos, a intromisiones inaceptables en el Poder Judicial.

El avasallamiento de los representantes de la oposición en Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Municipios, a quienes se ha llegado a prohibir su libre expresión.

El secretismo y la falta de transparencia, que caracteriza a toda la estructura del Estado y de las administraciones descentralizadas.

El Partido Colorado rechaza todos estos desbordes. Los derechos ciudadanos están antes y por encima de cualquier concepción social o “razón de Estado”. El hombre jamás puede ser un medio puesto al servicio de utopías pseudo revolucionarias o autoritarismos trasnochados. La búsqueda de la justicia social debe realizarse dentro del Estado de Derecho.

A lo largo de nuestra rica historia partidaria, hay múltiples prohombres, que hicieron magnos sacrificios, algunos de ellos, dejando su vida en los mismos o sus fortunas personales. Baste señalar a Joaquín Suárez, Domingo Arena, Baltasar Brum, Luis Batlle y a Julio César Grauert, entre otros tantos que mucho dieron por este Uruguay.

El orden social más seguro, es aquel asentado sobre el consentimiento de hombres libres, y las mayores y mejores garantías de cambio social permanente y pacífico, son aquellas que surgen libremente de una sociedad abierta.

Democracia plena y dinámica

La democracia no representa un valor estático, que empieza y termina en la organización de una forma particular de gobierno. La democracia es también un proceso permanente de construcción y perfeccionamiento, que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social: en la familia; en la educación; en el trabajo; en la distribución y el disfrute de los beneficios materiales y no materiales del progreso; y en la organización política de la sociedad.

La democracia es un concepto integral. Representa una forma de convivencia.

Cuando se restringe a una sola de sus dimensiones se achica, pierde fuerza y corre el riesgo de desaparecer. Como seguramente desaparece toda vez que se vuelve estática y no acompaña la evolución global de la sociedad.

Así concebida, la democracia constituye una empresa a la vez individual y colectiva. Su supervivencia, enriquecimiento y fortalecimiento, depende de la contribución que cada ciudadano realice para que ella exista a nivel de toda la sociedad. La sociedad toda, a su vez, debe crear y mantener las condiciones para que tales aportes puedan materializarse efectivamente.

Democracia y Desarrollo

Señalar la necesidad de crear y mejorar las condiciones que permitan a cada ciudadano participar plenamente en el funcionamiento de la democracia, es plantear el tema del desarrollo.

Se ha dicho reiteradamente que el desarrollo socioeconómico favorece la democracia. Esto es indudablemente cierto. Pero es de certeza insuficiente, porque si el desarrollo es rectamente concebido como una explicitación de las potencialidades de la comunidad, a través de la cual

se hace posible a todos, el ejercicio efectivo de los derechos formalmente consagrados, entonces ya no es sólo una condición favorable para la democracia, sino una dimensión insoslayable de la democracia misma. La democracia no se agota en el desarrollo, es un prerequisite para su existencia.

Garantizarle a cada ciudadano que su persona y sus derechos van a ser escrupulosamente respetados es indispensable. Pero no es suficiente. Es preciso además, que todos puedan, con su esfuerzo, elevar su nivel de vida, y con él, su capacidad de realización plena como seres humanos.

Justicia Social e Igualdad de oportunidades

Con su preocupación y sus propuestas relativas a la justicia social, el Batllismo realiza un aporte fundamental a los valores democráticos de nuestra cultura. Resulta imprescindible convencer, que no alcanza con reconocer al hombre el derecho a la educación, al trabajo digno, a la vivienda decorosa. Consagrar esos derechos en el papel y nada más, significa cristalizar la exclusión de las mayorías, del bienestar alcanzado por la sociedad en su conjunto.

El concepto de justicia social exige que procuremos alcanzar la igualdad de oportunidades, mediante acciones correctivas emprendidas por la sociedad organizada.

La igualdad de oportunidades no es un producto espontáneo; solo es concebible cuando la sociedad organizada actúa directamente a través del Estado, para corregir la desigualdad y apoyar a los sectores más débiles. En este sentido, **la justicia social exige un proyecto deliberado y consciente, que debe apoyarse en una amplia participación y encontrar en el Estado parte imprescindible en tal gestión.**

Hoy por hoy, el país tiene la dicha de vivir un ciclo de inmejorables condiciones económicas, fruto del afianzamiento de políticas serias y responsables, que con pequeños matices, se mantienen desde hace varios períodos de gobierno.

Lo que debe preocuparnos, es que cuando el país crece en forma sostenida y permanente, los esfuerzos de los últimos gobiernos no se concentren en crear condiciones objetivas, para que esa riqueza alcance a

todos los uruguayos. Por el contrario, se insiste en políticas sociales asistencialistas, que pueden paliar una situación coyuntural de pobreza o indigencia, pero que lamentablemente, no solucionarán definitivamente la inserción social de las clases menos privilegiadas y ante el menor desequilibrio económico podría desaparecer la ayuda social y sus destinatarios, al no contar con herramientas suministradas al efecto, no estarán en condiciones de ganar legítimamente su sustento.

Lamentablemente en este último punto el país no sólo no ha progresado, sino que ha involucionado, con cada vez más jóvenes que no tienen hábitos de trabajo ni de estudio.

Como se ha dicho revisemos la asignación de recursos a la enseñanza, la salud pública y la asistencia social, de tal forma que el dinero invertido rinda sus frutos y efectivamente llegue a sus destinatarios.

La justicia social, componente esencial de la sociedad batllista, es lo opuesto al asistencialismo que se ha instalado en el país. La justicia social es lo que asegura la movilidad social ascendente. Por el contrario, el asistencialismo, ancla a la persona en su situación y no le permite progresar.

El asistencialismo es la injusticia social.

Como colorados y Batllistas reivindicamos la necesidad de que el Estado intervenga directamente para atender la situación de aquellos compatriotas que están en una situación de desigualdad, más que credenciales tenemos en lo relativo a la construcción de un sistema nacional de atención en diversas áreas del quehacer nacional. En dicho marco, se debe propiciar la superación y el desarrollo de los ciudadanos comprendidos a fin de que, por y ante ellos mismos, puedan adquirir ciertas habilidades y destrezas que les permitan su pronta inserción en la sociedad, con un trabajo digno, sustento personal y familiar.

El republicanismo renovado

Uno de los desafíos mayores que el Batllismo enfrenta hoy y con la vista puesta en el futuro del país, es cómo pasar a una nueva etapa de desarrollo del republicanismo. Es decir, de la distribución del poder en nuestro país, en lucha contra el populismo y el conservadurismo, opuestos a los cambios necesarios, y todo ello a través de democracia y más

democracia. **Para esta tarea los colorados nos afirmamos:**

- en la actuación consciente y crítica del ciudadano en el quehacer político, económico y social, en su iniciativa y su espíritu emprendedor, debiendo ajustar su acción solo a las normas legalmente vigentes, sin que necesite depender del favor del poder político de turno;
- en que el país es una continuidad histórica que cultiva y expresa valores propios, que atraviesan horizontalmente a toda su población;
- en la validez y vigencia de la representación política, obtenida mediante el sufragio, tal como lo establece la Constitución de la Republica;
- en las políticas de Estado a largo plazo y las estrategias consensuadas entre los partidos;
- en la irrestricta libertad de opinión y expresión del pensamiento;

Renovar la política, profundizar la democracia, elevar al ciudadano a un plano de mayor poder y libertad, reconocer al otro en aquello que, precisamente, lo hace diferente; estas son las claves que proponemos para articular nuestro proyecto político:

- en la renovación de la política, mejorando la calidad del debate; construyendo un espacio común de deliberación donde procesar nuestras diferencias. Tomando como prerequisites la existencia de un Estado laico, una sociedad abierta y el convencimiento que los procesos de diálogo, son el camino que nos conducen al bien común, podemos recolocar la actividad política democrática en el centro de nuestra identidad como país. Los valores humanistas de tolerancia, la llaneza republicana, el sentido de pertenencia lejano a dogmas y fanatismos, nuestra disposición a dar la bienvenida al extranjero, son algunos de los rasgos de identidad donde, orgullosamente nos reconocemos como uruguayos, y todos forman parte de la construcción política pasada, presente y futura que nos define.

- en la profundización de la democracia, avivando la vida interna de los partidos, empezando por el nuestro; descentralizando profundamente la Administración, transformando la desconcentración burocrática en verdaderos espacios de gestión, al alcance del ciudadano; transparentando los procesos de decisión; oponiéndonos al secretismo; llamando a decidir al ciudadano directamente y respetando su decisión.

- en la elevación del ciudadano, convocándolo a deliberar, decidir y gestionar; promoviendo el control social de la administración y la rendición de cuentas; apoyándonos en las capacidades creativas e innovadoras de nuestra gente; confiando en que los uruguayos, a partir de metas claras y compartidas, sabemos obtener logros que superan toda medida.

- en el reconocimiento al otro, es hoy lo que signa la lucha secular por la igualdad. Si la igualdad política, es el logro de la ola revolucionaria del siglo XVIII, aunque la igualdad de derechos pueda ser siempre ampliada, es un logro obtenido y atesorado por todas las democracias contemporáneas desde entonces; la democracia social, nuestra respuesta reformista a la cuestión obrera, surgida por la industrialización y la pauperización consiguiente de grandes masas de trabajadores, fue la conquista de la segunda ola igualitaria, identificada en nuestro país con la obra del Batllismo. Hoy procesamos como sociedad los desafíos de “tercera generación”, de la igualdad: el reconocimiento y la integración de la diversidad.

La batalla cultural

Es la hora de una gran batalla cultural. Hoy nuestras fuentes humanistas, republicanas y liberales nos sugieren nuevas agendas políticas para nuestra sociedad. Se enfrentan nuevos desafíos y nos obligan a replantear cuestiones, tentar respuestas y abrir caminos por campos hasta ahora inexplorados.

Esas agendas, deben ser construidas, para una sociedad nacida y consolidada bajo el signo del republicanismo y la democracia -reconocida

mundialmente por ello-, pero gobernada hoy por una coalición de partidos con particularidades varias, fuerte respaldo electoral y una mayoría - en su seno - de movimientos de raíz marxista, que en el mejor de los casos han asumido algunos aspectos sustantivos de la democracia, pero a los que parece serle ajena la importancia de asumir los conceptos medulares del republicanismo.

Para el Partido Colorado, que ha sido motor fundamental de nuestra sociedad y que aspira a seguir siéndolo, es una vez más su hora, la hora de liderar la lucha en el campo de las ideas y de la acción política cotidiana, por una sociedad que siga siendo abierta y cada vez más abierta, con mayor y mejor libertad de todos y cada uno de sus integrantes y, por ello mismo, con un poder central claramente limitado y una ingeniería institucional de claros y equilibrados contrapesos.

Para el Partido Colorado, síntesis del humanismo y los principios de la democracia, el republicanismo y el liberalismo, el tiempo que se nos abre no es el de construir una hegemonía y mucho menos de pensamiento único, sino por el contrario persistir y ahondar en una cultura de reconocimiento, de respeto y tolerancia del otro, una cultura social de preservación de la diversidad y los derechos del individuo.

Si los últimos 50 años han sido de avance de las corrientes antiliberales y antirrepublicanas, corresponde a todos los uruguayos liberales, democráticos y republicanos, afrontar y asumir esta colosal tarea. En ese proceso, el Batllismo tendrá una gran responsabilidad, delineada y ejecutada, desde las primeras décadas del siglo XX, con su dinamismo desafiante, creativo e innovador, que hoy nos convoca a repensar el país desde una óptica integradora, anticipativa y realmente progresista.

Los desafíos de la posmodernidad

Si aceptamos determinadas teorías, que indican que el individuo posmoderno es un ser vacío, sin referentes, presa del mercado, debemos convenir que es también tierra virgen para los populismos y los outsiders, aquellos individuos que, desde dentro o fuera del sistema, critican

a los políticos -llegando a sustituirlos- y ofrecen soluciones, tan a corto plazo como nocivas.

Si los individuos no están bien educados y con una buena formación ciudadana, no se cuestionarán seriamente a la sociedad, a los gobernantes, a las medidas de gobierno; si no son capaces de escucharse entre sí, de discutir con respeto, cuando se coincide, pero sobre todo cuando se difiere, podemos estar afectando al régimen democrático.

No es, por ejemplo, la democracia participativa, como algunos proponen, el camino a recorrer, para evitar caernos en un sistema democrático indefinido. Por el contrario, es el afianzamiento de la democracia a través del fortalecimiento de las instituciones tales como la escuela, la familia, el Estado, los partidos políticos, etc. Dicho fortalecimiento, debe estar dado por la regulación y el respeto a las reglas; por la asunción de las responsabilidades y el cumplimiento de las obligaciones; por la relación con el mercado, donde se tenga claro que lo más importante es el hombre, no las mercancías; que el intercambio más importante es entre las personas, no entre las cosas.

La liberación de la década del '60 del siglo pasado, trajo avances positivos para la humanidad, pero fue -contra lo que se pronosticaba- el caldo de cultivo de los autoritarismos y de la mutación del capitalismo. Fueron contra el capitalismo y en realidad terminaron derribando las instituciones, pero no al sistema.

Blandieron la consigna que las instituciones convertían al *hombre lobo del hombre* ², y terminaron coadyuvando al aislamiento del hombre, transformándolo en lobo de sí mismo.

Es muy fácil culpar al capitalismo de nuestros males, cuando somos los propios hombres que hemos dimensionado el rol del mismo en nuestras vidas.

Por supuesto que el capitalismo es un sistema con muchas fallas, pero para que esas fallas no perforen los principios de libertad e igualdad, debe estar presente el Estado, como promotor de los equilibrios sociales. Si basta un ejemplo mundial de lo que se viene de afirmar, repárese en la salida, incompleta aún, de la crisis financiera mundial de 2008.

Así como el individuo, el sistema capitalista también necesita límites. La regulación no debe usarse para frenar el desarrollo del capital, sino

para asegurar valores humanos y naturales, y ejercer el control necesario para evitar que los excesos terminen por desatar un perjuicio con consecuencias mundiales.

El desafío es construir ciudadanía y una vez más equidad en esta sociedad tanto más diversificada, con -por lo menos en apariencia- múltiples intereses particulares que pueden oficiar de fuerzas centrífugas, una sociedad más fragmentada culturalmente, ya no sólo por diferencias económicas. **Una sociedad que asume nuevos roles, donde, a vía de ejemplo, empieza a ocupar un papel protagónico el cuidado del medio ambiente; la diversidad; el uso de las redes sociales.**

No es tarea de este Congreso elaborar el Programa de Gobierno del Partido; esa será la tarea a emprender en el próximo congreso que el Partido deberá realizar en este período, dando cumplimiento a las resoluciones de su Convención Nacional. Esa será, entonces, la instancia de las propuestas; ahora es la de reflexionar acerca de los nuevos problemas que atraviesan a nuestra sociedad, a este tiempo y este mundo en el que vivimos.

Consideraciones finales

La tarea del Congreso Ideológico no es, por tanto, cerrar un sistema de ideas que todo lo explique y todo lo resuelva. Ello no forma parte del universo racional y espiritual del Partido Colorado a lo largo de toda su historia. Muchas experiencias del siglo pasado, intentaron responder a la diversidad creciente del mundo y de la condición humana, con ideologías cerradas sobre sí mismas, repletas de respuestas pero incapaces de aceptar nuevas interrogantes: todas ellas fracasaron y cayeron derrotadas por el peso asfixiante de su propio dogma.

Sentimos si la necesidad de reivindicar, tan vigente hoy como en los tiempos fundacionales de la República y el Partido, -una vez más- nuestro apego a la ética de la responsabilidad. Ética que nos manda, asentados en nuestros principios, atender siempre las consecuencias previsibles e inevitables de nuestras conductas. Ética que nos obliga no solo a valorar la justicia de nuestros fines, sino también la coherencia de los

medios utilizados con tales fines.

El Partido Colorado nunca ha sido y no puede ser, una máquina de gestión política sin misión histórica. Nuestro compromiso es ser portadores de un proyecto social, que represente a las grandes mayorías de nuestro país.

**Moción aprobada en plenario,
que fuera presentada por el congresal Conrado Rodríguez:**

Muchos de los valores que hoy hacen a la esencia del Partido Colorado fueron incorporados a nuestro ser por varios de sus prohombres. Algunos de estos valores son el Republicanismo de Artigas; Garibaldi y su espíritu libertario; Joaquín Suárez y su austeridad republicana y desprendimiento nacional; Rivera y su don de ser el defensor del pueblo oriental; Lorenzo Batlle y su ética de la responsabilidad; Baltasar Brum y su defensa irrestricta a la democracia; Luis Batlle y la defensa del trabajo nacional; Batlle y Ordóñez como catalizador de todos estos principios en el concepto de Batllidad de Renán Rodríguez, en donde el Batllismo es una forma de ser, de actuar y de vivir en el que la sociedad uruguaya se siente identificada.

INFORME SECRETARÍA TÉCNICA N° 2

LA EDUCACIÓN COMO MOTOR PARA
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

“El pueblo no puede ser libre y feliz si no es instruido. Y la grandeza que suele buscarse, aún en la conquista, no debe consistir para una nación verdaderamente civilizada sino en su adelanto en las ciencias, en las artes, en la industria, en el comercio y en el bienestar y la cultura moral que son su consecuencia”

José Batlle y Ordóñez

El Partido Colorado, a través de su historia, ha propiciado – con las particularidades de cada tiempo en sus más de 175 años en la vida republicana del Uruguay – un modelo de desarrollo sostenible, igualitario y humanista que toma en cuenta las necesidades existentes, teniendo como norte la justicia social, fin último que ha motivado su accionar.

En este marco se concibe a la educación como la herramienta fundamental para la generación de oportunidades en una sociedad en donde los desafíos están al alcance de todos pero a la vez en donde las diferencias y desigualdades siempre están presentes. El desarrollo y progreso de la sociedad no siempre comprende a todos y es ahí donde la educación, entre otras políticas, juega un papel preponderante e insustituible. Para ello debemos pensar que **desarrollo** no sólo significa generación de empleo, prosperidad económica e inversiones tecnológicas, significa – a su vez - transformación educativa ubicando a la educación como eje articulador de mismo.

La educación es pues la clave para combatir la **exclusión** en todos sus niveles y, tal como se ha reconocido en diversos ámbitos nacionales e internacionales, es condición indispensable, aunque no suficiente, para el desarrollo económico, social y cultural.

En consecuencia, cuando existe una estructura social que permite la movilidad ascendente y un contexto económico estable, la educación produce un capital humano más rico y variado y reduce las desigualdades sociales.

Esa ha sido la concepción del Partido Colorado que inspiró sus acciones en materia educativa toda vez que ha tenido bajo su responsabilidad la conducción de ésta.

En tal sentido, se debe ratificar la idea de que para que la educación cumpla ese papel articulador, es necesario vincularla a las políticas sociales, con las decisiones sobre el desarrollo socio-económico que se desea impulsar y sobre el tipo de sociedad que se quiere construir.

Únicamente la educación puede brindar a cada individuo los elementos indispensables para comprender y actuar en la sociedad, para adaptarse a los cambios que se experimentan, sin buscar solamente una adecuación al presente sino que, en todo momento, una anticipación del porvenir.

Para el Partido Colorado la educación es también un factor decisivo para formación de los ciudadanos transmitiéndoles los valores vinculados con la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y la tolerancia. La educación conduce a la creatividad individual y mejora la participación en la vida social, económica, cultural y política de la sociedad.

Por consiguiente, constituye el instrumento fundamental para el ejercicio efectivo de la ciudadanía, de la formación en valores y las creencias sobre la importancia de la democracia, la solidaridad y la convivencia pacífica, generando las habilidades requeridas para internalizar la información y el conocimiento en un contexto de globalización de las relaciones sociales y productivas en general.

Educación: ciencia, investigación y desarrollo tecnológico

También, en el marco de una sociedad del conocimiento, como la que habitamos, la educación debe preparar a las generaciones futuras para hacer frente a las oportunidades y también a los problemas que plantean los avances de la ciencia y en la tecnología.

Por lo tanto la educación debe hacer un enorme esfuerzo para proporcionar las habilidades necesarias a fin de que los ciudadanos no sólo accedan al conocimiento sino que sean parte fundamental en su generación. La formación de personas vinculadas con la ciencia, con la investigación y con la tecnología es muy importante.

Resulta trascendente, en particular, que puedan entender la vinculación de éstas con la sociedad, para lo cual se deberá dotar de los instrumentos imprescindibles al efecto. A su vez, se debe trabajar para evitar la exclusión de una gran parte de la población que no accede a lo que se ha dado en llamar “códigos de la modernidad”, es decir, el conjunto de

conocimientos y destrezas necesarios no sólo para su integración en la vida en sociedad, sino también para participar en la vida pública. Para lograrlo la educación debe transmitir esos códigos culturales básicos de la modernidad.

Desde esta perspectiva, el uso de las tecnologías no es un fin en sí mismo sino una función de desarrollo cognitivo que la educación debe tener en cuenta. Es necesario incorporar adecuadamente la dimensión tecnológica, así como la enseñanza de una segunda lengua en los distintos niveles educativos. No hacerlo condena a la marginalidad y a profundizar las brechas digitales de todos los que queden fuera del dominio de los códigos que permitan manejar esos instrumentos. El cambio tecnológico y la apertura hacia la economía global basada en el conocimiento lleva necesariamente a replantearse las competencias y destrezas que se deben enseñar y aprender. Por consiguiente, la educación debe aprovechar al máximo las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y aplicarlas, también, a diferentes instancias de formación y actualización docente, así como a las instrucciones de grado en lo pertinente.

Educación, Valores, Familia y Sociedad

Otro aspecto decisivo es propiciar actitudes favorables como la responsabilidad, el trabajo, la superación personal a través del esfuerzo, la autoestima, el respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, actitudes decisivas para un cambio de mentalidad en donde la educación cumple un papel fundamental, aspectos que es necesario repotenciar en todos los ámbitos educativos y en coordinación con las familias.

Es necesario tener presente que se requiere consolidar una educación republicana, pautada por la formación ciudadana sustentada en valores de igualdad, laicidad y libertad, así como en la inclusión y el respeto a la diversidad.

A su vez, la educación debe posicionarse desde una nueva perspectiva ya que no basta con asegurar un cierto nivel de educación para todos los ciudadanos, ni su consideración como un proceso que termina a cierta edad, hoy se debe fortalecer una educación que dure toda la vida, asumiendo que es necesario convivir con el desafío de aprender a aprender en forma permanente, afianzando el vínculo entre ésta y la sociedad toda.

Al decir de Pedro Figari: “...**formar el criterio y el ingenio antes que la mera habilidad profesional, la capacidad de iniciativa y creación antes que la repetición e imitación..... trabajar pensando y pensar trabajando**”.

Particularmente se considera imperioso que la sociedad, y en su seno las familias, se involucre en el proceso educativo, se involucre con la educación. Ello solamente se logrará si se internaliza a la educación como un valor social, lo que exige transparencia en el tratamiento de las cuestiones educativas y en el debate respecto de las acciones relativas a la educación, propiciando el conocimiento de los resultados que se obtienen en todos los niveles y de las medidas que se llevan adelante para mejorarlos en lo pertinente. Lamentablemente todo esto se ha venido perdiendo, en forma acelerada, en los últimos tiempos en nuestro país. De ese modo, como otrora, la sociedad podrá acompañar la ejecución del proyecto educativo del país, proponiendo ajustes y verificando el cumplimiento de los deberes de los gobernantes a los que se les encarga la responsabilidad de conducir los destinos de la educación en el marco de un estado democrático y republicano que tiene como eje central a los partidos políticos y no a los colectivos existentes los que, como corresponde, deben defender sus intereses particulares. La diferencia trascendente radica en que en la educación, así como en otros temas del quehacer nacional, es necesario contar con personas responsables y comprometidas con las tareas de gobierno, que propicien en toda circunstancia y ante todas las situaciones la atención y defensa del interés general.

En este contexto, y como concepción de trascendente significado, se debe especialmente valorar que **los principales educadores son los padres, es la familia, actuando en colaboración y coordinación con los centros educativos**. Es cada vez más imprescindible la interacción entre ambos ya que los dos protagonistas centrales son por un lado los centros educativos y por otro las familias, no separados sino que unidos, siendo partes imprescindibles y aliadas.

Acentuando el valor social de la educación es necesario lograr una adecuada articulación entre la educación y el trabajo, desafío constante que la educación tiene a fin acompañar la velocidad de los cambios que se experimentan, revitalizar las primordiales relaciones entre la educación



**Informe de Avance del CIPC realizado en diciembre de 2011
simultáneamente en Montevideo, Mercedes, Minas, Rivera y Salto.**



**Informe de Avance del CIPC realizado en diciembre de 2011
simultáneamente en Montevideo, Mercedes, Minas, Rivera y Salto.**



**Evento final del CIPC realizado en junio de 2012
simultáneamente en Montevideo, Salto y Rivera.**



**Evento final del CIPC realizado en junio de 2012
simultáneamente en Montevideo, Salto y Rivera.**



Evento final del CIPC realizado en junio de 2012
simultáneamente en Montevideo, Salto y Rivera.



Taller en Durazno



Taller en Montevideo



Taller en Paysandú



Taller en Salto



Taller en Tacuarembó



Taller en Treinta y Tres



Taller en Montevideo



Taller en Montevideo



Taller en Tacuarembó

Taller en Salto



Taller en Durazno



Taller en Rivera





Taller en Flores



Taller en Montevideo



Taller en Paysandú



Montevideo y Rivera sesionando al mismo tiempo



Montevideo y Salto sesionando al mismo tiempo



Taller en Montevideo

y el trabajo, atendiendo las demandas del sector productivo sin perder de vista su rol fundamental.

También es necesario potenciar el tratamiento de temas como los de género y de equidad ciudadana, a fin de que integren contenidos curriculares en las diferentes asignaturas, propiciando el cambio de pautas culturales, hacia el camino de la equidad ciudadana.

Educación e inclusión

En definitiva, entonces, es necesario trabajar por la inclusión en sus diversas aristas. Esta no se alcanza con el simple deseo, por más que se exprese una y otra vez, es necesario propiciar y concretar acciones pertinentes, eficaces y contundentes, contando con la voluntad política para llevarlas a cabo y sostenerlas en el tiempo.

Sin una efectiva política de educación, hablar de inclusión es solo una cuestión teórica, es imprescindible concretar acciones y llevarlas a la práctica teniendo presente que el paso del tiempo está condenando a generaciones enteras de uruguayos.

En el marco de la inclusión, es importante atender a todos, pero especialmente aquellos que más lo necesitan, de forma que su posición económica, su contexto social, sus capacidades diferentes, su lugar de nacimiento, su ubicación geográfica, entre otras cuestiones, no sean motivo de discriminación generando desigualdades iniciales, muy difíciles de subsanar a posteriori.

Para ello se debe trabajar para reducir las desigualdades existentes lo que significa en los hechos, generar verdaderos mecanismos de igualación de oportunidades accediendo a una educación de calidad para todos y para toda la vida, ratificando a ésta como el factor clave para la movilidad social.

Privar a los ciudadanos el derecho a la educación, es privarlos de la herramienta más importante que pueden tener a su disposición: la que permite desarrollar la capacidad de emitir juicios y realizar acciones autónomas, de escoger y razonar los motivos por los que ha hecho una elección u otra. Es privarlos de la capacidad de deliberar, comprender y aceptar razones ajenas ya que al decir de Federico Mayor Zaragoza: ***“La Educación está, por tanto, en el mismo corazón de la cultura democrática....es el puente que va de la pobreza, la marginación a la igualdad***

de oportunidades y de logros, la educación permite la participación cívica, esencia de la democracia; fomenta el desarrollo económico y fomenta la paz.”

Esta concepción y forma de actuar ha estado impregnando el accionar de nuestra colectividad desde todos los tiempos, así Don José Batlle y Ordóñez, en los fundamentos del Proyecto de Ley de creación de los Liceos Departamentales, sostenía:

“Toda enseñanza debe tener dos fines: el instructivo y el educativo: esto se enseña con el doble objeto de transmitir conocimientos a los alumnos (instrucción) y de formarle un criterio de hacerlos más inteligentes, morales y aptos para la vida (educación). El fin educativo es tan importante como el instructivo. Ambos deben desarrollarse armónicamente.”

Educación y autonomía: un verdadero sistema nacional de educación

Reafirmando la **autonomía técnica** de nuestras entidades educativas, la que defendimos y defendemos hoy, es necesario que la educación nacional cuente con una estructura orgánica acorde a las demandas actuales y que sea un instrumento para el cumplimiento de sus objetivos, propiciando una gestión eficiente, eficaz y descentralizada. Por ello, se requiere la consolidación de un verdadero sistema nacional de educación desde la lógica de contar con múltiples ofertas que atiendan las realidades existentes en nuestro país de forma de posibilitar a todos y a cada uno, el derecho de aprender haciendo realidad lo que establece la Constitución de la República: todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

En el país predomina, aún hoy, una visión fragmentada de la educación. Los distintos niveles, tramos, etapas y modalidades son vistos como diferentes momentos del proceso educativo. Sin dudas cada uno tiene un objetivo particular pero deben estar integrados en una unidad general la que es imperiosa. Lamentablemente esta realidad se ha agudizado con el entramado burocrático creado por la Ley de Educación de 2008 (La ley anterior de educación preveía la existencia de 7 estructuras institucionales, la ley actual las aumentó a 20; la ley anterior establecía la integración de 28 miembros en las estructuras referidas y la ley actual

los aumentó a 99 – 186 % y 254 % de aumento respectivamente). Se deben superar falsas oposiciones por medio de una visión sistémica de la educación concibiendo a la misma como proceso de socialización e individualización que no puede ser artificialmente segmentado, de acuerdo con la conveniencia administrativa o de determinados colectivos que disputan parcelas de poder. Por el contrario, tiene que ser tratada con unidad, desde de la educación inicial hasta la educación superior, ampliando las posibilidades de contar con una educación de calidad para todos, independientemente de la etapa en que cada alumno se encuentre en el ciclo educativo. Tal concepción implica, adicionalmente, promover la articulación entre las políticas específicamente orientadas a cada nivel, tramo, etapa o modalidad. Reconocer las conexiones intrínsecas entre educación inicial, educación básica, educación media, educación técnica/tecnológica y educación superior permite las acciones en educación de forma que se fortalezcan unas con otras.

Educación: política nacional

Es trascendente y crucial, especialmente ante la triste realidad que se experimente a la fecha, consolidar una política nacional en materia educativa, tal como ha sucedido con algunas reformas implementadas en los gobiernos del Partido Colorado, como la educación inicial, las escuelas de tiempo completo, el fortalecimiento de la educación técnica a través de los Bachilleratos Tecnológicos, la formación de docentes, entre otras. Si bien no es la temática de este Congreso, es bueno recordar que a partir de 1995 el país vivió una transformación educativa que tomó en cuenta las carencias y dificultades que la educación tenía y principalmente, las necesidades existentes para lograr el objetivo de una educación de calidad. El CODICEN de la época, liderado por Germán Rama, puso en práctica una transformación en todos los niveles de la educación nacional. Muchas de esas transformaciones fueron – lamentablemente – eliminadas o no impulsadas por las autoridades actuales y anteriores del Frente Amplio. Hoy, quince años después, las principales figuras de la fuerza política que está en el poder reivindican la procedencia de las mismas y la necesidad de volver a ellas. En ese accionar encontrarán al Partido Colorado como un firme aliado.

En tal sentido, una política nacional en materia educativa requiere del

esfuerzo de todos y es un deber de los gobernantes en quienes se les haya asignado la responsabilidad de conducir la educación. Los mismos deben procurar los mayores empeños para concretarla, implementando un **Plan Nacional de Educación** que involucre a todos los sectores de la vida nacional y que se base en las mejores tradiciones, principios y valores de nuestra educación. Que involucre a las familias, a los docentes, a los distintos actores sociales y políticos. Eso implica, por un lado, considerar la responsabilidad en la gestión, sobre todo de quienes tienen responsabilidades de gobierno y el involucramiento de la sociedad en su conjunto, sin dejar de lado que el objetivo último es esa necesaria educación de calidad para todos los niños y jóvenes.

Además, el reto que tenemos por delante es que el sistema educativo, en el marco de la construcción del sistema nacional, sea capaz de establecer procesos de revisión y cambio en el interior de los propios centros docentes, de su cultura organizacional, de su propuesta curricular a fin de brindar respuestas a los nuevos escenarios sociales, económicos y del conocimiento, descentralizando en favor de los mismos funciones y atribuciones que permitan desarrollar la función educativa de una mejor forma.

Para ello se debe contar con: contenidos educativos apropiados, evaluaciones acordes, sistemas de rendición de cuentas, profesionalización de los docentes y atención a las diversidades imperantes.

Educación: Principios y valores

La política nacional se debe basar en los principios y valores de nuestra educación, los que constituyen los pilares ineludibles.

Los principios básicos de la educación, consagrados constitucionalmente: a) la libertad de enseñanza, b) la intervención del Estado, c) el derecho de los padres y tutores, e) la exoneración tributaria, f) la obligatoriedad de la enseñanza, g) la libertad de cátedra, así como los principios de aplicación específica en el ámbito público: a) la **laicidad**, b) la **gratuidad**, c) la **igualdad de oportunidades** y d) la **igualdad/equidad**.

Todos ellos constituyen un entramado inseparable que debe guiar el accionar en materia educativa. El Partido Colorado a través de la his-

toria tuvo siempre como norte la consolidación de estos principios en el diario vivir de la educación del país, especialmente en lo relativo a la educación pública.

Apego a las mejores tradiciones.

La Laicidad columna vertebral de la educación

Para el Partido Colorado es fundamental el apego a nuestras mejores tradiciones representadas por nuestros principios y valores, tan impregnados en nuestra educación, desde la reforma de José Pedro Varela hasta nuestros días. En particular, el **Principio de Laicidad** consagrado en la Constitución Nacional y en las sucesivas leyes de educación. La ley de educación vigente establece que este principio asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa, garantizándose la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias.

Dos cuestiones son fundamentales, por un lado el respeto estricto al mismo en los centros educativos, ya sea por parte de las autoridades – las que, además, deben velar por su debido cumplimiento – y por otro el acatamiento de éste por parte de todos los docentes, con prescindencia de su filiación o condición política.

Lamentablemente, hoy por hoy, se observan situaciones en donde este principio se ve afectado por acciones deliberadas o por omisiones. Un claro ejemplo de ello constituyen varios textos escolares que, al momento de considerar la historia reciente del país, presentan al alumno una visión sesgada de la misma, lo que atenta directamente contra este principio fundamental. Así por ejemplo, el texto oficial de sexto año de educación primaria afirma que la actividad guerrillera de los años 60 y 70, “se manifestó en lo político denunciando la corrupción existente en el régimen de gobierno” generalizando la descalificación moral de gobiernos democráticos, electos constitucionalmente en el marco de acusaciones que no se comprobaron. También, cuando se refiere a la “la dictadura”, con bastante detalle se describe la huelga que decretó en junio la CNT, pero se ignora totalmente la sublevación de febrero de 1973, en que el movimiento sindical apoyó los comunicados 4 y 7 de los

comandantes en jefe de las FFAA. En particular, parece pertinente recordar que, tal como sostiene el Presidente Julio María Sanguinetti, ***“La memoria es un recuerdo siempre parcial, de una persona o un grupo. La historia es un proceso de reconstrucción del pasado sobre la base de muchas memorias, con frecuencia contradictorias entre sí y otras fuentes que no son memoria, pero que registran relevantes hechos económicos o sociales. La confusión normalmente no es inocente....No se la evoca como recuerdo, sino que se le pretende transformar en lecciones, bajo el disfraz de la historia, que es un proceso muy distinto y complejo...”***.

En este marco, el Partido Colorado considera necesario que se modifique el texto de la ley de educación vigente, proponiendo que se agregaran consideraciones respecto de la prohibición de realizar **actividades proselitistas** en el sistema educativo, el que está consagrado en disposiciones normativas de carácter general y que por otra parte constituye un aspecto fundamental del Principio de laicidad y es considerado “ilícito” por la Constitución de la República. A su vez, debe hacerse mención a la consagración de la necesaria **educación moral y cívica** del educando y a la **imparcialidad docente** todo lo que fortalece la laicidad en la educación y completa el conjunto de disposiciones contenidas en la normativa.

Sin perjuicio, es vital que las autoridades educativas adopten las medidas pertinentes a fin de que estas situaciones cambien radicalmente y el Principio de Laicidad vuelva a impregnar la educación con toda la fuerza que nunca debió perder.

Los desafíos mirando al porvenir

En este contexto es necesario establecer que los cuatro grandes retos de la educación, los que directamente implican la defensa y puesta en práctica de los principios antes referidos, son: la universalización, la equidad, la calidad y la pertinencia, cuestiones que siempre han estado presente en el accionar del Partido Colorado y que hoy más que nunca, deben potenciarse y deben ser el objetivo a alcanzar para reafirmar el logro de una efectiva justicia social.

La universalización

Continuar en el proceso de extensión de la cobertura en la educación es sin dudas uno de los pilares del efecto democratizador de la misma. La educación desde los primeros años de vida logra la ampliación de las potencialidades cognitivas de los niños. A la vez, se debe lograr la universalización de la educación media básica y de la educación media superior, principio rector de justicia social, ya que el no completar esos ciclos educativos, afecta primordialmente a los sectores de contextos socio-culturales desfavorables. Hoy en el Uruguay solamente culminan la educación media un 25.3 % de los jóvenes entre 18 y 21 años de edad, cifras por demás alarmantes y que nos llaman a unir esfuerzos.

Permitir el acceso y la permanencia en el sistema educativo, constituye la condición indispensable para que sean posibles otras formas y dimensiones de la inclusión tales como la inclusión en el trabajo y en la participación cívica.

Es en este sentido que adquiere todo su valor y significación, consolidar una propuesta de educación de calidad para todos, en particular para aquellos que más lo necesitan por su procedencia o por los contextos en los que se encuentran.

La equidad

Es necesario avanzar en el tratamiento igual, en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo para todos, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política, haciendo efectivamente cierto el derecho humano fundamental de la educación, proclamado en la “Declaración Universal de Derechos Humanos” de 1948.

Se deben adoptar medidas compensatorias o correctivas que restablezcan la igualdad ante situaciones desiguales, a fin de que no existan víctimas de la inequidad educativa como los jóvenes que no pueden acceder a una educación media completa, así como los que abandonan este nivel sin completarlo, tanto por deficiencias en su formación previa como por razones económicas, entre otras. O peor aún, aquellas situaciones que generan en el país dos realidades educativas bien distintas, la de aquellos jóvenes que provienen de los sectores correspondientes al 20 % con menores ingresos de los otros provenientes del 20 % con mayores

ingresos. (Por ejemplo, a los tres años asisten a centros educativos cuatro de cada diez niños provenientes del 20 % más pobre y más de nueve cada diez niños del 20 % de hogares más ricos, esto es 40 % contra un 93 %).

La situación también puede verse claramente en la evolución de los niveles máximos educativos alcanzados. Los colorados, entre tantas otras cosas, debemos rebelarnos frente a la **evolución del nivel educativo máximo alcanzado por la población entre 25 a 59 años en el 1° Quintil de ingresos, máxime cuando la comparamos con el 5° Quintil:**

1° Quintil de ingresos:

Año	Primaria	Media	Terciaria
2006	53.2	43.2	2.0
2007	52.9	43.9	2.0
2008	55.4	42.2	1.2
2009	58.4	40.4	1.2
2010	61.5	37.0	1.4

5° Quintil de ingresos:

Año	Primaria	Media	Terciaria
2006	6.7	38.2	55.0
2007	5.3	37.2	57.4
2008	7.3	44.7	47.9
2009	6.4	44.2	49.4
2010	8.9	40.8	50.3

Sin perjuicio de no corresponder en esta instancia hacer mayores menciones al tema, se debe expresar que en la actualidad a pesar del aumento en la asignación de recursos a la educación pública, se experimenta un aumento importante en los resultados de deserción y repetición en todos los niveles educativos, salvo en educación primaria, lo que impone solicitar a las autoridades actuales la adopción de las medidas correspondientes comenzando en primer término por el cumplimiento estricto de los Acuerdos Multipartidarios de 2010 y de 2012.

La calidad

Tal como se ha expresado la importancia de la educación no se basa sólo en su cantidad, sino en su calidad es decir, en qué es lo que se estudia, qué técnicas de aprendizaje se utilizan y qué resultado obtienen los estudiantes. En definitiva, la calidad de la educación está directamente relacionada con las decisiones sobre la asistencia a los centros educativos, así como la extensión del tiempo pedagógico en el marco de propuestas y ofertas educativas que satisfagan las expectativas de los estudiantes y que estén estrechamente vinculadas con la realidad en la que están inmersas, dotando a los estudiantes de competencias que se requieran para la efectiva inserción social/laboral. Los centros de alta calidad incrementan el éxito de los alumnos, y en consecuencia el éxito del colectivo social. Lograr verdaderas mejoras en la instrucción requiere de más horas y días en el aula (En el país se imparten unas 800 horas de clase anuales - a las que hay que descontar los días que se pierden por paros sindicales y otras actividades – siendo la realidad muy distinta en los países con mejores desempeños educativos en los que se imparten unas 1200 horas anuales).

Mayor número de días de clase y educación de tiempo completo, es uno de los caminos para una educación que supere las brechas de la desigualdad y que propicie fuertemente una educación de calidad, todo unido a una necesaria reforma curricular como lo ha propiciado el Partido Colorado.

La calidad de la educación va de la mano de la formación de los docentes. Para actuar en este aspecto se requiere prestar renovada atención a la carrera docente, al diseño y ejecución de programas en general. Unido a la formación es necesario potenciar y transformar la carrera profesional, la que no debe estar sólo vinculada a la antigüedad, sino que debe pesar en ella, el compromiso con la función, la evaluación del desempeño y el perfeccionamiento para el desarrollo de la misma, tal como lo sostuviera el Partido Colorado al participar en los acuerdos multipartidarios que se llevaron adelante.

También, una educación de calidad implica tener cabal consciencia de que la misma es crucial para promover el **desarrollo sostenible**, integrando los principios, los valores y las prácticas necesarias a efectos de proporcionar a toda persona la oportunidad de adquirir los valores, las

competencias, los conocimientos y las habilidades que le permitan contribuir a un futuro humano, justo, económicamente viable y ecológicamente sostenible. En este sentido, es imperioso propiciar la educación que plantee cuestiones tales como fomentar soluciones creativas frente a los retos globales, reflexionar sobre nuevos estilos de vida que combinen el bienestar, la calidad de vida y el respeto por la naturaleza y las demás personas.

En resumen, la educación de calidad debe asegurar a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta, en el contexto de una formación moral y cívica plena.

La pertinencia

Es indispensable incluir, en la expansión con calidad de la educación, la noción de pertinencia. La enseñanza que tenga lugar en los centros de estudio debe estar bien sintonizada con los requerimientos de la comunidad en que se encuentra el centro educativo y de sus alumnos, brindándoles la oportunidad de la elaborar proyectos propios.

En la actualidad, ratificando su accionar en tiempos anteriores, el Partido Colorado ha impulsado una mayor autonomía de las comunidades educativas a fin de favorecer una mayor participación de la comunidad, obtener una mayor eficiencia en el uso de los recursos, mejorando la calidad y de esa forma brindar respuestas más adaptadas a las necesidades de los diferentes grupos sociales. En este marco hay que promover la ética del conocimiento, la que implica que los docentes y los alumnos se evalúen a sí mismos, que empleen la autoevaluación y participen en evaluaciones colectivas, nacionales e internacionales (Por ello el Partido Colorado ha propiciado la realización y consolidación de evaluaciones en todos los niveles educativos). El magro desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas de evaluación pone en evidencia la importancia de estas instancias, para mejorar los modos de actuación y elevar los niveles cognitivos, a partir del conocimiento obtenido en dichos procesos. También, existiendo consenso en ello, es importante que los tramos educativos se constituyan en un espacio integrador, que acoja efectivamente a los estudiantes, lo cual implica la necesidad de un número determinado de asignaturas (áreas de conocimiento) y de docentes, evi-

tando – como sucede en la educación media básica - la rotación de doce o trece profesores, con todo lo que ello conlleva desde una perspectiva didáctica y pedagógica.

Finalmente cabe recordar que, en coincidencia con disposiciones nacionales, el Uruguay ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966), cuyo Artículo 13.1 reconoce *“...el derecho de toda persona a la educación”, la que “...ha de orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad...”* debiendo *“...fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”* a fin de *“...capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos....”*.

Por todo lo dicho y en definitiva como colorados y como Batllistas, con base en las mejores tradiciones del sistema educativo y en la obra que nuestra colectividad ha realizado a través de los tiempos, ratificamos la necesidad de **educar para la revalorización permanente de la democracia, de la libertad, de la justicia, la necesaria recuperación de la cultura del trabajo, de la cultura emprendedora, de la superación a través del esfuerzo personal, del apego a la moralidad, a la cultura cívica, al conocimiento de las nuevas tecnologías, a la no discriminación, a la defensa de los derechos humanos, al respeto por el medio ambiente, propiciando el compromiso, la solidaridad, la responsabilidad y el ejercicio de los derechos pero también el cumplimiento de los deberes en el marco de un Estado de Derecho plenamente vigente.**

INFORME

SECRETARÍA TÉCNICA N° 3

HACIA UNA SOCIEDAD MÁS PROSPERA:
CRECIMIENTO SOSTENIDO CON EQUIDAD

El espectro temático que la Comisión del Congreso Ideológico, le asignó a la Secretaría Técnica N° 3 es bien amplio. No podría haber sido de otra manera, la economía es una ciencia social que cruza prácticamente de manera íntegra la sociedad. Bajo esta premisa y a efectos de evitar formular un compendio casi ilegible, la secretaría encaró la tarea exclusivamente desde el punto de vista ideológico en base a principios de identidad y no como un plan de gobierno o un análisis de coyuntura. Así se intentó dejar de lado lo anecdótico o “las medidas” para cada caso, pasando a formular los carriles, la corriente principal de pensamiento, que se entiende del caso para llevar adelante las acciones. Lo anterior no quiere decir que en ciertos aspectos, las propias definiciones de cuál es nuestra postura frente a los temas, no nos conduzcan hacia aspectos prácticos o el análisis de la realidad presente.

La forma de concebir este documento se puede resumir en tres aspectos:

- a. Una base conceptual filosófica y normativa.
- b. Abarcativa de toda la temática.
- c. Consideraciones de orden pragmático, tanto en la aplicación general como en la particular situación de nuestro país.

Como se dijo, si bien no es el propósito ir a los detalles o las políticas concretas, (para eso estará la instancia del programa de gobierno), tampoco puede limitarse a una utópica enumeración de principios básicos y generales bajo los cuáles todo cabe y que, por tanto, no son capaces de definir una línea de acción y trabajo a futuro.

La premisa básica de trabajo es considerar la prosperidad como obvio producto del crecimiento económico. Lo anterior, si bien condición necesaria, no es suficiente. En efecto, si el crecimiento es de corto plazo, o aún en varios períodos de corto plazo, no asegura el desarrollo y menos la equidad en el más profundo de los sentidos de la palabra. En particular, las mejoras en la equidad en plazos cortos (5 a 10 años), pueden resultar meramente estadística y retroceder apenas cambian las condiciones del entorno macroeconómico. Esto es así si no aseguramos las

bases para que el crecimiento se sostenga y fundamentalmente para que las personas puedan valerse de manera íntegra por sus propios medios y proyectar su futuro integradas a la sociedad y el mundo moderno.

Con esta base, el trabajo se dividió en áreas, tratando de aglutinarlas por ejes. Las mismas fueron:

- i. El Estado y el Mercado
 - a. La relación entre el Estado y la Sociedad Civil
 - b. ¿Estado hacedor o regulador?
 - c. La importancia del medio ambiente
- ii. Políticas macroeconómicas
 - a. Fiscal
 - b. Monetaria
- iii. Política Comercial e Inserción Internacional
- iv. Ciencia, tecnología e investigación
- v. Infraestructura
 - a. Física
 - b. Energía
 - c. Telecomunicaciones
 - d. Transporte
- vi. El rol de los sectores productivos

A continuación se describe un extracto de los trabajos y las conclusiones en el marco de las tareas llevadas adelante por la secretaría técnica:

Estado y Mercado

Clásicamente la disyuntiva que plantean la aplicación de Políticas Públicas en general y las referidas a las Finanzas Públicas en particular, se resumen en la tensión entre más equidad, en el sentido de más igualdad en la distribución del ingreso, o más eficiencia, en el sentido de mayor dinamismo de las economías en la generación de prosperidad. La historia enseña que las sociedades suelen moverse en forma pendular, así cuando se paralizan porque la “equidad” destruye las bases del crecimiento y entonces no puede lograr progreso ni tiene recursos para redistribuir, se

va hacia menor intervención y, en sentido contrario, cuando la opulencia es grande y el acceso a sus beneficios no muy extendido, la demanda por el acceso a lo que “todos” ven se hace “insostenible” y es el sector público la herramienta para satisfacerlo.

El Partido Colorado ha tenido una posición tradicional histórica, **“tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”**. El enunciado es sencillo y claro, la práctica es difícil y está en el arte de la política. Este arte no es el mismo con el correr de los tiempos, ciertamente resultaba mucho más fácil cuando no existían los avances tecnológicos actuales, los cambios en las sociedades demoraban décadas y la competencia mundial era reducida.

Hoy, la intervención del Estado la concebimos necesaria para aquellos servicios básicos donde la provisión privada suele ser insuficiente o, directamente, no existe el mecanismo de precios que haga que la misma aparezca. Así la educación, la salud, la justicia, cierto tipo de vivienda, la seguridad interna, la defensa e infraestructura básica son las principales áreas de acción.

Ahora bien, la intervención no necesariamente implica que sea el Estado quien brinde el servicio, sino que pueden darse situaciones donde los contrate al sector privado. Entonces cuando decimos, lo hace el Estado, lo único seguro es que lo financia el mismo y para ello, debe generar una distorsión, equivalente al monto que debe recaudar de impuestos para financiar esa acción.

El tema siempre es fijar el límite a la intervención, donde juegan principios de bienestar general (mayor eficiencia) y aspectos de la persona como tal y algunos derechos inherentes e inalienables de la misma, como el derecho a la intimidad. Es por ello, que necesariamente deben resolverse primero y establecer claramente los límites de injerencia aceptables de la intervención del Estado en determinados aspectos de la economía, aún cuando los mercados no sean perfectos y so pretexto de ello, debe siempre evaluarse previamente en el sentido si la misma mejora o no el bienestar general y esto básicamente se dilucida en fun-

ción de la información que dispondría para la toma de sus decisiones. Si la misma es mayor a la que disponen los particulares, seguramente la intervención mejore el resultado final para la sociedad, de no serlo pasaría exactamente lo contrario y lo mejor es no intrometarse. Fuera de las áreas reseñadas, algunos aspectos son claves en el accionar del Estado

- a. El fomento a la competencia, aún cuando el propio Estado posea empresas que operen en el sector. En todos los lugares donde pueda existir competencia, allí debe promoverse, independientemente si el estado está o no presente en el mercado. Así la desmonopolización de sectores como las telecomunicaciones, energía eléctrica y combustibles son cosas esenciales en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
- b. Definir qué áreas tendrá dominio comercial e industrial. La historia enseña, aquí y en el mundo entero que los mega conglomerados y la proliferación de sectores y emprendimientos son mala cosa. Se debe ser concreto y muy específico.
- c. La definición acerca de las asociaciones con privados y la apertura del capital de las empresas públicas al sector privado.

Al respecto, la Asociación Público-privado parecen más un instrumento para diferir déficits fiscales, que no es algo intrínsecamente bueno o recomendable. Sus contratos son complejos y la práctica ha demostrado que la renegociación de los mismos y el aumento del costo originalmente estimado son moneda corriente. Para un privado no hay nada mejor que su asociación con el Estado; si gana nada sucede, pero si empieza a perder, como el socio (el Estado) también lo hace, tiene la protección que de algún lado, sea por imperio del poder coercitivo de gravar o mediante prebendas o subsidios, su situación mejorará. Ejemplos sobran, aún en el actual Uruguay. El riesgo es que se termine en una suerte de “capitalismo prebendario”, que es el peor de todos los sistemas.

Existe otra manera de hacer lo mismo y es nuestra postura. Lo público es público, regido por el derecho correspondiente y sujeto a los controles que debe tener y lo privado, privado, corriendo los riesgos que deba correr. El entrevero no es recomendable. A su vez, cuando se

hablan de controles, no necesariamente se debe pensar en el actual esquema de contralor previo, un Estado moderno va a control posterior, mediante auditorías severas y castigos acordes.

La apertura del capital de las Empresas Públicas a los privados tiene una serie de ventajas, entre las que se destaca, la dinamización del mercado de valores, casi inexistente en Uruguay y la necesaria profesionalización de las empresas y su gobierno corporativo. Esta forma de ver las cosas no está en contradicción con la manera de encarar las actividades separando lo público de lo privado, porque refiere a situaciones distintas. En la anterior existía un actor de cada lado haciendo la sociedad, aquí existe una empresa y miles de accionistas que, en todo caso le exigirán eficiencia y modernidad.

- d. El rol de las agencias reguladoras. El mismo a nuestro juicio es clave y las agencias deben tener algunas propiedades básicas que hoy no tienen o peor aún, algunas se han conculcado. Su misión es asegurar una competencia clara y transparente, no la preservación o constitución de monopolios.
 - a. Carecer de conflicto de intereses: La Unidad Regulatoria debe ser independiente del Ministerio sectorial o de la Presidencia de la República.
 - b. Nivel técnico con protección de la interferencia política: Situaciones a contemplar: Nombramiento de los Directores con criterios profesionales; Plazos en la práctica independientes del Gobierno, Retención del personal con retribuciones de mercado; Financiamiento por los clientes o empresas reguladas.
 - c. Transparencia: Publicación de las decisiones; Audiencias públicas.
 - d. Responsabilidad: Apelación de las decisiones; Presupuestos aprobados por el Parlamento; Destitución por causal.

Sociedad Civil

El relacionamiento con la sociedad civil se ha convertido en parte clave de cualquier Estado. Numerosos actores, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, han ganado terreno y sus funciones, influencia, pensamiento y acción no pueden dejarse de lado. Las transformaciones

sociales que el avance tecnológico trajo, complejizaron la trama social y hay que responder con una postura clara, filosófica y no ad - hoc.

La razón de tener dicha postura es porque la manera de gestionar las políticas públicas que cada vez son más interdependientes y complejas, con un número creciente de actores de estatuto diferentes, donde la “densidad” técnica requerida aumenta y las fronteras se vuelven a veces difusas, lo requieren. Sin una definición clara, la casuística dominará en poco tiempo la escena y las decisiones contradictorias, serán diarias. Los problemas a afrontar por los gobiernos son cada vez más numerosos y variados.

Ante ello:

- a. Los gobiernos y las administraciones públicas deben basar sus actuaciones no sólo en la autoridad y la sanción sino también en el convencimiento y la cooperación con múltiples actores para gestionar las políticas públicas (la definición de problemas, la toma de decisiones y su ejecución).
- b. Esto implica el reconocimiento que los mismos pueden aportar, desde su ámbito, información y conocimiento relevante.
- c. El buen uso de la información que los grupos de interés tienen, se vuelve clave.
- d. La total separación de cualquier órgano estatal de órganos o representantes de la sociedad civil es vital. No concebimos a representantes de tal o cual organización que como tales, integren órganos de gobierno. Lo anterior no sólo constituye un resabio de sociedades totalitarias, sino que su resultado es muy malo en términos de calidad de las políticas. Lo anterior, no obsta al uso de lo expuesto en c), muy posiblemente desde el sector público se deba consultar a los actores, obtener información y recabar experiencia práctica, previo a la formulación de políticas.

En resumen, el accionar del gobierno es responsabilidad del mismo y no puede tener en su seno representantes corporativos con voz y voto. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que los grupos de interés especial puedan informar e incluso asesorar a las autoridades para la toma de decisiones dentro de su esfera de actuación.

Medio Ambiente

El desarrollo sostenible, entendiendo por tal aquel que satisface las necesidades del presente sin afectar la capacidad de hacerlo por las generaciones futuras, debe ser un objetivo de la acción política. Ese desarrollo sostenible es el equilibrio de las tensiones derivadas del desarrollo económico, del desarrollo social y de la protección ambiental.

Nuestra Constitución¹ consagra el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano al declarar de interés general la protección ambiental. Al establecer que las personas deberán abstenerse de afectar el ambiente, se implica personas físicas y jurídicas, públicas y privadas.

En ese sentido, es una tarea esencial del Estado el control para que las actividades de las personas no afecten el ambiente, o mejor dicho no lo afecten de manera tal que permita que quienes nos sucedan puedan disfrutarlo.

La declaración de interés general de la protección del ambiente implica la posibilidad de limitar derechos de los ciudadanos. En esa medida, parece claro que se debe ser muy cauto para que esa limitación sea mínima: tanta libertad como se pueda y tanta limitación como sea necesaria. Así se tiene que la fijación y difusión de las “reglas de juego” desde el Estado, resulta un elemento indispensable tanto para la equidad en el tratamiento de los administrados como para facilitar la toma de decisiones de los actores del desarrollo. En este sentido, la determinación de estándares apropiados al medio ambiente para todos los tipos de emisiones al ambiente es primordial.

El derecho de los ciudadanos a la participación en la gestión ambiental, es crucial y requiere la generación de reglas y espacios apropiados para su desarrollo, así como información ambiental accesible. Es responsabilidad del Estado, poner a disposición de los ciudadanos información ambiental adecuada y de buena calidad.

1. Inciso 1º del art. 47 de la Constitución de la República: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.”

Políticas Macroeconómicas

Las políticas macro clásicas son la fiscal, el manejo del gasto público y los impuestos, y la monetaria - cambiaria, o sea el manejo de la cantidad de dinero y el régimen cambiario adoptado.

Los principios rectores de la acción se basan siempre en la política fiscal, que debe asegurar la estabilidad de largo plazo. Es ésta política la verdadera ancla de cualquier “modelo económico” como suele llamársele. La estabilidad implica que no haya que recurrir a la inflación para financiar el gasto público y con ello, sentar las bases para tener moneda propia. Esto es, el país debe definir una regla fiscal de estabilidad con el objetivo de reducir su endeudamiento a mediano y largo plazo y que éste tenga un guarismo que nos ponga a la suficiente distancia de tener problemas ante los inevitables shocks que sufre la economía. Así, el resultado fiscal deberá siempre fijarse ajustado por el ciclo económico y en un valor tal que nos asegure el citado objetivo. Tener una regla fiscal es lo primero.

A su vez, todo país, pero uno de ingreso medio con más razón, también debe definir un gasto público agregado máximo en relación a su PBI, que debe ser consistente con su renta per – cápita, de manera que los impuestos necesarios para solventarlo no ahoguen a la población. La razón es sencilla de comprender, a medida que los ingresos de la población crecen a los habitantes les resulta “más fácil” enfrentar el pago de impuestos, así si en determinado país el ingreso per – cápita es de 50, y en otro de 15, a los habitantes del segundo país, les será mucho más pesado pagar el 35% de su ingreso de impuestos que a los del primero.

En la actualidad resulta claro que en Uruguay la carga tributaria está por encima de lo razonable dado el ingreso de la población y los servicios que se reciben desde el Estado. Esta variable, - los servicios que se reciben-, tampoco debe desdeñarse a la hora del diseño, porque una buena provisión de servicios públicos en educación, salud, seguridad, limpieza, infraestructura y alumbrado, entre otros, hace que los privados no deban de pagarlos de su propio bolsillo y entonces no vean todos los impuestos como tales o, alternativamente, no perciban esas erogacio-

nes que deben hacer como un impuesto más. Lo segundo es entonces, definir el nivel de impuestos en relación al ingreso global, adecuado a la realidad.

El tercer aspecto es que la política fiscal también incluye la asignación del gasto público. Al respecto es imperiosa una mayor participación de las inversiones de base.

Respecto de la política monetaria, la misma debe asegurar que la moneda local no pierda valor, es decir evitar que la inflación termine destruyendo nuestra moneda. Es claro que en buena parte esto no depende exclusivamente del Banco Central sino que es la política fiscal la que domina a largo plazo este objetivo. En efecto, si el país tienen (tiene) déficits fiscales recurrentes y elevados, necesariamente se terminará financiando los mismos con emisión de dinero y ésta corroyendo el valor de la moneda. De todas maneras nuestra postura es a favor de un Banco Central independiente que pueda manejar la cantidad de dinero y contribuya no sólo a la estabilidad monetaria, sino, en la medida que pueda, a moderar la profundidad de los ciclos económicos.

El sistema cambiario óptimo o “mejor” está demostrado que no existe para todas las circunstancias y por lo tanto siempre hay que adaptarse a la realidad imperante.

Política Comercial e Inserción Internacional

La orientación de la política comercial y de inserción en el mundo se basa en los siguientes principios básicos:

- Estabilidad de las reglas del juego;
- Liberalización comercial y apertura económica;
- Libertad de exportación e importación;
- No discriminación entre el inversor extranjero y el nacional;
- Respeto a los compromisos asumidos en la OMC.

El objetivo final, la prosperidad, se sustenta en el crecimiento de los di-

ferentes sectores de la economía a través de la inserción internacional del país y la implementación de las medidas necesarias para la modernización de la economía.

Contrariamente a lo que se suele suponer, la estructura arancelaria y la política comercial no son un instrumento de recaudación sino de asignación de recursos productivos y una correcta política es absolutamente clave para la lograr la mayor eficiencia en la asignación interna de estos recursos productivos. Por tanto la estabilidad es un factor primordial, las decisiones de consumo e inversión sólo se toman de manera correcta si tal permanencia existe. Los golpes de efecto, las aperturas y cierres, los obstáculos y restricciones, aunque sean transitorios, introducen ruidos y generan señales muy poco propicias para el desarrollo.

Para un país de las dimensiones de Uruguay, donde el crecimiento depende de su sector externo, la prioridad es exportar y por tanto no deberán aplicarse medidas defensivas a la importación de productos. Cerrar un mercado interno reducido, no es solución para las producciones nacionales, ya que no permite su crecimiento.

En materia de apoyo al sector exportador debe continuarse con aquellos incentivos de índole fiscal que promueven – en condiciones no discriminatorias - la competitividad del sector externo, esto es, régimen de admisión temporaria, de insumos agropecuarios y de devolución de impuestos indirectos.

El desarrollo económico y social del Uruguay requiere de una estrategia continua de presencia activa, permanente y coordinada en todos los escenarios de negociación, tanto a nivel bilateral, como regional y multilateral. Esta postura está sustentada en el convencimiento que **crecimiento e inversión están indisolublemente vinculados al comercio** y en ello la dimensión del mercado juega un rol fundamental. La historia enseña del desarrollo de determinadas comunidades y pueblos en base al comercio, desde los Fenicios, los Chinos, el renacimiento en el norte de Italia o la liga Hanseática.

Como lógica consecuencia el acceso a otros mercados resulta fundamental, por lo que los acuerdos comerciales constituyen el camino eficaz para lograr la necesaria apertura del comercio con otros países en condiciones preferenciales. Así la búsqueda de acuerdos de libre comercio y la firma de éstos y Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, debe ser una de las prioridades de la política.

Educación, Ciencia, Tecnología e Investigación

No descubrimos nada si decimos que es ésta la clave del desarrollo y la equidad. Sólo una población con las habilidades adecuadas al mundo actual puede integrarse al mismo y ganar con su propio esfuerzo un ingreso acorde. Los principios Varelianos están totalmente vigentes, pero los contenidos han cambiado, cambian y cambiarán a ritmo cada vez mayor; adaptarse a ello es obligación de las autoridades por encima de cualquier obstáculo.

Ciencia, tecnología, investigación e innovación resultan temas centrales cuando pensamos en el futuro de nuestro país. La generación de conocimiento, su difusión y aplicación en todos los ámbitos son actividades esenciales para el progreso de la sociedad.

Hoy la generación de riqueza y la mejora de la calidad de vida, no sólo material, sino de comodidades básicas están asociadas a estos aspectos.

Para ello debemos:

- a. incorporar la innovación como una actividad sistemática para el desarrollo de su sector productivo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Una cultura científica, tecnológica e innovadora permite mejorar la competitividad del país y su inserción a nivel internacional.
- b. Lograr la cooperación entre el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido productivo.
- c. La propuesta a largo plazo supone:
 - a. el diseño y la implementación de un modelo de políticas públicas de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación basado

en la configuración dinámica del conocimiento, con combinación de políticas que tengan en cuenta las especificidades de sectores y actores, capaces de superar las fronteras administrativas nacionales y regionales.

- b. Reforzar la autonomía de opciones y decisiones en la incorporación de tecnología, en el aprovechamiento de recursos productivos y en materia de desarrollo.
- c. Coordinar las acciones entre las actividades públicas y privadas.
- d. Establecer vínculos ágiles con los centros regionales y mundiales de generación de tecnología e investigación que permitan la actualización de los técnicos uruguayos y la incorporación de conocimientos con criterios críticos, consolidando la autonomía de las decisiones nacionales sobre bases realistas.
- e. Facilitar el acceso a la educación, formación y actualización a distancia.

Infraestructura

La base de acción parte de un hecho incontrastable, un reciente estudio de la CEPAL nos muestra que la inversión en Uruguay, pese a que ha crecido, no lo ha hecho por encima del resto de los países de la región. Es más, en los últimos 5 años lo ha hecho por debajo de Brasil, Argentina y Chile. A su vez, la participación de la inversión uruguaya en el total de los países de América Latina es hoy la misma que a principios de los noventa y bien por debajo de 1995 – 2000.

Lo anterior implica que todo el proceso al que estamos asistiendo se basa en una ola gigantesca pero que no hemos dado pasos para avanzar por sobre el resto, o en todo caso, el resto lo ha hecho mejor que nosotros. La experiencia mundial demuestra que la disponibilidad de infraestructura abundante mejora la eficiencia económica y con ello aumenta el producto potencial de la economía.

Nuestras conclusiones apuntan a que el Estado debe aumentar sustancialmente su volumen de inversión en infraestructura física básica, carreteras, puentes, caminería y dragado. A la vez, debe explorar las posi-

bilidades de conceder a privados el manejo y la construcción de puertos, así como las vías férreas. En caso de no ser posible estas concesiones, deberá invertir en ello.

En una economía moderna, la infraestructura de telecomunicaciones y el suministro de energía son claves. En estos sectores se debe promover la competencia con y entre privados. Para ello se deben liberalizar los sectores.

Aunque no pertenece a este capítulo, debemos mencionar que la competencia en el sector combustibles, transporte y logística, es clave en el desarrollo del país y debe fomentarse mediante las políticas adecuadas. Entonces, la filosofía es que el sector público debe invertir recursos de manera abundante para generar infraestructura de base donde el sector privado no lo hace porque no existe un mecanismo de precios que lo convierta en una inversión rentable. Esta inversión debe ser tal que permita su utilización a bajo costo por el sector privado, de manera de mejorarle su capacidad de competencia frente al resto del mundo y con ello, elevar las posibilidades de crecimiento. A su vez, en los sectores donde el sector privado puede generar la infraestructura, debe fomentar la competencia y dar las condiciones para que la misma se haga.

El rol de los sectores productivos

Las bases de acción consideran a todos los sectores importantes. Es cierto, algunos tienen más peso que otros, pero no debe ser el Estado quien decida la suerte de unos y la penuria de otros. El agro, la industria, el comercio, el turismo y los servicios, cualquiera sean éstos, deben recibir un trato igualitario. La desigualdad implícitamente conlleva a que uno “carga” con el otro.

Lo anterior no implica que no existan leyes de promoción e incentivos, pero estas o bien deben ser generales en un corte horizontal a todos los sectores, o se brindan para una actividad específica donde se entienda que existe gran potencial a desarrollar, en ningún caso se puede hablar de una empresa o un conjunto de empresas. Los ejemplos de marcos

adecuados y apoyo a actividades o sub – sectores son conocidos, nunca pueden ser muchos y su selección será extremadamente cuidadosa.

Conclusiones

Con carácter general el desarrollo requiere:

- Educación.
- Certeza Jurídica.
- Estabilidad de reglas del juego.
- Normas que no discriminen entre sectores o generen privilegios al arbitrio de un burócrata o jerarca de turno.
- Facilidades y garantías para la inversión y el funcionamiento de las empresas, sin importar su tamaño.
- Acceso a una abundante infraestructura a bajo costo.
- Acceso a abundante energía a precios competitivos.
- Acceso a mercados.
- Un proceso sostenido de desarrollo, debe añadir a todo eso capacidad de innovación, información actualizada, y una disposición empresarial “disruptiva”, en el sentido de no pretender seguir haciendo siempre lo mismo.
- Es imprescindible que las relaciones entre empresas y trabajadores (sin perjuicio de la tensión natural de los matices de interés divergente), esté signada por una voluntad recíproca de diálogo y entendimiento.

Esto requiere definir entre otras cosas, a quién vamos a mirar; a quien vamos a tomar como referencia en temas de importancia crítica, admitiendo que antes de “inventar” una solución “a la uruguaya” debemos tomarnos el trabajo de averiguar cómo hacen las cosas los países exitosos a los que nos gustaría parecernos.

El Desarrollo y el Progreso con Equidad, se construye con educación para todos, inversión para todos, estabilidad económica y reglas claras y estables, con alteraciones que meramente son ajustes, predecibles en función de los cambios que el mundo a diario nos depara.

Este es el camino que proponemos transitar para la construcción del futuro.

INFORME

SECRETARÍA TÉCNICA N° 4

HACIA UNA SOCIEDAD MÁS LIBRE:
MEJOR CIUDADANÍA CIVIL,
CONTROL DEL PODER,
SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA

Marco conceptual y alcance de la temática que se aborda

El Congreso Ideológico se constituyó en una verdadera tormenta de ideas que dan cuenta del fermental proceso que el mismo ha disparado, sentando las bases para una rica elaboración programática cuando sea el tiempo de llevarla adelante.

El Partido Colorado y en particular el Batllismo, han sido históricamente el escudo de los débiles. Y donde la libertad es visualizada como una moneda donde sus dos caras forman un binomio inescindible, por un lado los derechos y por el otro las obligaciones y responsabilidades. En este marco, esta Secretaría Técnica se orienta a considerar aquellas cuestiones que sustentan un sistema de seguridad que brinde las mayores y mejores garantías a todos los ciudadanos para el ejercicio de sus libertades, las cuales constituyen la columna vertebral de una sociedad más libre, justa e integrada. La realidad actual lo impone, pero además es un tema que deberá considerarse desde todas las perspectiva para la acción presente y a futuro.

En nuestro partido, la prioridad son los problemas de la gente y lamentablemente, la inseguridad y la delincuencia son la principal preocupación de los uruguayos. En este tema vamos de mal en peor.

En este contexto, la seguridad ciudadana es uno de los temas fundamentales e impostergables. No sólo es posible mejorar la situación de la seguridad pública, sino que además es imperioso hacerlo si realmente deseamos construir un país moderno y avanzado, porque la sociedad no cambiará ni mejorará si se encuentra o se siente en estado de indefensión, entre la incertidumbre y el temor. Hay un fuerte vínculo entre la seguridad pública, las garantías individuales; la formación y el crecimiento de las personas y el desarrollo de las naciones.

Concomitantemente, el sistema de justicia juega un rol fundamental en asegurar los derechos sustanciales de los individuos. Ello obliga a reflexionar sobre: el mejor cumplimiento del principio de la separación de poderes; la no politización de la justicia, y el mejor y mayor desarrollo

de un fortalecimiento institucional de la justicia, entre otros aspectos de importancia a tener en cuenta.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta también, la importancia del acceso a la información; así como el principio de autonomía de las entidades y agencias creadas en ese ámbito; para dotar de mayores garantías al ciudadano en el ejercicio de sus derechos, dar mayor transparencia a la gestión pública, y al poder de contralor (como Acceso a la Información, Habeas Data para la protección de datos personales, de Tecnología de la Información y del Conocimiento, y Promoción y Defensa de la Competencia, entre otras). Y asimismo el rol de protección y defensa de las denominadas “minorías”.

En suma, abordar los nuevos principios del orden garantista moderno de acuerdo con los desarrollos y estándares internacionales existentes, adecuándolos a la realidad nacional.

Seguridad Pública

“La felicidad pública sólo florece y se perpetúa donde cada ciudadano es un ser consciente y libre”

José Batlle y Ordóñez

La seguridad pública es visualizada como la primera de las libertades, por cuanto ella vela y garantiza el ejercicio pleno de las demás libertades. Un Estado que no garantice la seguridad, difícilmente podrá garantizar ninguna de las otras libertades. Ya nuestra Constitución de la República en su artículo 7 inc. 1 ya establece que: “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, (...) y seguridad”. El referido artículo de la Constitución no sólo declara los derechos básicos: manda que el Estado los garantice.

La seguridad ciudadana es un derecho humano que hay que proteger. La violencia y el miedo no permiten vivir con libertad.

El miedo al crimen en nuestra sociedad resulta real y concreto, los ciudadanos se sienten vulnerables, expuestos y desprotegidos frente al delito

y reclaman legítimamente la intervención de los poderes públicos ante las deficiencias del sistema vigente, lo que conduce a la necesidad de promover profundas transformaciones.

La ciudadanía no tolera más violencia delictiva, más copamientos, más rapiñas, más asesinatos, más robos, y exige que el país vuelva a ser un lugar seguro, parte de nuestro orgullo. Reclama salir a la calle sin temor, volver a casa todos los días sanos y salvos, vivir en paz. Demanda a autoridades un verdadero compromiso que hoy no tienen, con el tema seguridad.

Preocupa la situación de crecimiento exponencial, de la sucesión de hechos delictivos y el incremento de la violencia con que se cometen. En el último año se ha percibido un incremento de la violencia, particularmente en la modalidad de rapiñas y copamientos (136 copamientos se registraron tan solo en Montevideo en los períodos enero-noviembre de los últimos tres años).

La seguridad es algo muy serio. No es terreno, ni hay margen, para el voluntarismo o las improvisaciones. La inseguridad puede transformarse en un factor de retroceso nacional. Si se carece de la determinación necesaria como para enfrentar la inseguridad no habrá cambios, ni grandes ni pequeños.

Mucho se habla de la inseguridad que nos rodea en el Uruguay de hoy. Esa inseguridad es una realidad escalofriante. Pero cabe destacar que la inseguridad aumenta acrecidamente si los que toman por la senda del delito hallan que la misma está relativamente despejada.

Para cambiar esta situación se requiere una conjunción de acciones, muchas dependientes del gobierno y otras provenientes de la sociedad, de las ideas y de los comportamientos, y es allí donde nuestro Partido puede brindar aportes.

Es indudable que la ola delictiva tiene muchas causas, económicas, sociales y culturales, pero es igualmente evidente que el país no puede quedarse en la explicación de los hechos, o en los diagnósticos. El Estado

y el Gobierno deben dar respuestas para el ahora; tienen que reaccionar con toda su energía y su inteligencia para recobrar los sentimientos perdidos de seguridad y para devolver a los uruguayos las sensaciones y las realidades de tranquilidad y de paz.

No resulta admisible bajo ningún concepto que con un país en bonanza económica, con el menor índice de desocupación en su historia, con un gobierno que tiene por dos períodos consecutivos, mayoría parlamentaria y que teniendo el mayor presupuesto en seguridad en los últimos 50 años, tener a su vez la peor seguridad de los últimos 50 años.

Es riesgoso advertir que las autoridades se ven superadas o se dejan ganar por la inacción. Eso provoca un profundo sentimiento de indefensión y de inseguridad y finalmente, de desconfianza en el propio Estado y en la Democracia, que hay que revertir.

Reiteramos con énfasis, que la prioridad son los problemas de la gente y a cuyo tope se encuentra la inseguridad. La gente no puede vivir con temor en forma permanente.

En cualquier circunstancia en que se encuentre un país —de crecimiento económico o de recesión— es obligación de los Estados custodiar integridad física, la vida y los bienes de las personas, previniendo y reprimiendo el delito.

Darle un signo ideológico o una explicación sociológica a las actividades delictivas es un acto de ingenuidad, además de ser un ejercicio intelectual inconducente, porque en los hechos fracasan rotundamente al comprobarse que el delito siguió aumentando pese a que Uruguay vivió, como reflejo de la situación internacional, un período de crecimiento económico sostenido y permanente como nunca antes se había dado. Tampoco alcanza con el pretexto de que la sociedad es igualmente violenta en todo el mundo y que el azote de la droga se ha instalado en todo tipo de países. Hay ciudades y regiones que han logrado un abatimiento extraordinario de la ola delictiva, por lo que no tenemos, ni debemos de resignarnos.

No hay que trasladar el problema de la inseguridad a la gente, a la ciudadanía, porque es responsabilidad exclusiva del Estado y en particular del gobierno. La inseguridad no es una sensación, es una realidad. No podemos admitir que la gente se acostumbre, se resigne a la

inseguridad, como algo cotidiano. Asimismo no puede admitirse ningún grado de impunidad de los delincuentes. Tampoco se le puede echar la culpa a la prensa por informar. La censura no es el camino para mejorar la seguridad.

Los gobiernos tienen que dar señales claras de que están dispuestos a combatir al delito. Eso no es de izquierda o de derecha, eso es sentido común. Los países y los Estados tienen que demostrarle a la delincuencia una férrea voluntad colectiva de imponer la ley y de cuidar a las personas. **El centro de atención debe ser: las personas víctimas de la delincuencia; el rescate de los valores; el respeto y aplicación de la autoridad dentro de la ley; el apego por la ley en el estado de derecho; una clara distinción entre el bien y el mal; señales claras hacia la delincuencia con la aplicación de la normativa correspondiente; el rescate del sentido de la autoridad en las fuerzas de seguridad; preservar el control de los espacios públicos y asegurar que no haya territorios inaccesibles para la autoridad policial, entre otros aspectos.**

Las políticas de seguridad deben ser también de larga duración y por lo tanto requiere el acuerdo de todos los Partidos Políticos. Por ende, debe haber perseverancia en la misma dirección, comprometiéndose los Partidos a no cambiar las grandes líneas pactadas, por lo que se hace necesario el acuerdo de éstos, acuerdos – políticos y legislativos - que se deben mantener en el tiempo. Es claro que hay que tener una visión global sobre estas políticas integrales, que incluyan no solo diagnósticos, sino de medidas concretas y adecuadas en materia delictiva, carcelaria, antidrogas, judicial procesal, de recuperación de los menores delincuentes y de combate frontal de las conductas que propician el delito.

Desde este punto de vista, una de las herramientas ante todos esos desafíos es la **expansión de la democracia y la ciudadanía para garantizar un abatimiento de la delincuencia**. Suponiendo que los niveles de inclusión social y económica serán crecientes, una sociedad como la uruguaya tiene que reconstruir el tejido social con un renovado modelo que fortalezca la democracia y la ciudadanía, como garantías de la civilización y de la convivencia armónica.

Mientras tanto las fuerzas de seguridad, tienen que vivir una importante transformación, para dar respuestas más profesionales y eficaces. Con cuadros más motivados, vocacionales y comprometidos con sus funcio-

nes, bien remuneradas y cada vez más profesionales; más eficientes y mejor organizadas.

Transparencia e inclusión social

Además la información oficial debe ser confiable, las estadísticas sobre la cantidad de delitos deben ser incuestionables y la gestión debe ser por ende absolutamente transparente. Se debe agregar que se debería de rendir cuenta de los resultados en la lucha contra el delito, para restaurar la confianza del público.

A partir de nuestra concepción humanista, la educación y la valoración del hombre son un axioma, que no puede resignarse.

Para que haya más democracia, más libertad, mejor seguridad y mejor ciudadanía, gran parte de la respuesta es cultural y educativa. Que el país debe dar a revertir los fenómenos de pérdida de valores y de desintegración social y familiar. El tradicional eje batllista de inclusión social, que comprende los conceptos de educación, empleo, ciudadanía, no ha sido superado por otro modelo de intervención social, y menos por los actuales planes de asistencialismo.

Necesitamos una Policía más efectiva, que atrape y prevenga más delitos. Necesitamos más y mejores leyes que defiendan los DD.HH de los ciudadanos honestos y den más herramientas para combatir el delito. Necesitamos una justicia que aplique mejor las leyes, juzguen y condenen, a más delincuentes.

Necesitamos más y mejores cárceles para que los delincuentes cumplan toda su condena y se intente una rehabilitación.

En suma, parte de los ejes principales, pasan por los conceptos y principios de:

- la prioridad deben ser los problemas de la gente;
- la cooperación y acuerdos interpartidarios que generen políticas de consenso y a largo plazo;
- calidad de los servicios de seguridad;
- privilegiar los derechos humanos de las víctimas;
- profundizar en políticas de educación y rescate de valores (brindan-

- do una buena calidad de la enseñanza, con una educación de valores que hagan respetar los derechos, la tolerancia, y las instituciones);
- restablecimiento del principio de autoridad y verticalidad del mando;
 - mayor transparencia de la gestión;
 - mayor inclusión social y participación ciudadanía;
 - cumplimiento y respeto absoluto de la ley;
 - fuertes políticas de rehabilitación y reinserción;
 - frontal combate a los desarreglos de la convivencia;
 - batallar contra la aceptación o la desidia frente a las inconductas;
 - recuperar la calidad institucional, y reconquistar la confianza en las instituciones (que desde siempre forjaron nuestra realidad y fueron garantes de nuestras libertades);
 - fuerte compromiso y una vocación con la libertad y los derechos (en una realidad que no es amistosa con los valores de la República, que no es amistosa con los valores de la libertad, que no es amistosa con los valores de la moral pública y que no es amistosa con los valores de la Justicia);
 - donde la formalidad de la ley, debe recuperar su peso, y el contenido de la ley, su convicción;
 - apoyo y fortalecimiento de la familia y del ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad en forma responsable;
 - cambio de la ecuación “riesgo/beneficio” a fin de que delinquir deje de ser un beneficio y pase a ser un riesgo. Donde las posibilidades de ser atrapado, sometido a la justicia y sancionado en lo pertinente tenga preeminencia;
 - garantizar el orden público, como el estado de hecho en el que se desarrollan los valores de tranquilidad y seguridad públicas, en la normalidad de la vida corriente, en la protección y el libre ejercicio de los derechos individuales y la guarda de sus intereses;
 - y por último, ser innovadores y creativos en la búsqueda de soluciones, concebida esa creatividad como el proceso de tener ideas originales que tienen valor (Sir. Ken Robinson).

***“Todos los que están agobiados por la injusticia
son nuestros protegidos”***

José Batlle y Ordóñez

Nada más eficaz que la separación de los poderes han creado los hombres, como instrumento constitucional, que permita asegurar y garantizar la libertad y los derechos, así como el asentamiento de una verdadera democracia. Su significado histórico radica precisamente en que tal principio va contra la concentración de los poderes. Una vez establecidos los poderes se sienta el principio de que no hay libertad si alguno de ellos ejerce el otro poder, ya que se desestabiliza el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos dispuesto para su correcto funcionamiento y se pierde la seguridad jurídica. Las sociedades abiertas y plurales de todo Estado Democrático de Derecho exigen seguridad jurídica. Tal seguridad jurídica es el resultado de dos operaciones de carácter complementario; la primera de carácter política, que consiste en la definición del marco jurídico establecido por los representantes de los ciudadanos democráticamente elegidos. Y en segundo lugar, un tiempo jurídico, que consiste en garantizar la aplicación imparcial del marco jurídico previamente establecido.

Los Poderes Legislativos y Ejecutivo son, básicamente, poderes de naturaleza política, que tienen que cumplir una función de tipo político, aunque se traten, de poderes jurídicamente ordenados y controlados. En cuanto al Poder Judicial, nos encontramos ante un poder esencialmente jurídico, que no interviene, ni debe intervenir, en el proceso político y para el cual terminó en el momento en el que el Poder Ejecutivo promulgó la ley. **No es una decisión política lo que el Poder Judicial tiene que aplicar, aunque detrás de cada ley haya una opción política, sino que los jueces y fiscales tienen que limitarse a aplicar una norma jurídica.** La función del Poder Judicial es la de aplicar el derecho creado por los órganos democráticamente legitimados. Por eso debe ser un poder “nulo” políticamente hablando, porque no participa en la creación del derecho donde si pueden existir estos márgenes. Pero se trata al mismo tiempo de un poder esencial para defender a las personas y los derechos.

Su carácter apolítico es el fundamento de su fortaleza jurídica y del valor de cosa juzgada de sus resoluciones. Los potenciales accionantes ante la justicia, al contrario que al político, les interesa una justicia lo más neutral posible, esperan un sistema que les garantice seguridad jurídica. La creencia de que el juez les aplicará la ley, si éste tuerce su espíritu a través de la interpretación e integración para satisfacer preferencias ideológicas, se induce a un deslizamiento de la esfera de intereses que no permite gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la justicia y se crea indefensión.

En el caso de los fiscales, a pesar de ser nombrados y promovidos por el Poder Ejecutivo, estos deben de hacer primar sin fisuras, su independencia técnica. **Si con anterioridad se entendía que únicamente los representantes del pueblo debían velar por la conservación del derecho y de la libertad individual, hoy resulta incuestionable que la seguridad y la libertad logran su mejor protección bajo el amparo de la independencia e imparcialidad de los tribunales como de sus funcionarios administradores de justicia.**

Se ha planteado que debe debatirse, si nuestros principios deben orientarse a evitar la politización de la justicia y su contracara, la judicialización de la política. A que se disipen, las recurrentes interrogantes, acerca de la fundamental imparcialidad que debe exhibir el sistema legal y la apoliticidad de los jueces. **Debe procurarse evitar, un proceso de politización partidaria que ha convertido a la Justicia de otras naciones, en obediente ejecutor de decisiones del Poder Ejecutivo.**

Debe ser también un tema a considerar, la pérdida de nivel técnico que enfrenta la magistratura nacional y la necesidad imperiosa de modernizar algunas estructuras del sistema judicial (desde hace más de 14 años que se debate la instrumentación de un nuevo proceso penal sin éxito). La eficacia en el ejercicio de la independencia del Poder Judicial depende en gran medida, de que los jueces aseguren un alto nivel profesional y una rectitud personal irreproachable.

A su vez, velar contra el negativo fenómeno de la “mediatización” o afán de protagonismo público de algunos actores (entendido como la búsqueda de notoriedad pública personal, ocupando espacios en la agenda informativa de los medios masivos de comunicación). Cabe reseñar sobre este último aspecto que les está expresamente vedado a los Jueces

“expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite”, (Artículo 94/1 de la Ley N° 15.750).

Mientras que otro fenómeno también negativo es un “corporativismo” que pueda conspirar contra el buen funcionamiento del Sistema Judicial. El país corre el riesgo de enfrentar un paulatino menoscabo de la solvencia y confiabilidad del Poder Judicial y la reputación comparativa de nuestra estructura judicial corre serio peligro de deterioro. Debe velarse muy seriamente entonces, por mantener la integridad, imparcialidad, independencia y profesionalidad de nuestros magistrados.

El principio de separación de poderes, el fortalecimiento del sistema jurídico y el perfeccionamiento de sus instituciones, es la protección garantista que debe defenderse a ultranza a efectos de no permitir que el poder judicial se politice, ya sea judicializando asuntos políticos, donde su correcta resolución debe ser en las arenas políticas o a través de la politización judicial que sucede cuando actores judiciales se ven influenciados, afectados o presionados desde el poder político, con efectivo alcance, constituyéndose ellos mismos en actores políticos, con especial atención a los asuntos penales. De otra forma se abandona su más esencial cometido el de impartir justicia neutral, imparcial, honesta, y objetiva.

Acceso a la información pública, transparencia pública y libertad de prensa y medios de comunicación

“En una democracia de verdad, el pueblo no debe conformarse con elegir a sus gobernantes, debe gobernar a sus elegidos”

José Batlle y Ordóñez

La transparencia en procesos de toma de decisiones del Estado, así como la sistemática rendición de cuentas de los agentes públicos —en cualesquiera de los niveles de gobierno— constituyen factores críticos en la construcción de un Estado de Derecho liberal, republicano y democrático, así como en la expansión de los derechos ciudadanos. La transparencia expone al escrutinio público las acciones llevadas a

cabo por los gobernantes y la rendición de cuentas supone la obligación elemental que tiene todo gobernante de informar y explicar sus acciones al soberano, sometiéndose a su imprescindible evaluación. **En suma, se trata de romper o, cuando menos, mitigar la asimetría de información entre gobernantes y gobernados, caldo de cultivo de la corrupción en todas sus expresiones.**

En tal sentido y pese al avance indudable que en su momento supuso la aprobación de la Ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública, globalmente no sólo no se registran mayores progresos sino que, por el contrario, se advierten mayores signos de opacidad en la gestión pública. Desde la concentración de agencias públicas y programas en la Presidencia de la República, que supone su politización implícita así como su exclusión del control parlamentario adecuado.

La propia Ley de Acceso a la Información Pública, más allá del avance ya referido que la misma supuso, adolece de algunos defectos de diseño y carencias que imponen su reformulación. Por un lado, no jerarquiza su autoridad de aplicación, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que se encuentra ubicada en la órbita de la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC). Y la referida AGESIC, a su vez, se encuentra en la Presidencia de la República. Desde el punto de vista del diseño institucional, esa ubicación reduce objetivamente su capacidad de incidir efectivamente en brindar mayor transparencia a las acciones de la Administración. Además, la UAIP carece de facultades sancionatorias, tornando cualquier acción que emprenda en una apelación a la buena voluntad de los controlados.

Por otro lado, la ley apela a la judicialización de los procesos. Ello impone dificultades adicionales a los ciudadanos en materia de costos y tiempo. Y el propio proceso no establece sanciones clara para los organismos renuentes a brindar información y exigiendo que el incumplimiento sea “flagrante”.

Pero la carencia más relevante es, sin lugar a dudas, el desconocimiento de su existencia y de los mecanismos previstos en la misma por parte de la mayor parte de la ciudadanía. De hecho, los recursos que hasta ahora se han interpuesto contra diversos organismos públicos en el marco de la ley, se han circunscrito a organizaciones de la sociedad civil y a perio-

distas. Contar con legislación, por mejor que ésta fuere, pero que rara vez es aplicada y que no es conocida por los ciudadanos, no constituye incentivo alguno para que las agencias públicas y los gobernantes en general se sometan a procesos transparentes y de rendición de cuentas. Por consiguiente, en términos globales, **debe avanzarse hacia un rediseño institucional de todos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el Estado uruguayo, ajustándolo a los estándares internacionales en la materia.**

A su vez, en materia de libertad de prensa y de medios de comunicación, se advierten signos preocupantes. Desde propuestas de imposición sobre el uso de la publicidad oficial, para forzar en los medios contenidos satisfactorios para los gobernantes, hasta la elaboración de políticas poco claras en materia de asignación de frecuencias, así como el diseño de marcos regulatorios que, bajo el título de la “democratización” de los medios, eventualmente terminen estimulando la conformación objetiva de una constelación de medios oficialistas. Por ende como se ha dicho con frecuencia, incluso por parte del propio Presidente de la República, cabe cuestionarse si ¿la mejor ley de medios es que no exista ninguna?. En el único ámbito donde claramente se impone la legislación, es en el otorgamiento de frecuencias del espacio radioeléctrico, a los efectos de garantizar un mecanismo transparente.

Otro punto fundamental vinculado a la información pública y los medios de comunicación, es lo relacionado con la denominada “neutralidad en la red”.

En efecto, a neutralidad equivale a que la red (internet) sea igual para todos sin discriminación alguna, que se dé el mismo tratamiento a todos los paquetes de datos que circulan por ella, con independencia de su contenido, origen y destino, sin que haya prioridad ni jerarquía de unos sobre otros, sin que nadie tenga acceso preferencial. **La neutralidad en la red es un principio que rigió en la misma desde su nacimiento y que debe ser respetado siempre. Por él los proveedores deben dar acceso a los contenidos sin privilegiar a un participante de la red por encima de otro.**

La importancia de este principio deriva de que garantiza la igualdad y la libertad de expresión. Se complementa con la denominada accesibilidad universal que es la posibilidad de que toda la información a la que legal-

mente pueda accederse a través de las redes, se encuentre disponible y utilizable en igualdad de condiciones para todas las personas.

Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido. Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Por ende su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.

El principio de Neutralidad en la Red no es otra cosa que la aplicación de los artículos 7 y 29 de nuestra Constitución Nacional, que nos viene desde el fondo de la historia asegurando la libertad de comunicación por cualquier medio de divulgación.

Lo que significa no permitir que se impongan restricciones o diferencias de acceso que impidan que la información y la comunicación fluyan libremente. Cabe señalar lo que significó recientemente Internet y las redes sociales en la lucha por la libertad de muchos pueblos, en especial del Norte de África y Medio Oriente y en cómo se constituyó en un freno para los malos mandatarios y también en un instrumento de transparencia de la gestión pública. También que la Neutralidad en la Red es precisamente el remedio para cualquier represión que autoridad o persona pueda intentar a la libre transmisión de datos, opiniones e información. Esto fue adelantado hace casi cien años por José Batlle y Ordoñez, quien en premonitorias palabras expresaba: “Creemos, al contrario, que el progreso de las artes y de las ciencias, haciendo cada vez más rápidos y fáciles los medios de comunicación y creando otros nuevos, y la determinación cada vez más perfecta de las relaciones de Justicia entre los hombres, irán abatiendo poco a poco las fronteras hasta no dejar en pie más que una gran república universal (...) Y no se nos diga que la comodidad de las comunicaciones facilitará el alejamiento de los hombres de la tierra nativa, porque esta misma comodidad facilitará su vuelta; ni tampoco se alegue que los lugares tendrán una atracción mucho más grande que otros porque las comunicaciones constantes y el desarrollo de la civilización asemejarán las condiciones de la vida en todas partes”. El Derecho a la información viene referido ya desde 1946 en la Resolución de las Naciones Unidas Número 59 que lo considera un derecho

fundamental cuando expresa: “La libertad de información es un derecho fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas”.

La Libertad de Expresión es uno de los pilares del sistema democrático. Debe por ende preservarse los principios que tornaron a la red de redes en un formidable instrumento de comunicación y libertad en los tiempos en que vivimos.

En suma, reconocer el derecho al acceso universal a la información por medio de Internet y redes públicas informáticas similares, como manifestación del goce al derecho a la libertad y de la libertad de comunicación prevista en los artículos, 7 29, 72 y 332 de la Constitución de la República.

Defensa de las minorías

“Mis pasiones no me perturban ni me ofuscan. Mis ideas de hombre de partido han sido siempre de paz, de concordia y de respeto a todos los derechos”

José Batlle y Ordóñez.

El Batllismo ha sido históricamente el escudo de los más débiles, guiado por la premisa de asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas, más allá de características o situaciones particulares que impliquen directa o indirectamente algún tipo de desventaja en relación a los demás integrantes de la sociedad. Esto se evidencia en que el Batllismo fue un período pródigo en la aprobación de normas legislativas y administrativas de tutela de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los ancianos, de los hijos naturales, de los peones rurales, de los desamparados y, en general, de los sectores más débiles de la sociedad del Uruguay de principios del siglo XX.

Es innegable que la sociedad ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas, y que los problemas a los que debe enfrentarse ya no son los mismos. Incluso podemos asegurar que Uruguay en la actualidad presenta un cierto rezago en cuanto a la adopción de herramientas que permitan avanzar hacia una estructura social y cultural que incluya, represente y reconozca a todos los individuos. Nuestro partido, man-

teniéndose fiel a los principios de justicia social y de amparo a los desprotegidos que durante mucho tiempo le han caracterizado, no puede mantenerse indiferente ante estas nuevas realidades.

Entendemos que la defensa de los derechos humanos de quienes a diario sufren su vulneración, es un estandarte a reivindicarse como elemento de nuestra identidad colorada y Batllista. En este concepto englobamos a colectivos que, de una forma u otra, viven algún tipo de discriminación, estigmatización y/o marginación, constituyéndose en grupos rotulados como “minorías” (sean estas étnicas, sexuales, de discapacitados, de enfermos crónicos, etc.).

Asimismo, en estos aspectos consideramos que el rol de la educación es de vital relevancia, por cuanto es menester reconocer que la aprobación de leyes y medidas administrativas, por sí misma, no es suficiente para modificar patrones sociales y culturales arraigados. Ello tan solo brindaría un marco normativo a partir del cual puede iniciarse el cambio cultural.

Por ello vale la pena subrayar una vez más que cultura y educación juegan un rol de vital relevancia. Las teorías de la socialización sugieren que las personas adquieren los valores básicos en las etapas formativas tempranas, los que luego permanecen relativamente fijos durante la vida adulta. También es necesario tener en cuenta que el cambio cultural es lento, pues precisa del recambio generacional para producirse. Por eso, en el corto plazo, resultan tan relevantes la acción política y las reivindicaciones de organizaciones de la sociedad civil, esa trama de asociaciones ciudadanas imprescindibles a la hora de colocar cuestiones de esta índole en la agenda pública y política.

Recordemos que un partido de vanguardia, como tradicionalmente lo ha sido nuestro Partido Colorado, es aquel que en cuestiones de igualdad de derechos siempre va un paso adelante.

**Moción aprobada en plenario,
que fuera presentada por el congresal Aldo Francescoli:**

La Defensa Nacional comprende hoy aspectos mucho más amplios que los estrictamente militares que han sido tradicionalmente considerados. A fin de contemplar este fenómeno, asegurando a un tiempo la eficiencia de las organizaciones militares , así como su adecuada ubicación en el entramado de las relaciones institucionales de la República, resulta esencial :

- afianzar el “liderazgo estratégico civil” de la Defensa y las FF.AA. , como evolución del concepto mas clásico de simple “control civil de los militares”. Ello requiere a su vez , como “balance entre poderes” reforzar el precepto constitucional que define al Mando Superior de las FF.AA. como una función política, de lo cual no caben dudas a la ciudadanía, pero también siempre colectiva y no exclusiva del Presidente de la República, asunto a menudo no tan claro ni practicado.
- El país ha definido por ley a la Defensa Nacional como un asunto que trasciende a lo militar. No ha variado, sin embargo, en este aspecto el nivel de relacionamiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La ampliación del ámbito de autoridad del Poder Ejecutivo como consecuencia de la ley mencionada , sin un ajuste en las relaciones referidas, puede conducir a un desequilibrio inconveniente . De ello a la tentación autoritaria hay poca distancia, por lo cual se debe propiciar por todos los medios posibles, una mayor participación del Parlamento en los asuntos de la Defensa.
- Fundamentar esencialmente la selección de los mandos de las FF.AA en mecanismos que aseguren la “confianza profesional”, con prioridad sobre los tradicionalmente aplicados en cuanto a “confianza personal”. Múltiples ejemplos mundiales demuestran con claridad que la excelencia profesional incluye como ingrediente propio a la lealtad institucional, en tanto no siempre la confianza

personal viene atada a excelencia profesional que asegure un adecuado ejercicio del mando.

- Conformar a través de la capacitación y el respeto a un escalafón profesional, una “masa crítica” de funcionarios civiles capaces de administrar temas de Defensa , interactuando eficiente y constructivamente con el componente militar en este aspecto.

INFORME SECRETARÍA TÉCNICA N°5

HACIA UNA SOCIEDAD
MÁS JUSTA E INTEGRADA:
Mejor Ciudadanía
y Políticas Sociales

Introducción

Esta secretaría ha tenido como cometido reflexionar sobre el posicionamiento ideológico del Partido para lograr una sociedad más justa e integrada a través de la construcción de una mejor ciudadanía y de políticas sociales.

Al referirnos al concepto de ciudadanía, éste puede definirse como un status jurídico y político que permite al ciudadano ser sujeto de derechos y obligaciones respecto de una colectividad política. Pero en esa misma colectividad política, no podemos desconocer que si bien partimos del presupuesto teórico de que todos los individuos en nuestra sociedad nacen con los mismos derechos, también nacen en diferentes entornos sociales que condicionan en mayor o menor grado el efectivo ejercicio de esos derechos.

En ese sentido, las acciones sociales emprendidas por el Partido Colorado desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX han permitido que el Uruguay haya sido ejemplo a nivel mundial por su posición vanguardista en materia de **equidad, inclusión social y construcción de ciudadanía**.

Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. En este último sentido es en el que cabe hablar claramente de política pública; es decir, de los actos de una autoridad pública frente a un problema o en un sector relevante de su competencia.

Toda política pública apunta a la resolución de un problema de la población, al menos de parte de ella, reconocido como tal en la agenda gubernamental. Representa pues la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social juzgada políticamente como inaceptable.

La noción de política pública hace referencia por tanto, a las interacciones, alianzas y conflictos, en un marco institucional específico, entre los diferentes actores públicos, parapúblicos y privados, para resolver un

problema colectivo que requiere de una acción concertada. La actividad pública se identifica bajo la forma de una sustancia, de un contenido. Se movilizan los recursos para generar resultados o productos.

La actividad pública no es la resultante de respuestas aleatorias sino, al contrario, la expresión de finalidades y de preferencias que el decisor conscientemente, voluntariamente o bajo el peso de las circunstancias, no puede dejar de asumir. Los actos traducen orientaciones, satisfacen intereses, son portadores de ciertos valores, tienden hacia objetivos específicos. En suma, las políticas públicas reflejan una interpretación ideológica de la realidad.

La agenda gubernamental y la respuesta política están basadas, como en un telón de fondo, en una serie de ideales o valores a alcanzar.

El Partido Colorado y el Batllismo han propulsado siempre los siguientes tres pilares básicos: la libertad, el humanismo y la acción del Estado. La **libertad** como base de la dignidad humana, para lo cual es necesario el funcionamiento de una **democracia plena en un Estado de Derecho** que asegure la legalidad y la constitucionalidad. El **humanismo** poniendo al ser humano como centro de la actividad pública lo que conlleva básicamente a la justicia social con las mejores soluciones “para nosotros y nuestros adversarios y para nuestros hijos y los de nuestros adversarios”, es decir en una concepción universalista. **La expresión más acabada del humanismo colorado y Batllista se refleja en la educación pública**, concebida tanto en la inicial, como en la primaria, como en la secundaria como un instrumento igualador de oportunidades y como herramienta de inclusión. El garante de la libertad y del humanismo en la concepción colorado Batllista es el **Estado**, es el conjunto de instituciones públicas, dirigidas por el gobierno de turno, cuyo mandato es hacer efectivas las políticas y los programas que logren esos objetivos y por tanto, ayuden a la ciudadanía a concretar una república modelo, una sociedad feliz. Se trata de un Estado al servicio del ciudadano, limitado en lo que puede realizar por los mandatos explícitos de la ley, frente a un ciudadano libre, a quien sólo le está vedado lo que la ley expresamente prohíbe. **Ni es un Estado totalitario ni tampoco un Estado al servicio de corporaciones**

empresariales o sindicales. Es, repetimos, un Estado al servicio del ciudadano y la sociedad y no a la inversa.

Como ya se establecía en el Programa de Principios del Partido Colorado de 1984, entendemos que la justicia social se logra auténticamente en libertad, democracia y con la plena participación de las personas y grupos sociales en la identificación de objetivos, la planificación de alternativas de acción y la administración de los organismos sectoriales.

Para ello el Partido Colorado otorga especial importancia en un sistema social solidario y participativo a la plena realización de los siguientes derechos:

- a) El derecho a vivir en paz de conformidad con las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, sin violencias ni autoritarismos, en un sistema social solidario y participativo.
- b) El derecho a la educación, haciendo efectiva la igualdad de oportunidades y de resultados.
- c) El derecho a la salud en su dimensión de completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad.
- d) El derecho al trabajo y a un ingreso digno y suficiente.
- e) El derecho a una vivienda adecuada y accesible.
- f) El derecho a acceder a un sistema nacional de seguridad social universal y eficiente.
- g) El derecho a una óptima calidad de vida como objetivo central del proceso de desarrollo económico y social.
- h) El derecho al acceso y participación en el desarrollo de la cultura nacional en todas sus manifestaciones.

Para el Partido Colorado, el pleno goce de estos derechos debe estar acompañado por la vigencia de un conjunto de deberes ineludibles para mantener el equilibrio del sistema social dentro del marco establecido por la Constitución y la ley.

Por último, una política pública se define por su competencia, por los actos y disposiciones que afectan la situación, los intereses y los comportamientos de los administrados.

La identificación de un problema: el sistema político advierte que un problema exige un tratamiento para establecer un proceso de acción por la autoridad pública.

La toma de decisión: el decisor público legítimamente investido elige una solución particular que se convierte en la política del Estado.

La ejecución del programa: una política es aplicada y administrada sobre el terreno. Es la fase ejecutiva.

Una nueva decisión: se produce una evaluación de resultados que desemboca en la renovación, corrección o terminación de la acción emprendida.

En todo caso, esas políticas públicas deberían considerar la necesidad de componer un nuevo equilibrio entre la **“tradición comunitaria”**, cuyo máximo exponente es sin duda Don José Batlle y Ordóñez y el reconocimiento e incorporación de algunos conceptos del liberalismo, como la responsabilidad y el progreso individual.

Para el Partido Colorado y el Batllismo el desarrollo de políticas sociales es una ocupación natural, es parte de su propia esencia, que proviene desde el fondo de su historia, que encontró en José Batlle y Ordóñez su más relevante exponente y que puede resumirse en los dichos de Don Domingo Arena: ***“el gobierno de Batlle podría definirse como un constante esfuerzo para aumentar el bienestar de los desamparados sin el cual le parecía imposible la libertad”***. Batlle (y el Partido Colorado que lideró) puede considerarse como el mayor defensor y realizador de los derechos sociales en América en la primera parte del siglo XX.

El humanismo y la intervención del Estado fueron el punto de partida de las políticas sociales impulsadas por el Partido Colorado. Es un enfoque pragmático, nunca basado en una postura teórica dogmática, lo que lo diferenció de sus antagonistas en la izquierda.

El Partido Colorado es sobre todo un partido de acción política centrado en el individuo y sostenedor de sus libertades, siendo por ende respe-

tuoso de la legalidad. La intención partidaria fue y es la de transmitir la certeza de que **cada persona**, interactuando con el resto de la sociedad en el marco protector del Estado allí donde sea necesario, **puede forjar su propio destino**. Es por ello que en esta concepción, cobra especial relevancia la participación activa de todos y cada uno de los ciudadanos, y para que ello sea posible, debe existir una inclusión efectiva de los mismos a los diferentes planos de la vida democrática.

Toda obra propiciada y realizada por el Estado en materia social debe ser susceptible de influir directamente sobre la familia, teniendo en cuenta que de ella parten y a ella vuelven las políticas sociales realizadas. La promoción de los Derechos Humanos de primera generación, -esto es, los derechos civiles y políticos- inspiró la acción del Partido desde su fundación por don Fructuoso Rivera, y puede verse reflejado en el control de la autoridad mediante la libertad de prensa, derecho celosamente estipulado y respetado por Rivera durante su primer Presidencia.

Los derechos de segunda generación fueron desplegados casi en su totalidad por el Partido Colorado bajo el liderazgo de Batlle y Ordoñez a principios del siglo XX, adelantando el desarrollo social de nuestro país en América y en el mundo. La implantación de estos derechos económicos, sociales y culturales constituyeron el inicio de una época en la historia nacional en el sentido que el Batllismo fue el que implantó el **“estado de bienestar”**, aun en momentos en que esa terminología ni siquiera había sido acuñada.

Es indudable que los llamados **Derechos sociales**: a la seguridad social, a la salud, a la educación, vivienda, seguridad, trabajo, entre otros, constituyen un pilar de la construcción de ciudadanía, y su realización forma parte de la edificación de una sociedad que puede ser más justa e integrada en tanto su universalización y calidad responda, bien a formar al ciudadano, bien a colocarlo en un punto de partida en el cual libremente pueda decidir la forma en que buscará lograr su propia felicidad.

Es por ello que el Partido Colorado **reivindica la asistencia del Estado a los más vulnerables, en su histórica concepción del Partido que es “el escudo de los débiles”, pero condena con la misma determinación**

el asistencialismo, deformación del concepto de asistencia, el que sin contrapartidas, sólo inmoviliza al ciudadano en su propia indefensión haciéndolo rehén de la dádiva del Estado para su subsistencia e impidiendo de esta manera su crecimiento moral, económico y espiritual. Como ya lo establecía el propio General José Gervasio Artigas en el Reglamento de Tierras de 1815: "...los más infelices sean los más privilegiados....si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la del provincia".

No menos importantes son los **Derechos económicos**: punto de partida de la humanización del capitalismo y no de la "lucha de clases", valoración que lo diferencia claramente del marxismo. Así se establecieron entre otros el derecho al trabajo, a la remuneración justa y digna, a la convivencia entre trabajadores y empresarios. Hoy se habla mucho de la cantidad de trabajadores que se inscriben en el Banco de Previsión Social, pero poco de la calidad del trabajo o de la informalidad. Reivindicamos el concepto de la **defensa del trabajo de calidad, y sobre todo la creación de trabajo genuino, fuertemente sustentables más allá de los vaivenes económicos a que estamos expuestos como nación. Por ello, ratificamos la oposición histórica del Batllismo al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que no grava a los que más tienen, sino que a los que más trabajan.**

Respecto a los **Derechos culturales**, al entretenimiento, al esparcimiento, al acceso a actividades culturales, entendemos que los mismos **pueden promoverse desde el Estado, pero por fuera de intereses políticos partidarios. Sólo un amplio abanico de ideas y visiones garantiza la libertad de los ciudadanos.**

Hoy por hoy existe menos confianza en la capacidad y responsabilidad de los ciudadanos y sus familias de lograr su propio desarrollo económico, social y cultural, que la que históricamente tuvo el Partido Colorado y el Batllismo, instalándose un Estado Benefactor basado exclusivamente en transferencias que son posibles en un entorno de crecimiento económico excepcional no potenciando mecanismos que permitan que los beneficiarios puedan desarrollarse por sus propios medios.



Taller en Treinta y Tres



Taller en Florida



Taller en Montevideo



Taller en San José



Taller en Montevideo



Taller en Montevideo



Canelones



Taller en Rivera



Taller en Fray Bentos



Taller en Maldonado



Taller en Tacuarembó



Taller en Montevideo

Melo



Taller en Melo



Taller en Salto



Taller en Melo



Taller en San José



Taller en San José



Taller en Maldonado



Taller en Flores



Taller en Florida



Taller en Minas



Taller en Fray Bentos



Taller en Mercedes



Taller en Minas

Por otra parte, ha aumentado la exclusión social, particularmente en el área metropolitana de Montevideo y el cinturón que lo rodea en los Departamentos de Canelones y San José. La inclusión social de los colorados fue palanqueada mediante una educación universal efectiva que tendiera siempre a elevar el nivel de los más humildes. Y entendemos que ese sigue siendo el camino. Nuestra búsqueda de igualar el punto de partida es y va a ser siempre trabajar para que el menos aplicado se empareje con el que tiene más nivel educativo: siempre procurando que todos tengan mejores oportunidades, nunca igualando para abajo.

El Partido Colorado ha sido un partido liberal en lo político; humanista y tolerante de la diversidad en lo social; en el cual el Estado debe ser ejecutor principal y garante de las políticas públicas y en el que prima la ética de la responsabilidad sobre la ética de la convicción. Es patriota pero no nacionalista, es independiente y abierto al mundo de forma pacífica. Creemos en el republicanismo, donde todos somos ciudadanos iguales ante la ley y tenemos garantías sobre el respeto de nuestros derechos.

La ética de la responsabilidad (M. Weber) designa una conducta que éticamente se orienta por las consecuencias previsibles y no por sus motivaciones. Se contrapone a la ética de la convicción, con la que Weber caracteriza al obrar que se guía por las propias persuusiones valorativas más allá de las consecuencias del comportamiento. En consecuencia, no somos un partido que busca la pureza ideológica sino que promueve sus valores dentro del marco de la realidad objetiva.

Somos un partido reformista, brindando al país un reconocimiento, adelantado en el tiempo, de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, logrados los primeros a través de la historia y los segundos principalmente durante el mandato de don José Batlle y Ordoñez. Más recientemente, somos el Partido que más énfasis ha puesto en lo que se considera un derecho de tercera generación como el cuidado del ambiente, es decir de bienes que son de toda la sociedad (bienes públicos) y de recursos naturales que pueden ser agotados con un uso desmedido (como el suelo y su fertilidad).

Según Jean F. Revel la democracia es la única forma de gobierno con la capacidad de auto-destruirse. Por ello es fundamental transmitir valores democráticos en la conducción del Estado por parte del gobierno. Un sistema democrático que transmita estos valores debe poseer un conjunto claro de normas, con conductas acordes, siendo su principal canal de transmisión la educación. Para que la ciudadanía se desarrolle los ciudadanos deben tener sentido de pertenencia, capacidad y oportunidad de participar y potestad de ejercer sus derechos y también de responder por sus obligaciones. La pobreza extrema y la exclusión dificultan hasta hacer imposible ese desarrollo de la ciudadanía. La defensa de los débiles que hace el Partido Colorado no se basa sólo en la justicia social sino también en el fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia.

Eliminar la pobreza no es un punto de llegada alcanzable en forma absoluta pues la misma es siempre un término relativo. **La eliminación de la pobreza es una búsqueda constante que implica la capacidad de amoldarse a los cambios de las sociedades, partiendo de la base que el capitalismo genera desigualdades.** Entendemos que sí es posible eliminar la exclusión ya que los excluidos, por la causa que fuere, pueden y deben ser incorporados al resto de la sociedad. **Erradicar la exclusión y lograr una sociedad más justa e inclusiva, propendiendo a disminuir la desigualdad, son objetivos fundamentales del Partido Colorado y del Batllismo.**

Y seguiremos siendo el Partido que **promueva la movilidad social ascendente, donde mediante el trabajo y el esfuerzo de cada uno se tenga la posibilidad de lograr la realización personal en base al mérito propio** y no en base a la adhesión a un determinado sector o partido político, o a la dádiva o favor interesado del Estado.

Creemos que el Partido Colorado y el Batllismo han contribuido fuertemente a conformar un país que históricamente se diferenció de los demás de América Latina por su institucionalidad, su madurez política y su progreso social. El ideario Batllista, que muy sintéticamente enfatizó valores como el humanismo, la libertad y el Estado, jugó un papel muy importante en ese logro histórico al armonizarse durante varias déca-

das del siglo XX con los factores que influían sobre una sociedad joven, de emigrantes que encontraban una tierra nueva a desarrollar. Esas circunstancias han cambiado, en algunos aspectos drásticamente por lo que es necesaria una revisión de la vigencia de los valores que guiaron hasta el presente la acción política del partido.

En lo referente al **humanismo** entendemos necesario poner mucho más énfasis en valores que se presentan seriamente amenazados como la **familia**, la **moral**, la **inclusión**, la **vida** y la **convivencia**.

La familia ha variado substancialmente en los últimos 50 años. Hoy en día hay muy distintas variantes de familias, desde las muy extendidas hasta las radicalmente nucleadas. En todas esas variantes la familia continua siendo la unidad básica de convivencia y de crianza de los hijos y por tanto, de transmisión intergeneracional de valores y de mejora de las oportunidades en las nuevas generaciones. **Re-definir la familia, promoverla, protegerla y apoyarla es una tarea esencial para recuperar el sentido humanista de nuestra sociedad.**

Nuestro país, a impulso de nuestro partido, es una sociedad tempranamente secularizada. Las religiones se han diversificado y tienen un influjo limitado en la formulación de patrones sociales de comportamiento. Sin perjuicio de ello Uruguay contó con una moral laica, no religiosa, muy asentada. Esa capacidad básica de distinguir entre el bien y el mal y de conducirse casi siempre de acuerdo al bien se ha deshilachado. El relativismo abrazado casi globalmente en la década del 60 ha tenido un profundo impacto sobre la sociedad uruguaya.

No hay humanismo sin moral, sin la presencia de un patrón de conductas guiado por valores positivos, adoptado sin coerción por la casi totalidad de la sociedad. Y estas conductas deben ser **un imperativo para aquellos que tienen la responsabilidad institucional de conducir los destinos del país**, para que desde su accionar los ciudadanos puedan tener un referente integrador.

Tradicionalmente los uruguayos de distinta capacidad económica, de diferente origen étnico o filiación deportiva, convivíamos civilizadamen-

te sin prestar demasiada atención a los factores que nos diferenciaran. Convivíamos en el barrio, en la escuela, en la plaza o el parque, en la playa, en las canchas de fútbol, en el trabajo, etc. Esa capacidad de minimizar las diferencias, sobre todo las sociales y económicas, ha disminuido en forma muy importante. **Nuestra convivencia no era el resultado de un nacionalismo que creara enemigos comunes sino de una comunión de valores que estaba por encima de las diferencias.** La segregación territorial que ha creado guetos de ricos (countries) y de marginados (asentamientos), particularmente en las áreas urbanas de Montevideo, Canelones y Maldonado, dificultan fuertemente la inclusión y la convivencia civilizada. De la mano de la territorialidad camina la segregación cultural en “planchas” y “chetos”.

Es necesario volver a generar, especialmente a través de la educación, una cultura cívica en base a valores republicanos. En un enfoque más amplio debemos promover la participación activa de los ciudadanos a través del compromiso con la comunidad toda: una verdadera ciudadanía activa, responsable y cuidadosa, basada en el respeto mutuo por la diversidad humana.

El bienestar del ser humano es el fin último de la acción política. La vida humana ha perdido valor en nuestra sociedad. Accidentes laborales y de tránsito, violencia privada y pública, inadecuados cuidados a los privados de libertad, a los ancianos y a los enfermos mentales, es decir a los más débiles, son manifestaciones de una disminución del valor de la vida. El grado de civilización de cualquier sociedad se refleja en cómo ésta trata a los más débiles. El humanismo propuesto por el Partido Colorado y Batllista tiene que promover firmemente la re-valorización de la vida humana, sobretodo de los más débiles, entre los que se cuentan las víctimas de la violencia doméstica y las víctimas de delitos cometidos por una delincuencia que ha perdido cualquier punto de referencia, víctimas a quienes desde nuestra concepción humanista nos vemos en el derecho y obligación de defender.

En lo referente a **la libertad** nos parece necesario garantizar las **libertades cívicas** y el **debido proceso** y re-valorizar la **meritocracia**, el **empren-**

dedurismo y el goce del **progreso personal**. En Uruguay las libertades cívicas están amenazadas no tanto por el Estado en sí, sino por un aparato sindical que actúa protegido por el Estado. La amenaza o el propio uso de la fuerza, el impedir que trabajadores que disienten de las jerarquías gremiales hagan libre uso de su derecho al trabajo, la falta de democracia interna para adoptar decisiones que involucran a grupos amplios de trabajadores que ni siquiera son consultados, hablan de una amenaza grave a la libertad. Para preservar la libertad de los trabajadores es imprescindible cumplir a cabalidad con la reglamentación del derecho de huelga establecido en el artículo 57 de la Constitución.

Respecto de una efectiva **política de género** se debe propiciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos en particular en la actividad política, respetando las normas nacionales así como los tratados internacionales existentes ratificados por el país, removiendo todos los obstáculos que impidan la plena concreción de las disposiciones normativas de aplicación. El Partido Colorado fiel a sus principios y mejores tradiciones es y será un garante en esta materia.

La valoración del mérito personal, de la disposición a arriesgar tiempo y recursos en pos de un emprendimiento y del disfrute del progreso personal ha decaído fuertemente en nuestra sociedad. La Constitución de la República establece como únicos criterios para diferenciar a los ciudadanos ante la ley, la que “surja de los talentos o las virtudes”. La presencia de “estímulos” y “sanciones” ha probado ser un elemento fuertemente dinamizador del progreso social y económico. Debemos respetar la libertad de cada ciudadano de encaminar su talento y virtud en pos de lo que le parezca que le brindará más bienestar (dentro de ciertas normas de comportamiento social) y no detraerle buena parte del resultado de su empeño. **Es necesario y vital re-valorizar a quien se esfuerza, se capacita, es responsable, tiene éxito, como modelos a seguir para obtener una sociedad de progreso y no de estancamiento.**

Es también necesario **re-valorizar no sólo los derechos sino también los deberes que los ciudadanos tenemos frente al Estado**. En muchas instancias el cuidado de lo público, de lo que nos pertenece a todos, es

realizado por dependencias del Estado o por empresas contratadas por éste. **El ideario partidario debe poner énfasis en el cuidado que todos debemos tener ante esos bienes públicos y el respeto hacia el trabajo de quienes lo cuidan.**

Por último, en el marco de este Congreso Ideológico que nos convoca, nos parece adecuado finalizar este documento recordando algunas frases extraídas de uno de los editoriales de “EL DIA” del jueves 7 de septiembre de 1916, respecto a Las Ideas:

“Los partidos, como los hombres, valen por lo que hacen, por lo que piensan, por lo que se proponen hacer.— Y su unidad y su fuerza residen en la unidad y en la fuerza de sus directivas ideológicas.” ... “Nuestra colectividad tiene en su programa, como cláusula esencial, la política de partido y como orientación inequívoca el propósito de realizar grandes ideas progresivas, nobles postulados de libertad, de igualdad, de transformación social.”.... “ De poco o de nada nos valdría el poder, si no tuviéramos aspiraciones e ideas superiores que realizar desde el gobierno!”

“Con nuestras ideas y para nuestras ideas, pues, seguiremos siempre luchando, en nombre de las convicciones propias y del interés nacional.”

Se deja constancia de que en el texto que antecede se incorporaron, en los lugares aprobados por el plenario del Congreso las mociones presentadas por los Congresales Ope Pasquet Iribarne, Andrea Madalena y Walter Martínez.

INFORME SECRETARÍA TÉCNICA N°6

HACIA UN ESTADO MODERNO,
GARANTE DEL DESARROLLO CIUDADANO

“...es necesario levantar un gran interés, un interés superior, el interés de una entidad suficientemente poderosa y suficientemente altruista que sea capaz de dar abrigo a todos los desesperados. Y esa entidad no puede ser otra que el Estado”

Domingo Arena

Para el Partido Colorado y el Batllismo el Estado ha cumplido un rol fundamental en todos los tiempos. Justamente fue a través del mismo que se llevaron adelante las más importantes reformas económicas, políticas y sociales en los siglos XIX y XX, las que transformaron al país en forma significativa y tuvieron a hombres y mujeres de nuestra colectividad al frente de las mismas.

El Estado debe contar con una estructura organizacional adecuada, que le permita cumplir eficaz y eficientemente con sus obligaciones y aprovechar los beneficios de la vida en comunidad, para que los ciudadanos alcancen el bienestar individual, contribuyendo en el fortalecimiento del bien común.

A su vez, la eficiencia de la función pública pasa por la profesionalización de la carrera del funcionario, la reducción de los cargos de confianza, entre otros aspectos que se deben considerar y remarcar como base ideológica de la colectividad.

El Partido Colorado es en los siglos XIX y XX el principal hacedor del Estado. En este siglo y a partir de la globalización y sus consecuencias nos corresponde, a los colorados y batllistas, pensar y proponer los rasgos principales de un Estado para esta época.

“El cambio civilizatorio” significa que los modos de vivir, de producir, de comunicar, de enseñar, entre otros cambios, son distintos respecto a unos años atrás. Ha cambiado el tradicional concepto de soberanía. Potencias económicas, territoriales, poblacionales y militares negocian en igualdad de condiciones con empresas de productos virtuales. Ejemplo reciente de ello es la negociación entre China y Google. Hoy más que nunca los productos inmateriales, como las patentes de invención

y la innovación tecnológica son el rasgo diferenciador entre las potencias adelantadas de las que no lo son. La riqueza ha cambiado, la lista de las personas más ricas la encabezan los innovadores. La pobreza ha cambiado y una de sus expresiones, la exclusión, no se soluciona desde la economía sino desde la cultura y la educación. En consecuencia el Estado para esas realidades debe ser diferente al actual.

Un Estado moderno elabora y ejecuta políticas que facilitan el desenvolvimiento de las empresas en los mercados para lograr el crecimiento económico y la generación de riqueza y asume a las políticas sociales como centro temático del compromiso público. Un Estado moderno asume que las principales fuerzas que afectan a su economía son globales y no locales y que el combate de fondo y permanente es entre el trabajo nacional y el del resto del mundo, superando, de esa forma, el antiguo debate entre “neoliberales” e “intervencionistas”. Un Estado moderno promueve la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructura (vial, energía, telecomunicaciones y puertos) atendiendo desde el Estado lo que la sociedad necesita y no es viable para los privados.

En este sentido se distinguen tres niveles de intervención estatal:

- En el primer nivel -de intervención funcional- se pretende que el sector público asuma la provisión de bienes públicos puros, como ser: defensa, orden público, derechos de propiedad, gestión macroeconómica, prevención de salud pública y protección de los pobres.
- En el segundo nivel – de intervención moderada- el Estado ha de ocuparse de enfrentar las externalidades, la educación básica y la protección del medio ambiente. Asumirá asimismo, la regulación de los monopolios (de servicios públicos y privados) y la defensa de la competencia en el mercado e intentará corregir la información imperfecta (seguros de salud, vida y jubilaciones), ejercer la regulación del sistema financiero, asegurar la protección del consumidor y ofrecer seguros sociales (pensiones con efectos redistributivos, subsidios familiares y seguro de desempleo).
- En el tercer nivel – de intervención dinámica – el Estado se ha de

encargar de la promoción de la actividad privada (fomento de los mercados, iniciativas relativas a todo un sector) y de la redistribución social.

Por todo lo expresado y por otras razones que más adelante se dirán se propone el “Rediseño Institucional del Estado Central”.

Rediseño institucional del Estado Central

El Estado uruguayo posee un diseño institucional que no ha sido fuertemente revisado desde mediados del siglo pasado. Hoy la demanda de servicios y la variedad de intereses presentes en la sociedad refieren a una realidad crecientemente compleja que obliga a los Estados a repensarse para satisfacerlas.

El Partido Colorado tiene una tradición reformista y en función de la misma debe asumir la responsabilidad y enfrentar el desafío de orientar su mirada en el horizonte de las próximas décadas y colocar en el pasado una estructura institucional evidentemente anacrónica.

Todo debe revisarse con el único propósito de devolver a los ciudadanos el control de sus destinos, buscando la inclusión de aquellos más marginales de la sociedad y con menores recursos. El Poder Judicial, el funcionamiento legislativo y sus procedimientos, las instituciones educacionales, los servicios de asistencia social, los servicios públicos, sus bibliotecas y museos, las instituciones municipales y departamentales, los organismos reguladores, los organismos de contralor, la institución presidencial, entre otros.

Se trata de provocar un verdadero paradigma de cambios que habiliten al relanzamiento de un Estado moderno al servicio de la gente, a la vez de que se fortalezca como herramienta fundamental para desarrollar los cambios y las transformaciones que se estimen pertinente realizar en el país.

En tal sentido, se hace imprescindible, mirar al porvenir atendiendo a los

principios que orienten la acción del Estado.

- a) Transparencia.
- b) Rendición de cuentas.
- c) Descentralización.
- d) Participación ciudadana.
- e) Función Regulatoria.
- f) Fortalecimiento de los sistemas de contralor burocráticos.

Transparencia

Posiblemente sea el principio más caro para una buena democracia y sin embargo el más difícil de consolidar. Las razones residen en que el aparato burocrático es portador de un conocimiento técnico específico y superior al del resto de los ciudadanos que produce dentro del mismo el recelo propio de la naturaleza humana para abrir al público el conocimiento que le otorga poder y legitimidad social. Esta tensión entre los representantes populares y los aparatos burocráticos es muy antigua y ya Max Weber a principios del siglo XX había teorizado sobre ello.

Sin embargo no es posible transparentar la acción del Estado si el partido de gobierno no declara la firme convicción de priorizarlo. En su favor hoy dispone de herramientas tecnológicas que facilitan la colocación de la información del Estado en vitrinas virtuales donde los ciudadanos pueden acceder libremente.

La reciente aprobación de la ley de Habeas Data y la ley de Acceso a la Información constituyen un avance, pero menor al que se podría haber implementado ya que la información está accesible mediante complejos procesos jurisdiccionales lo que al igual que otras leyes aprobadas en los últimos gobiernos, son pensadas para la tribuna pero no profundizan en una verdadera garantía de los derechos de los ciudadanos a un libre acceso de la información pública.

Por otra parte, tenemos especialmente en cuenta que el concepto de transparencia no se limita al acceso de la información, sino que tiene una fuerte vinculación también con el conocimiento de los argumentos

que sustentan cualquier política pública. La difusión de los debates en ambientes institucionales ya sea en la esfera ejecutiva cómo en la legislativa habilita a una mayor legitimación de las políticas, cumpliendo con las exigencias de una robusta sociedad republicana. Todos los instrumentos conocidos y cualquier solución que apunte a consolidar una cultura de transparencia pública deben ser incorporados en los futuros programas del Partido Colorado y fomentado en la acción de los demás partidos.

Finalmente, al libre acceso de la información pública y la difusión de los debates constitutivos de las políticas del gobierno debemos reinstaurar el respeto riguroso de los procesos decisorios institucionales previstos en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y en el conjunto de normas que regulan la actividad burocrática de las oficinas públicas, evitando la facilitación de soluciones que se saltean a los mismos en nombre de una ficticia ejecutividad personalista o la apelación de soluciones ad-hoc. Esto habilita a los ciudadanos y a los organismos de contralor, a reconstruir los recorridos transitados por cualquier decisión burocrática generando el ADN de las responsabilidades funcionales de los funcionarios actuantes. El relajamiento de la práctica de éstas rutinas le aportan opacidad e ineficiencia a todo el aparato burocrática y debilita la confianza de los resultados.

El Partido Colorado ha llevado la iniciativa histórica de colocar al Estado al frente de las políticas de integración social, acercándolo a los sectores más desposeídos y es su responsabilidad política aportar la transparencia imprescindible para volver a ponerlo al servicio de todos los ciudadanos y sin distinciones de clase o género alguno.

Rendición de Cuentas

Todos los funcionarios públicos y los representantes populares, desde cualquier punto de trabajo en el que se encuentren deben enfrentar en algún momento una instancia de rendición de cuentas. Todos los bienes y las decisiones en el ámbito estatal le pertenecen a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra sociedad. Dicha rendición debe ser funcional

y/o política. Todos los organismos multilaterales y en general en la mayoría de los gobiernos del mundo se han percatado de la importancia de la accountability para acercar la gestión pública a la sociedad. La mayoría de ellos lo realizan bajo la sensibilidad y la búsqueda de dotar de mayor eficiencia a las administraciones públicas. Sin embargo, **desde nuestra perspectiva republicana, la rendición de cuentas coloca en manos de los reales decisores y dueños de las decisiones de los asuntos públicos: los ciudadanos.** Los administradores sólo ocupan transitoriamente cargos que disponen de responsabilidades y funciones sin importar quién los ejerce. Es un poder atribuido a un cargo y no a una persona, lo que evita el entronizamiento de ciudadanos con mayores recursos de poder que el resto del conjunto de los ciudadanos, garantizando la igualdad de derechos.

Todas las formas de rendición de cuentas pueden ser previstas, pero nadie puede sentirse libre de ellas. Así, los jueces del poder judicial deben someterse al consejo de la judicatura que juzgue técnicamente las sentencias de aquellos, los policías a una policía interna ejecutiva (no meramente sumariante o administrativa) provocarán una reducción y contención de la corrupción, los concursos por oposición cómo único recurso de ascenso en la carrera administrativa se traducirá en un estímulo para el compromiso funcional, etc. Del mismo modo, los representantes electos por la ciudadanía deben tener instancias institucionalizadas y rutinarias de la presentación de sus decisiones y el sometimiento a debates abiertos de los mismos.

La práctica de una cultura de rendición de cuentas es la mejor garantía de consolidar una ciudadanía con igualdad de derechos en la medida que los que disponen de un poder público sean concientes que no le pertenece sino que es un poder delegado o prestado para la implementación de los asuntos públicos.

Como toda política que aspira a la construcción de hábitos sociales incorporados en una expresión cultural debe implementarse progresivamente e integrando su montaje a los propios funcionarios y representantes para que internalicen las bondades de semejantes instituciones.

Por el lado de la ciudadanía, en la medida que la práctica de la rendición de cuentas se universalice otorgará mayor confianza y por lo tanto mayor legitimidad a las decisiones que surjan de los organismos públicos facilitando su acatamiento. La contracara es que las políticas generadas por organismos que cuenten con verdaderas rendiciones de cuentas, precisarán menos de leyes, reglas e imposiciones públicas y alimentará una mayor dosis de confianza en los otros mejorando la calidad de vida social.

Descentralización

La descentralización pública es un pilar de la arquitectura estatal diseñada por el Batllismo.

La implementación reciente de las alcaldías van en un sentido favorable a ésta política, pero así cómo están concebidas resultan tan inocuas, cómo la práctica de los Centros Comunes instaurados en el departamento de Montevideo, lo que ha generado un aumento de la burocracia sin que hayan significado un verdadero avance en el acercamiento de la toma de decisión al ciudadano en general.

El motivo es que la descentralización debe responder a una racionalidad distributiva del poder público y no meramente nominal, que engorda los costos estatales y dificulta la prestación de los servicios afectando la calidad de los mismos. La descentralización no es en definitiva, un mero corrimiento de oficinas, sino que debe llevar consigo la responsabilidad por los servicios que presta.

Por lo tanto, todos los procesos de descentralización deben incorporar la transferencia de recursos económicos, políticos y jurídicos, por lo que la autoridad central debe perder la cuota parte de esos recursos a favor del espacio descentralizado. Todos los renunciamentos de espacios de poder son naturalmente resistidos por quienes los ejercen , por lo que su implementación “real” tiene que venir acompañada de la firme voluntad del partido que la impulsa, para poder sortear los obstáculos que seguramente le presentarán los intereses afectados.

Toda descentralización, importa algún grado de acercamiento de la gestión pública a los ciudadanos y por lo tanto, su promoción es fuertemente recomendable dentro de la sensibilidad republicana que nuestro partido incorpora en sus definiciones estatutarias.

La promoción de la descentralización funcional del Estado en sus diferentes servicios, no implica tomar postura sobre estrategias de privatización o de participación de actores corporativos de ninguna especie. La defensa de éste principio se sustenta en el mejoramiento del relacionamiento del ciudadano con la gestión pública. Un efecto colateral del mismo producirá también la reducción de trámites engorrosos, promoverá la autogestión en algunas áreas, permitirá una modernización de las estructuras y encontrará mayor facilidad para la eficiencia en los servicios que se brindan.

Participación ciudadana

La idea del Estado enraizado consiste en que los Estados conservan su autonomía y su esfera de decisiones pero vinculado al entorno social y a los actores que intervienen en las diferentes arenas políticas. ¿Cuán participativo debe ser un Estado sin que ponga en riesgo su autonomía y por lo tanto predominen los intereses generales? Los dos gobiernos del Frente Amplio se han colocado en un modelo de tipo corporativista. El Estado ha venido siendo cooptado por los intereses corporativos (en éste caso los intereses de clase a partir del poder asignado a los sindicatos en la gestión pública).

No estamos de acuerdo con un Estado perforado por intereses particulares, ideológicos y sectarios.

Hoy existen un conjunto de instituciones en el mundo que dan lugar a un grado de participación ciudadana, que nuestro Partido debe explorar y en el que debe comprometer su mayor energía creativa para facilitarla. Esto porque la participación de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública alimenta la práctica de la virtud cívica mejorando la calidad de-

mocrática de la sociedad en su conjunto. La utilización de las nuevas tecnologías de comunicación es importante para los Estados, y la magnitud de los cambios contemporáneos las hace imprescindibles para su mejor desarrollo. Desde el impulso de Consultas Públicas con tecnologías WEB 2.0 sobre temas de interés colectivo impulsadas por organismos públicos, hasta la implementación de soluciones denominadas e-governance que facilitan los trámites y los vínculos con las oficinas públicas pueden generar instancias de participación directa ciudadana. Su universalización brinda buenas oportunidades para el mejoramiento de la calidad democrática a través de la participación en la acción del Estado.

Función regulatoria del Estado

La regulación debe concebirse como un mecanismo para fomentar la mayor accesibilidad de la información sobre bienes y servicios, proteger a la población o usuarios sobre problemas de calidad o riesgos de los mismos, subsanar fallas de mercado, promover condiciones para una competencia igualitaria y evitar el abuso de posiciones dominantes y no debe concebirse como un medio para favorecer intereses estatales o privados.

Los mercados requieren mayor regulación cuanto más concentrada esté la oferta. Cuando la regulación puede permitir un mercado más competitivo, ese debe ser su foco, en interés de los mayores beneficios accesibles para la sociedad. Cuando la estructura del mercado es tal que por su naturaleza y estructura de costos no admite competencia, la regulación debe enfocarse en proteger a los usuarios y en evitar que el empresario que controla el monopolio natural abuse de su poder de mercado. Es imperioso que un regulador tenga la indispensable independencia y poder para proteger a los usuarios. En consecuencia, jurídicamente por regulación debe entenderse a la actividad normativa en la que el Estado condiciona, corrige, altera los parámetros naturales y espontáneos del mercado, imponiendo exigencias o requisitos a la actuación de los agentes económicos para adecuarla al interés general. Desde el punto de vista de los conceptos económicos, la regulación es un modo de influir sobre el mercado, mediante la creación de un sistema de incentivos

que naturalmente crearía la competencia, guiando o restringiendo las decisiones económicas para conformarlas al interés público, ante la existencia de fallas del mercado.

El regulador debe tener una fuerte y efectiva independencia de actuación respecto del poder político para el cumplimiento de sus funciones. La experiencia uruguaya de progresiva pérdida de independencia y efectividad de la URSEC y URSEA los ha llevado a volverse poco relevantes y confusos en su misión y objetivos. En contraste, ha habido un proceso contrario y elogiable en el caso del Banco Central del Uruguay. La independencia del regulador es una condición del cumplimiento de sus funciones y de la protección de la integridad del mercado y el sistema y en última instancia de los derechos de los usuarios y la población.

El poder político, no obstante abstenerse de interferir en la función regulatoria, debe reservarse la determinación de las políticas de forma de promover el interés colectivo.

La legislación por la que se crea la institucionalidad de la función regulatoria, no puede permitir la confusión entre regulador y prestador ni la confusión entre la actividad política y la función regulatoria. La legislación deberá consagrar en forma clara y contundente el principio de separación de roles dentro del Estado, teniendo como finalidad primaria la protección de los derechos de los consumidores, creando para ello instrumentos caracterizados por la sostenibilidad en el largo plazo, la eficiencia y la equidad.

En definitiva, la regulación debe apoyarse en que un mercado competitivo es preferible a una situación de oligopolio o monopolio, ya sea estatal o privado. Los monopolios u oligopolios privados deben ser objeto de especial vigilancia y control. La regulación, en definitiva tiene por finalidad intervenir en el mercado para evitar excesos y favorecer la equidad.

Fortalecimiento de los sistemas de contralor burocrático

Todas las sociedades deben estar constantemente alertas del control a

las burocracias, por el peligro que significa el poder que detentan. Es un poder legítimamente coactivo, pero que mal ejercido es fuente de todo tipo de desviaciones y el antecedente insoslayable de tiranías mesiánicas o populistas.

Dos instancias caben para la defensa de éste principio: la reinstauración de las instituciones encargadas del contralor público que finamente habían sido diseñadas desde hace largas décadas y la creación de nuevas formas más eficientes para evitar zonas oscuras y discrecionales de los jerarcas de turno.

Una sociedad republicana pugnará siempre por la igualdad de los derechos políticos de sus ciudadanos y el ejercicio de la función pública coloca a algunos hombres con mayores recursos de poder que el resto. El único modo de evitar un mal uso de ese poder es controlándolo. Aquí confluyen las tradiciones liberales con las republicanas. **Todos desconfiamos de los excesos del poder, porque ello siempre significa el cercenamiento del poder de otros. El único modo de garantizarlo es a través del gobierno de las leyes y que estas estén por encima de la discreción de los gobernantes de turno.**

El Estado y las empresas públicas

Finalmente, procede una mención a este tema tan identificado con nuestro Partido.

Las acciones de las empresas públicas siguen estando condicionadas por su contribución a la estabilidad de la economía. En períodos de crisis, por ejemplo en 2002 y 2003 y más recientemente en 2008, con reducciones dramáticas del producto bruto o de shock de precios internacional, la contribución de las empresas públicas a las cuentas fiscales fueron de significativa importancia. En ausencia de esta contribución, la deuda soberana habría ingresado en mayores dificultades de las que se tuvieron que enfrentar. Así, en Uruguay las inversiones de las empresas que proveen una buena parte de la infraestructura y los servicios básicos están condicionadas por factores que no tienen relación con su negocio.

A lo largo de los últimos veinte años mientras Uruguay profundiza su apertura externa y el progreso tecnológico aceleraba la obsolescencia de los monopolios públicos, los problemas de la relación entre el Estado y las empresas de su propiedad fueron emergiendo con mayor claridad. A raíz de ello, parece necesario avanzar en un programa de reformas que permita concentrar a las empresas en la provisión de infraestructura y servicios en cantidad y calidad suficiente a precios internacionalmente competitivos.

En primer lugar deberá encontrarse el equilibrio entre la regla habitual y la excepcional. La habitualidad debe ser que las empresas públicas destinen sus recursos a las inversiones necesarias para mejorar e incrementar sus unidades de negocios. Y la excepcionalidad deberá ser que se solicitará sus contribuciones sólo en los períodos de crisis, cuando todos somos convocados a realizar aportes extraordinarios.

En segundo lugar, es necesario establecer un marco más claro de relacionamiento entre el Estado y sus empresas. La relación entre el Poder Ejecutivo y las empresas Públicas, debería quedar formalizada mediante contratos de gestión que obliguen a sus directorios. Por su parte, los entes reguladores independientes deberían establecer y controlar los estándares de calidad, así como velar por las condiciones de provisión de los servicios. La combinación de lo planteado dejaría a las empresas públicas en mejores condiciones de perseguir libremente sus metas puesto que se reducirían las restricciones exógenas para definir sus inversiones. Por su parte, fortalecería el rol de los reguladores que podrían exigir con mayor autoridad el cumplimiento de las condiciones de prestación, ya que las inversiones de las empresas estarían guiadas estrictamente por decisiones empresariales. Finalmente, el Estado, podría exigir mayor transparencia en la gestión y definir verdaderos mecanismos de evaluación de los resultados.

En tercer lugar, se requiere promover marcos legales que habiliten asociaciones ágiles y transparentes de las empresas públicas con capitales privados. Ello no solamente por razones derivadas de la eficiencia, el know how y el acceso a tecnología, sino especialmente porque la in-

versión en infraestructura y servicios públicos no puede estar atada al espacio fiscal disponible.

En definitiva, las empresas públicas deben contribuir a acelerar la tasa de crecimiento económico del Uruguay y a mejorar de manera sostenida el bienestar de sus habitantes, en el marco de un Estado moderno garante del desarrollo ciudadano.

Finalmente, en el marco de talleres realizados en nuestra secretaría es necesario hacer una mención a **la importancia de la ciudadanía en un estado moderno:**

La construcción de ciudadanía en la época actual constituye un desafío debido a la sociedad global y a que la educación y la política, que fueron las herramientas principales para ello, hoy están en debate. El Estado debe impartir formación ciudadana en el sistema educativo, ello es vital. También, deben hacerlo las familias, los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil. Conocer el idioma, la historia y la geografía nacionales es básico para la formación ciudadana, por allí se comienza. Conocer las reglas de juego democrático, los derechos, los deberes y las responsabilidades de cada uno, es el paso siguiente. A partir de lo anterior es que las personas desarrollan las capacidades necesarias para ejercer los derechos, cumplir con los deberes, asumir sus responsabilidades y participar racionalmente en las decisiones colectivas. La racionalidad colectiva depende de la racionalidad de cada ciudadano. Pese a los riesgos de influencias indebidas, de distorsiones en los contenidos educativos y de sesgos en las visiones de hechos y de concepciones, pensamos que el sistema educativo debe transmitir valores. Es necesario que se enseñe que los gobiernos deben tener límites, que no es por la fuerza ni por el poder económico que se imponen la cosas, que son los culpables y no los inocentes los que deben recibir sanciones.

El valor de la libertad, de la equidad social, de las garantías individuales, de la democracia como sistema de gobierno basado en la soberanía popular, así como los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, en especial el valor de la vida, del trabajo

y de la propiedad son valores que el sistema educativo debe transmitir.

La actividad política también debe contribuir a la construcción de ciudadanía. Cuando es una labor colectiva, en la cual todos los interesados participan, deliberan y deciden sin exclusiones contribuye a formar ciudadanos. Por el contrario, las concepciones basadas en la derrota del “otro”, en las luchas de burgueses contra proletarios o de una raza en contra de otra o en los ideológicamente difusos populismos pero siempre con vencidos y vencedores, con sojuzgantes y sojuzgados, no forman ciudadanos porque esas concepciones dan por resultado sistemas donde no hay personas libres y racionales. **En definitiva, para el Partido Colorado no hay democracia sin ciudadanos y no hay ciudadanos sin democracia liberal.**

Para concluir, recordamos a Domingo Arena:

“...El Partido Colorado tiene una magnífica tradición, pero eso no basta. El Partido que fía demasiado en su tradición puede correr la suerte de esos nobles que fían demasiado en sus pergaminos. El escenario de la democracia se ensancha día a día. Día a día entran en juego fuerzas nuevas, aspiraciones nuevas. Satisfechas las ansias de libertad e igualdad empiezan a dar su nota dominante las ansias de mejoramiento (...) De ahí nuevos horizontes que es necesario escudriñar si no queremos extraviarnos; de ahí nuevas etapas que es necesario correr y correr de prisa si no quedarnos rezagados. ¡ La política como la ciencia, debe de estar en perpetuo movimiento si quiere responder a las necesidades de todos los momentos, y el Partido Colorado que no debe dejarse vencer(...) tiene que estar constantemente alerta, en perpetua vibración(...) Su programa tiene que ser vivo.....”.

INFORME SECRETARÍA TÉCNICA N° 7

HACIA UNA RENOVADA
AGENDA REPUBLICANA:
MEJOR CIUDADANÍA POLÍTICA

1. Nuestro código genético: por una República de ciudadanos

Bien puede decirse que, al igual que para el Uruguay, la valoración por la democracia es consustancial al Partido Colorado. Por su trascendencia, si de defenderla se trata, la democracia requiere que se la repiense en forma permanente procurando siempre su perfeccionamiento en lo concreto y tangible.

La democracia atañe al origen y ejercicio del poder y su alcance se relaciona a las dinámicas propias de la convivencia social, al punto que ha sido posible considerarla un “estilo de vida”. En este sentido, el concepto de ciudadano, como el individuo cuyo estatuto es tal por su integración plena a una comunidad política, es connatural a la democracia. Sin ésta como sistema no habría ciudadanos sino “súbditos” de algún tipo de poder superior al que ni eligieron ni controlan.

El ciudadano, desde esta perspectiva, se ocupa de las cuestiones públicas, especialmente de la determinación de las condiciones que generan y limitan el funcionamiento de la comunidad a la que pertenece y los derechos y obligaciones que por el hecho mismo de integrarla le corresponden. Ese ciudadano, entonces, debe disponer de las mejores circunstancias, oportunidades e instrumentos para que, en igualdad de condiciones con sus pares, pueda: ejercer su derecho a vivir su vida y servir el bien común de las formas que mejor lo entienda, libre de toda sujeción fáctica de carácter religioso, económico, político, cultural o de cualquier naturaleza; participar en los asuntos públicos deliberando y decidiendo sobre los mismos y protegerse ante el uso arbitrario del poder cualquiera fuera su naturaleza. El Partido Colorado viene nuevamente a reivindicar la calidad de ciudadano como la identidad genuina de una comunidad verdaderamente comprometida con su destino.

La idea de República se vincula al concepto de ciudadano de forma indisoluble, por ser al mismo tiempo el material humano que la compone y el objeto de sus postulados. A tal punto esto es así que en nuestra concepción ciudadano y republicano se tornan términos intercambiables. La República promueve los poderes ciudadanos —en su binomio derechos-obligaciones— en toda su extensión y en todos los ámbitos, lo que significa asumir el desafío que implica repensar la ingeniería institucional para que se recoloque al ciudadano en el foco de las políticas

públicas y de la política en general. Al mismo tiempo, la renovación de la agenda vinculada a este desafío supone la recuperación de los valores que fueron la base de la identidad de nuestro país a través de soluciones institucionales que lo viabilicen y que tuvieron al Partido Colorado como promotor incansable.

Los poderes ciudadanos de los que hablamos no se agotan en un voto periódico. Si así fuera se entendería y hasta se podría justificar que el ciudadano se refugie en el ámbito privado con las secuelas de desapego de los asuntos comunes y de desafección respecto a la política, como aún hoy se percibe en ciertos sectores.

El ciudadano que efectivamente goza de poderes es aquel que tiene la facultad de incidir de forma activa sobre el gobierno —más allá de la elección que habilita un mandato o aquella que lo renueva o revoca. Tiene la facultad de controlar a la Administración que gestiona la diversidad de asuntos públicos en su nombre y de hacer lo mismo sobre los representantes a los que eligió pero sin haberles otorgado discrecionalidad ilimitada. Es un ciudadano que está en condiciones de vigilar que el poder de cualquier origen no se desborde y de combatir los poderes de hecho, los intereses facciosos, corporativos o egoístas que nos quitan derechos. Es un ciudadano que cuenta con la oportunidad de disfrutar de condiciones efectivas de participación y que es igual al resto de los ciudadanos en el derecho al voto, en el establecimiento de la agenda política y en la oportunidad de informarse de forma veraz e integral de los asuntos a resolver. La República no es una abstracción. Es el nombre que le damos a la irrevocable reafirmación de nuestros derechos como integrantes de la comunidad ante cualquiera que los pretenda avasallar a través del uso arbitrario de sus atribuciones o de la imposición de privilegios injustos.

El Partido Colorado entiende que el método más fértil para evidenciar las fallas de la sociedad es recurriendo a la perspectiva del ciudadano común, sencillo, que las padece en lo cotidiano y que la mayoría de las veces es una voz ignorada, postergada. Para volver a ser una sociedad integrada, una comunidad entre iguales, se requiere que se superen los déficits institucionales que excluyen a los segmentos vulnerables por distintos motivos.

Los colorados asumimos que todos estos instrumentos son resorte de la

política. No sentimos que deban confiarse a círculos tecnocráticos ni burocráticos, sino depositarse en el poder y en la capacidad de propuesta del propio ciudadano en el pleno ejercicio de sus facultades. La política, que remite a la tramitación de los asuntos colectivos considerándolos desde el todo —no desde el punto de vista de un interés particular o sectorial—, es buscar las formulas de articular los diversos intereses, motivaciones y convicciones presentes en una sociedad. Y ese papel lo juegan los partidos políticos, por excelencia los instrumentos de promoción de ciudadanía.

Es cierto que desde hace años la política viene pasando por un proceso de cambio y recolocación, quizá de restricción. Pero el tiempo desmintió a los agoreros que habían pronosticado un cambio tal que supondría para los partidos una pérdida de sus funciones esenciales como representantes democráticos y garantes del pacto ciudadano. Sin embargo, sin partidos políticos e instituciones sólidas que sean responsables y efectivas ante la ciudadanía, la legitimidad sustantiva de la democracia se vería afectada. La puerta se abriría para demagogos y populistas que creerían posible colocarse por encima de las instituciones, que es lo mismo que sobre los derechos y las garantía de todos.

Nuestro país cuenta con un alto grado de institucionalización. No obstante, si la cuestión no es crearla, sí lo es preservarla. La República de ciudadanos no surge por generación espontánea y no se sostiene sin fortalecerla cada día. El Partido Colorado asume nuevamente la responsabilidad de reencauzar al Uruguay por la senda republicana.

A continuación abordaremos con mayor detenimiento algunos aspectos vinculados al mejoramiento de la ciudadanía política y cuya interrelación resulta ostensible.

2. Diseños institucionales para el control, regulación y dispersión del poder

En cualquier definición mínima, la democracia fundamentalmente es el método por el cual el poder se legitima. Sin embargo, el tema de la legitimidad no acaba en el origen del poder sino que se extiende a su mismo ejercicio en cuanto a su aplicación concreta. El poder —radique donde radique y cualquiera sea su naturaleza, mucho más si no deviene

de la representación democrática— debe ser controlado para garantizar derechos y evitar abusos. Para ello, son vitales la pluralidad y diversificación de los medios de control, la multiplicación de las entidades y asuntos a controlar —incluyendo al que controla— y, especialmente, una ingeniería institucional que haga efectivo el control y lo transparente al conjunto de la ciudadanía a través de mecanismos de rendiciones de cuentas sostenidas en el tiempo.

Para el Partido Colorado, entonces, es necesario, por un lado, mejorar las actuales instituciones de control fortaleciéndolas por la vía de jerarquizarlas institucionalmente, atribuirles mayores facultades, especializarlas por áreas, principalmente en aquellas en que la complejidad actual lo hace imprescindible, y dotarlas de mayores recursos. Es pertinente que se examine a los órganos de control existentes —en su totalidad— procurando encontrar dónde pueden estar fallando y por qué y en qué se pueden mejorar si es que pretendemos que sean más eficientes en sus cometidos. En ese sentido el espectro es amplio, aunque surgen algunos casos que se destacan. Especialmente la necesidad de que se dote de mayores poderes al Tribunal de Cuentas, para que éste no sea —como lo es— frecuentemente ignorado. Entre otros casos también resaltamos la posibilidad de fortalecer los mecanismos de control parlamentario (comisiones investigadoras, pedidos de informes), el repensar el rol de las unidades reguladoras de los servicios públicos y hasta la modificación de la representación en las Juntas Departamentales.

Por otro lado, la creación de nuevos órganos de control es ineludible por la cada vez mayor complejidad de los asuntos públicos. La multiplicación de agencias públicas autónomas, al estilo observatorios por ejemplo, es un camino a recorrer. Estas realizarían un seguimiento bajo estándares preestablecidos a la situación de una determinada área pública, incluyendo a los órganos y organizaciones relacionados: públicos y privados si es el caso, así como sobre cualquier entidad que funcione dentro del derecho público o privado que administre recursos materiales y financieros del Estado, las cuáles, además, no podrían estar eximidas de todos los otros controles institucionales existentes. Su tarea y la amplia divulgación de la misma proporcionarían transparencia a la gestión de los involucrados y brindaría información vital al ciudadano para juzgar el estado de situación de la temática de referencia.

La nueva institucionalidad, que se sumaría a la existente no la sustituye, debería contar con un amplio control parlamentario. En esta línea, el examen institucional del que hablamos debería conducirnos a plantearnos la necesidad de que algunos cargos de relevancia en la Administración pública deban contar con venia parlamentaria con mayorías especiales para su designación. Asimismo, se requeriría, según los casos, desfasar el período para el que fue electo o designado ese cargo de los ciclos de gobierno y establecer incompatibilidades de carácter político, fundamentalmente para la posibilidad de ejercer cargos electivos en el período subsiguiente.

3. Acceso a la información como garantía de control y decisiones responsables

El concepto de República reivindica las capacidades de los individuos y de las comunidades políticas para gobernar sus asuntos sin tutelas de ninguna índole y, como tal, es el anverso de la elitista concepción que sostiene que las cuestiones públicas deben ser manejadas exclusivamente por los “sabios”. Como mínimo esto implica, más allá de un mayor involucramiento, que el ciudadano se encuentre en condiciones de aprobar u objetar el ejercicio del Poder. En consecuencia la disponibilidad, acceso, libertad y pluralidad de información se convierten en prerequisite. Su ausencia es el refugio de ineficientes, deshonestos, demagogos, explotadores y opresores. Apostar a la transparencia en la gestión pública y privada, actos y personas es el remedio que si no elimina la ineficiencia y el abuso, por lo menos acota y responsabiliza. De esta manera, el ciudadano en lugar de mero espectador de decisiones que otros adoptan se convierte en actor. Y del otro lado del mostrador, el representante, el gobernante, puede evadirse de los microclimas que distorsionan la perspectiva.

Sin información la estructuración de la agenda política, es decir, el momento en el cual un tema pasa a la consideración del sistema político, es un proceso donde la desigualdad de poder social domina la escena. La información, por lo demás, enriquece los debates y promueve escenarios deliberativos en los que es más factible recurrir a argumentos racionales que a prejuicios en el intercambio discursivo.

En particular, el Estado es un enorme productor de información que se traduce en poder político. En una República, la misma debe estar disponible a cualquier ciudadano que desee consultarla. Sin embargo, en los hechos, los intereses corporativos y fácticos o las barreras impuestas por algunas autoridades públicas llevan a que el acceso a esa información sea prácticamente imposible. El proceso de transparencia pública requiere de soluciones inteligentes y precisas que desmonten los obstáculos generados artificialmente. El futuro programa y diseño de una política de transparencia deberá ajustar la legislación actual en la materia —en particular desmontando las restricciones al acceso de la información que aún persisten— y enfatizando sobre la necesidad del libre acceso de los ciudadanos a todos los datos que se generen desde el Estado.

La divulgación permanente de esa información, a través de medios de comunicación específicos para ello, se constituye en una obviedad a plasmar. En particular, es adecuado plantearse la existencia de una señal de televisión especialmente destinada a ese fin, junto a otras vías que la tecnología proporcione (como la posibilidad de interactividad con la ciudadanía), precisamente en momentos que la adjudicación de señales digitales de televisión es inminente. La información debería contemplar las resoluciones adoptadas, destinos presupuestales y otros aspectos de funcionamiento de los Poderes de República y de Administración Pública en toda su extensión, incluyendo las observaciones e investigaciones de los propios órganos de control (Tribunal de Cuentas, Auditoría General de la Nación, etc.).

Por último, en tiempos de un desarrollo incuestionable de las tecnologías de la información y de la comunicación —que conlleva tantas oportunidades como desafíos— adquiere relevancia atender el mejoramiento de la calidad democrática a través de derribar todas las barreras —tecnológicas, políticas, legales, corporativas— que se registren para un acceso universal y equitativo a la información.

4. Representación política y régimen electoral

La representación política es la relación que se constituye entre representante y representado, entre el gobernante y el que lo autorizó a gobernar en su nombre. En consecuencia, la representación tiene una

dimensión de legitimación —por la cual se autoriza a gobernar—, una dimensión institucional —por la que se estructura y canaliza la representación— y, por último, una dimensión de comportamiento, relativa al ejercicio de la responsabilidad del representante ante la ciudadanía. Las tres dimensiones deben atenderse si se pretende mejorar la representación política.

La trascendencia de la representación deviene de la complejidad de los asuntos públicos que la institucionalidad debe abordar y en las virtudes claras que posee como instancia de negociación, compromiso, deliberación y amortiguación de conflictos. No obstante, tan importante significación no está exenta de situaciones potencialmente conflictivas. En primer lugar, el representante, por la propia complejidad de los asuntos, difícilmente pueda asumir su función con algo más que orientaciones generales con lo que el margen de discrecionalidad es amplio. En segundo lugar, porque en cualquier caso el representante no sustituye al representado y, en consecuencia, la canalización de intereses y convicciones es una construcción permanente.

Por lo mencionado, la representación supone siempre una relación tensa cuya arquitectura debe repensarse comenzando desde las normas para elegir a representantes, ya que es desde aquellas y no después que se configura el propio sentido de la representación y qué podemos esperar de ella. Una correcta representación del representado —en términos del cumplimiento del mandato que supuestamente efectuó el elector— y qué tipo de relación mantienen entre sí —en el sentido de la cercanía o lejanía entre elector y elegido—, es producto, en gran parte, del régimen electoral. Se impone, entonces, reflexionar sobre cuáles pueden ser las posibles alternativas para elegir con más libertad, información, responsabilidad y capacidad de control a quienes nos vayan a representar, siempre y cuando no se afecte la institucionalización del sistema de partidos.

Lo antedicho no implica oponerse a la participación más directa y sin intermediarios del conjunto de la ciudadanía en las decisiones políticas gubernativas, especialmente aquellas que requieran de la conformidad claramente mayoritaria del soberano o que sólo éste puede y debe laudar. El Partido Colorado entiende que las fórmulas de democracia directa —tanto a nivel nacional, como departamental y local—, sin que ello

signifique perpetuar un estado de asamblea, son otra forma de contribuir a la salud de la democracia representativa.

5. Garantías de gobernabilidad: eficacia y legitimidad

La necesidad de fortalecer el régimen democrático lleva naturalmente a reflexionar sobre la gobernabilidad del sistema. Gobernabilidad significa que el ejercicio del gobierno pueda realizarse con eficacia y legitimidad, con independencia de la dirección que se le imprima. Como tal es resultante de la interacción de un amplio conjunto de factores. Los colorados estamos fuertemente convencidos que en la actualidad si se pudiera hablar de bloqueos a la hora de gobernar, estos no tienen un origen político sino más que nada un origen societal a lo que se le suma un problema de gestión.

En cuanto a lo social, es importante dilucidar cuándo es que se está frente a la necesidad de que se registren altos grados de consenso para poder llevar adelante determinados cursos de acción y cuándo la ingobernabilidad es el resultado de un corporativismo desbocado. En el primer caso, no podría hablarse propiamente de bloqueos sino de una forma más del sistema de pesos y contrapesos. En el caso de nuestro país ésta es una señal de madurez que nos distingue en el concierto mundial y que nos debería continuar distinguiendo. La concentración de poder es el vehículo por el que determinados intereses son privilegiados por sobre otros y por encima del interés público. En el segundo caso, el bloqueo apenas disimula el trasfondo corporativista guiado por el autointerés. El Uruguay los padeció en el pasado —cuando desde la política partidaria, la fuerza política que hoy gobierna los alentaba para sacar réditos electorales— y los padece ahora —cual boomerang que retorno para castigar a sus otrora incitadores. En este caso, la conducción política debe retomar su rol para que la Administración cumpla realmente sus cometidos.

Aunque desapasionadamente es posible estudiar la viabilidad —técnica y política— de introducir reformas o ajustes institucionales, parece necesario por sobre todas las cosas hacer un gran esfuerzo de imaginación a fin de crear mecanismos, actitudes y comportamientos conducentes a la construcción de mayorías maduras, estables y sensibles a las necesi-

dades de la ciudadanía. En este sentido, es imprescindible que se torne factible la concertación de ciertas políticas públicas de largo plazo —las llamadas políticas de Estado— sin perjuicio del partido que esté transitoriamente a la cabeza del Poder Ejecutivo. Con este objetivo, podría ser posible determinar que el ciudadano pudiera elegir cuáles serían esas políticas de Estado, votando según su parecer entre un conjunto de propuestas que en la materia presenten los partidos por separado o en conjunto.

Por otra parte, actualmente tener gobernabilidad también es sinónimo de capacidad de gestionar. Las políticas públicas se traducen en un proceso de adopción de decisiones sobre objetivos, estrategias y el terreno operativo. La gestión del gobierno en sentido amplio pasa por la articulación de estas decisiones en el conjunto de las instituciones. Cualquiera sea la estructura de las instituciones de un gobierno, la gobernabilidad depende en gran medida de la forma cómo se vinculan y ejecutan las decisiones dentro y entre las instituciones, lo que en este presente es un notorio problema para el país.

Asimismo, se requiere profundizar en los procesos de descentralización acercando la toma de decisiones a los involucrados, momento y lugar donde las cosas están sucediendo, lo que se constituye al mismo tiempo en la vía de una saludable participación directa de la ciudadanía y en una sustantiva forma de control. El Partido Colorado manifiesta su voluntad inequívoca de profundizar en el sistema de descentralización territorial fortaleciendo el tercer nivel de gobierno, promoviendo mejoras en la legislación vigente a los efectos de ampliar los cometidos de los gobiernos municipales y garantizarles a los mismos los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado, especialmente para el desarrollo de proyectos surgidos desde lo local.

6. Fortaleza de los partidos políticos para una mejor República

Es frecuente que detrás de la crítica a los partidos políticos, motivada en sus problemas de funcionamiento y en las complejidades de su interacción sistémica, se esconda la intención de desprestigiarlos como representantes naturales de la ciudadanía. Por el contrario, la República requiere que los partidos políticos ejerzan la función de representación

del colectivo ciudadano concebido como tal, imposible de ser reemplazado por la tribalización en sectores de interés que, aunque legítimos, no pueden representar de ningún modo los intereses comunes. Lo que no quita, precisamente, que en el ejercicio de ese rol sea posible juzgar a los estilos, comportamientos y formas de funcionar de los partidos como una de las razones que bien puede justificar el desencanto político. Si los partidos políticos son los principales instrumentos de promoción de la ciudadanía, es a ellos a los que hay que exigirles más respecto a su proceder.

En ese mismo sentido los partidos políticos deben fortalecer su capacidad de representar y mediar correctamente la diversidad de intereses presentes en una estructura social cada vez más compleja; deben reconstituirse como espacios efectivos de integración, articulación y mediación con el Estado; fortalecerse como agentes capaces de percibir y anticipar cambios y tendencias y, por lo tanto, tener la capacidad de generar alternativas válidas. Para ello, los partidos políticos deben concebir su estructura interna, por un lado, para que desde la base sea capaz de canalizar y representar demandas —incluyendo las de base territorial como las nuevas realidades político-administrativas del tercer nivel de gobierno— y, por el otro, para que se profundice en el análisis técnico y en la deliberación ciudadana en procura de la quizá utópica meta de alcanzar las mejores al mismo tiempo que más justas decisiones. Esta tarea, que en rigor le corresponde a todos los partidos, debe encontrar en el Colorado, nuevamente, el que señale el camino.

Un punto que merece particular atención es el financiamiento partidario. La dinámica del sistema democrático demanda en forma creciente que los partidos políticos tengan actividades permanentes, lo que sumado a los eventos electorales hace de la política partidaria una cuestión onerosa. El financiamiento tiene, pues, aristas que exigen fiscalización. Uruguay se ha dado una reciente legislación en la materia que es prudente revisar. Especialmente, estudiando la posibilidad de aumentar el financiamiento público (reduciendo el privado), orientar legalmente la financiación pública para que ésta solvete actividades que fortalezcan la cultura del diálogo y de la investigación y creando una agencia especializada para controlar las finanzas de los partidos, separada de la propiamente electoral con la que hoy se encuentra aunada.

7. Instituciones públicas, partidos políticos y sociedad civil

La sociedad civil —como el conjunto de asociaciones voluntarias originadas en motivaciones, inquietudes e intereses de grupos particulares— configura un sustantivo aporte a la dinámica democrática en cuanto organiza a los ciudadanos por áreas o temas de preocupación concretos. Contribuye con recursos, conocimiento técnico y experiencia a la administración, en una definición amplia, de los asuntos públicos.

Así como la República necesita de partidos políticos fuertes, también necesita de una vigorosa sociedad civil, especialmente como forma de control y dispersión del poder. Partidos políticos sólidos e inclusivos de la vasta pluralidad de actores e intereses de sociedad civil —mientras no se los pretenda cooptar— y una sociedad civil eficiente en su propia esfera, son la ecuación perfecta para obtener un sistema de gobierno más transparente y participativo.

No obstante, la relación de la sociedad civil con las instituciones públicas y los partidos políticos debe fortalecerse siempre y cuando cada actor desempeñe con autonomía el rol que le corresponde. La sociedad civil nunca podrá ser un sustituto de los partidos políticos y la separación entre el Estado y la sociedad civil es una característica central de un orden político democrático.

El Partido Colorado continúa reivindicando la participación de todos los involucrados en los diversos asuntos públicos, conformando en interacción con las instituciones estatales una red de cooperación que priorice las estrategias de gestión por encima de las de presión. En ese sentido, es pertinente continuar con el involucramiento progresivo de la sociedad civil en la gestión pública mientras las decisiones y dirección estén reservadas a los representantes políticos de la sociedad, elegidos en la forma que ella misma se ha dado.

8. Formación de una cultura ciudadana

La ciudadanía supone el ejercicio activo en la vida pública sobre los asuntos que nos son comunes, con la correspondiente atribución de derechos y deberes. Como contrapartida, exige la pertinencia de ciertas

virtudes y valores cívicos, nociones cuasi abandonadas en el lenguaje corriente.

La formación de ciudadanos debe estar destinada a potenciar y fortalecer la concreción y efectividad de esos derechos y deberes y, con ellos como sustento, favorecer la convivencia en comunidad. En otras palabras, generar conductas sociales responsables, consustanciadas con una ética laica de libertad, justicia, legalidad, pluralismo y tolerancia. Un ciudadano que pensando por sí mismo, conozca los valores que deben compartirse y ejercerse y aquellos contras los que hay que resistirse. Más que una participación cotidiana y constante, lo que se precisa es un ciudadano informado y consciente como para hacer valer sus derechos cuando corresponda.

Estos son tiempos que bajo sus diversos nombres —pos materialistas, posmodernos— describen a una cultura en la que los individuos tienden a asumir comportamientos que entran en contradicción con una vida en sociedad. Se dice que no es que falten sino que se ha perdido parte del sentido mismo de los valores, cómo y para qué esto nos orientan en nuestra vida en particular y en relación con los demás. Recuperar ese sentido es una tarea compleja pero impostergable en la que a todos los actores, en mayor o menor medida, les cabe una cuota parte de responsabilidad.

Apelando a la máxima vareliana —la existencia de republicanos como prerequisite de la existencia de una República— es preciso plantearse el análisis de los diversos aspectos atinentes a la formación ciudadana en términos más amplios y concretos. Como, en rigor, la ciudadanía efectiva se construye, la cuestión radica en si actualmente la institucionalidad política genéricamente hablando y los procesos de socialización —entre los que se encuentra la educación pero que no se agotan en ella— están contribuyendo a una efectiva formación de republicanos.

La propia política tiene su rol a cumplir. La ética en la administración de los asuntos públicos, la verdadera apertura a espacios de participación en los partidos políticos (porque la exhortación a participar no tiene efecto si el ciudadano percibe que no va a ser tomado en cuenta), las saludables consultas a la ciudadanía en forma periódica (la democracia no es un gasto) y, especialmente, un debate político apoyado en argumentos que procuren convencer a partir de criterios de justicia y con-

veniencia —en detrimento de la clase de argumentos que sólo buscan denostar para obtener pequeños réditos—, aumentan la calidad de la política y contribuyen decisivamente a la formación ciudadana.

Además, es necesario comprender que la ciudadanía no es sólo una cuestión de formación sino de garantías efectivas de poder ejercer derechos, lo que en situación de vulnerabilidad social puede verse obstaculizado. Las diferencias económicas, sociales y culturales que invalidan la calidad de ciudadano no son admisibles y por lo mismo son barreras a derribar. Asimismo, ninguna situación social puede justificar que el ciudadano no ejerza sus obligaciones que lo vinculan a la vida en comunidad, a su desarrollo e integridad.

9. A modo de cierre: Batlle recuperado

La República de ciudadanos, como en el pasado, como en la actualidad y como lo será en el porvenir, no se obtiene por la mera repetición de un sistema de valores que debería ser común a todos, no se alcanza con sólo la legitimidad procesal de las instituciones y, por supuesto, no se obtiene por el simple recurso de la fuerza. Es el resultado de la compleja interdependencia de cuestiones políticas, económicas y sociales que en el marco de la institucionalidad y la ley, configuran la dosis exacta de estímulo y presión para el pleno desarrollo de una ciudadanía celosa de sus derechos y comprometida con sus responsabilidades.

José Batlle y Ordóñez estaba fuertemente inspirado por este concepto armónico de ciudadanía. Recuperar para nuestro país el sentido de República es recuperar a Don Pepe como guía del camino correcto que, como el tiempo demostró, no es el de aquellos que pretendieron adueñárselo sin haberlo jamás entendido.

INFORME
SECRETARÍA TÉCNICA N°8

URUGUAY EN EL MUNDO
POLÍTICA EXTERIOR

Es imprescindible promover, en todo momento, el respeto al Derecho Internacional vigente y su necesaria renovación, así como la preservación y el afianzamiento de nuestra identidad nacional. Tal como se ha sostenido en otras oportunidades y se ratifica en esta instancia, la vocación internacionalista del Partido Colorado impone que tales objetivos de política exterior se traduzcan en acciones claramente fundamentadas en los principios generales del Derecho Internacional.

Cabe recordar que, desde sus inicios, el Batllismo sostuvo el carácter indivisible de la paz, postulado ético-jurídico que inspiró el proyecto presentado por José Batlle y Ordóñez en La Haya, en 1907, relativo al arbitraje obligatorio y compulsivo de todos los conflictos entre los Estados. Proyecto que, años después, fuera acogido, primero en el Pacto de la Liga de las Naciones, y luego en la actual Carta de las Naciones Unidas, al exigir la solución pacífica de las controversias y la abstención de recurrir a la fuerza.

También desde sus albores el Batllismo, con la fundamental participación de Baltasar Brum, impulsó el desarrollo del orden jurídico regional contribuyendo a la consolidación del panamericanismo.

Por su vocación principista, el Partido ha apoyado y deberá seguir apoyando el cumplimiento estricto del Derecho Internacional, sin cuya vigencia integral no hay convivencia pacífica y justa.

Pero, en el Partido Colorado, se está igualmente convencido de que la paz y la justicia internacionales requieren un esfuerzo permanente en pos de la renovación de las normas internacionales, mediante el perfeccionamiento de las existentes y el desarrollo de otras que erradiquen definitivamente las guerras, los crímenes contra la persona humana y las desigualdades entre naciones o individuos.

A los dos objetivos precedentes debe agregarse otro destinado a asegurar nuestra identidad nacional en el marco de las dinámicas relaciones internacionales, estableciendo una estrategia general y efectiva de Política Exterior para el Uruguay, que permita defender con fundamento, autoridad y presencia nacional suficiente, los altos intereses del país en

el complejo y competitivo contexto internacional en el que vivimos. Entendemos que la fortaleza mayor que puede exhibir Uruguay en las negociaciones internacionales o ante la comunidad de Naciones, se basa fundamentalmente en el manejo de diferentes opciones político-comerciales -culturales y una coherente línea política de promoción de inversiones que otorgue al mundo financiero internacional, la seguridad jurídica de la continuidad en las condiciones de mediano y largo plazo para los capitales que se instalan en Uruguay.

Nuestro país no puede tener dependencia externa en ningún factor que incida o pueda incidir en su desarrollo tanto parcial o sectorial como integral. Se alentarán procesos integracionistas, pero siempre deberá existir la alternativa del auto-abastecimiento o de auto-gestión mínima, indispensables para la supervivencia a factores externos adversos.

La diversificación de los mercados de nuestra oferta exportable no es suficiente para la sustentabilidad del desarrollo del Uruguay. Necesitamos estrategias que nos aseguren el funcionamiento de los factores productivos a pleno y en forma continua, por ejemplo, un Puerto de aguas profundas, que tanto su construcción como funcionamiento no requiera consentimiento ni mandato de terceros países, o el desarrollo de matrices energéticas que permitan también sin interferencias ni permisos de otras naciones, el abastecimiento imprescindible para el desarrollo de la actividad económica del país. Eso nos otorga mayor independencia y soberanía y en consecuencia, mayor poder de negociación en todos los ámbitos.

Ratificamos que la política exterior que el Partido debe impulsar se traducirá en acciones destinadas a exteriorizar la voluntad nacional de continuar viviendo como país, respondiendo al mandato de la historia, con cultura propia e instituciones democráticas, reivindicando la libertad de actuar independientemente.

En tal sentido, se debe reafirmar que el Partido Colorado seguirá trabajando y profundizando con particular énfasis en las ideas e invalorable aportes que prestigiosas figuras de esta colectividad política, durante

más de un siglo, han realizado con su inspiración y talento a la Política Internacional Universal y a la Política Exterior del País, construyendo durante décadas una verdadera Política de Estado.

Leyes sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (abolición de la Pena de Muerte como norma fundamental de respeto a la vida), el Arbitraje, Leyes Laborales de vanguardia a nivel internacional y Libertad de Comercio entre otros, constituyen ejemplos de aportes a un rico patrimonio que se nos ha legado y sobre el que debemos seguir imperativamente trabajando, procurando recuperar aquellos valores que habiéndose degradados, nos han hecho perder identidad como Nación en la comunidad internacional .

Dentro de los objetivos de política general en esta materia, **debemos preservar nuestra soberanía nacional, la independencia nacional, el respeto y apego al estricto cumplimiento de las normas de Derecho Internacional, como forma de reafirmar la personalidad internacional de nuestro País en la comunidad de naciones, procurando a la vez con justicia social, el mayor desarrollo económico del Uruguay.**

Sin perjuicio de mantener la pertinencia del principio de defensa de los Derechos Humanos acorde a los valores que se protegen, debemos ser cuidadosos con instancias técnicas emanadas de órganos cuyas decisiones en esta materia, horaden la soberanía nacional.

Se debe desarrollar un atento seguimiento de la actualidad internacional, a fin de adecuar – en su momento - nuestro programa de Gobierno a una inserción internacional sin dogmatismos, preconceptos ideológicos o que sean producto de la adhesión a determinadas afinidades ideológicas, en síntesis, **una política exterior acorde a los tiempos que vivimos: realista, práctica y dinámica.**

Es necesario profundizar y desarrollar fuera de la región, lazos de amistad y los más amplios y mayores vínculos posibles cualquiera sea su naturaleza, con naciones occidentales las cuales tradicionalmente han sido amigas y aliadas desde siempre de Uruguay y de las cuales nuestro país,

ha heredado parte de su rico patrimonio cultural.

Acorde al precepto constitucional que fue iniciativa del Partido Colorado en 1967, procurar la mayor integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas.

Orientar la política Exterior del país a la revitalización de la ALADI, patrimonio histórico del espíritu integracionista latinoamericano, como forma de generar en la región, oportunidades comerciales a través de la integración económica regional.

Desarrollar por considerarlos estratégicos, los lazos que nos unen con Argentina y Brasil.

Además de destinarle esfuerzos a la UNASUR, otorgarle también particular atención y los mejores esfuerzos al funcionamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Desarrollar una estructura de Política Exterior, capaz de dar seguimiento y buscar oportunidades comerciales y de cooperación con los países que componen los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) cuyo PBI integrado en el 2010 fue del 19.7% del total mundial.

Sin perjuicio de la pérdida de algunas ventajas comparativas en materia comercial, proponer a los demás Estados Partes del Mercosur, pasar a una Zona de Libre Comercio en lugar de la actual Unión Aduanera Imperfecta, como forma de compensar las actuales asimetrías existentes en el bloque y atenuar a la vez, el daño que provoca el incumplimiento de las normas emanadas del Tratado de Asunción.

En este contexto, Uruguay no debe mantenerse exclusivamente vinculado al Mercosur o a través de él con los países que cuentan en las prioridades de los socios mayores o esperar a que estos decidan abrirse al mundo desarrollado, ya que teniendo en cuenta las características de regionalismo abierto en que se desarrollan las acciones de los bloques

económicos, estamos convencidos que el valor estratégico de Uruguay se habrá de potenciar, en la medida que la vinculación con otros países sea lo más amplia posible y preferentemente con aquellos de producciones diversificadas y economías en expansión.

Los tratados de libre comercio proliferan en la actualidad y el estancamiento del multilateralismo llevará, sin dudas, al incremento de los mismos. Ignorar esta realidad, es llegar cada vez más tarde y equivocar el camino.

Mientras el mundo y particularmente varios países de América Latina avanzan en tratados de libre comercio con países y con bloques de otros continentes, el Mercosur permanece ajeno a esta realidad. Uruguay no lo puede estar, de lo contrario está cercenando su desarrollo.

En este sentido, también se estima necesario pensar – entre otras acciones de igual naturaleza - en la posibilidad de proponer a los Gobiernos de Vietnam y la República de Corea los estudios de pre-factibilidad correspondientes, a fin de celebrar Tratados de Libre Comercio con ambos países, procurando recabar de los restantes Estados Partes del Mercosur, su consentimiento igual que se hiciera en el caso de México.

Desarrollar en Vietnam un centro o eje logístico de distribución de la oferta exportable de Uruguay para el Sudeste asiático, que permita cumplir con los importadores de nuestros productos en tiempos tales, que sean competitivos con proveedores similares de esa región o de otras partes del mundo que tienen mayor capacidad logística que Uruguay

Poner énfasis en el valor estratégico de la ubicación geográfica de Uruguay en las negociaciones internacionales, fundamentalmente las que se lleven a cabo con los países asiáticos y los países árabes, como forma de abrir las posibilidades de nuestro país.

Reformulación de la participación de Uruguay en aquellos foros regionales en que claramente existe una duplicación de objetivos y que la inexistencia de resultados concretos y útiles solo provoca frustraciones

y erogaciones innecesarias al Estado uruguayo.

Establecimiento o fortalecimiento en caso de que existan, de una presencia diplomática permanente de Uruguay en organismos u organizaciones internacionales cuyas decisiones afectan directamente al país, ejemplo: OCDE, organización en la cual Brasil y Argentina son miembros.

Desarrollo de una estrategia capaz de captar cooperación internacional teniendo en cuenta la calificación de Uruguay como país de renta media alta, procurando sobre todo, socios que complementen actividades productivas esenciales para el país.

En los análisis que se lleven a cabo sobre la posibilidad de profundizar el desarrollo de energías renovables en el Uruguay, explorar posibilidades de cooperación con países que poseen tecnología de punta en esta materia.

Impulsar el liderazgo regional e internacional del Uruguay en materia medio ambiental, promoviendo encuentros, con el fin de evaluar el actual aprovechamiento de los recursos naturales (particularmente los hídricos) de la Cuenca del Plata y en la Laguna Merín y los grados de sustentabilidad asociados.

Examinar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Uruguay en las Cumbres Internacionales Medio Ambientales desde 1972 (Cumbre de Estocolmo) a la fecha, que permita orientar debidamente a la Política Exterior de nuestro País en esta materia.

Proponer a la autoridad partidaria la creación de un Grupo de Trabajo técnico e interdisciplinario a partir de la culminación del Congreso Ideológico, a efectos de que en el 2013 entregue al Comité Ejecutivo Nacional una detallada investigación sobre la viabilidad del Mercosur, sus alternativas y formato a proponer a los demás Estados Partes a fin de procurar una real y efectiva inserción internacional de nuestro País.

Igualmente, proponer la creación de un Grupo de Trabajo técnico e in-

terdisciplinario a partir de la culminación del Congreso Ideológico, a efectos de que en el 2013 entregue al Comité Ejecutivo Nacional un pormenorizado estudio de la consistencia en calidad como en cantidad de la Oferta exportable del Uruguay.

También, proponer la creación de un Grupo de Trabajo técnico e interdisciplinario a partir de la culminación del Congreso Ideológico, a efectos de que en el 2013 entregue al Comité Ejecutivo Nacional, un detallado análisis del impacto de las normas internacionales vigentes y las en curso de ser aprobadas por la Unión Europea, sobre la carga de carbono que deben contener los productos de la oferta exportable de Uruguay que ingresan o pretenden ingresar a esos mercados. Orientación y educación sobre matrices productivas a desarrollar a fin de ser competitivos y acceder a mercados de alta exigencia que requieren ese tipo de estándares de calidad. A la vez, de un grupo que analice y estudie los efectos jurídicos y políticos que tienen diferentes decisiones o resoluciones de organismos internacionales en el Uruguay y entregue sus conclusiones en el correr del año 2013.

En definitiva, el Partido Colorado ha tenido una política de Estado en materia de inserción externa del país con un rumbo determinado a corto, mediano y largo plazo. Últimamente por el contrario, se ha carecido de ella, primando las motivaciones ideológicas en su vinculación externa, todo lo que ha quedado en evidencia antes hechos de público conocimiento. Retomar la política de nuestro Partido es una de las prioridades en la materia.

Fotos cortesía de Beatriz Bugallo Montaña, Jorge Ruben Castro Latorre, Conrado Rodríguez, Romana Ferrer y Robert Silva. Se terminó de imprimir en Iconoprint en setiembre de 2013. Depósito Legal 362598.

®Partido Colorado. Todos los derechos reservados.